

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA
ESCUELA MULTILINGÜE DE NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES**

**DISERTACION DE GRADO PREVIA A LA OBTENCION DEL
TITULO DE LICENCIADA MULTILINGUE EN NEGOCIOS
Y RELACIONES INTERNACIONALES**

**LOS PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN DE LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS EN
QUITO ENTRE LOS AÑOS 2005 Y 2010 COMO UN MOTIVO PARA SU
REASENTAMIENTO EN ESTADOS UNIDOS**

ADRIANA CRISTINA MONAR SALAZAR

QUITO, 2014

DEDICATORIA

A mi padre, quien con su ejemplo y cariño inculcó en mí el sentido de responsabilidad y excelencia académica y quien siempre será mi modelo a seguir. A mi madre, quien con su amor sin medida ha acompañado cada uno de mis pasos, haciendo más suaves mis caídas y más dulces mis aciertos.

A mi hermana, quien sin darse cuenta se ha convertido para mí en un gran ejemplo de fortaleza. A mi abuelo Marcelo, quien siempre creyó en mí y me apoyo, incluso en secreto, para que pudiera alcanzar mis metas y que desde el cielo me ha dado fuerzas para continuar con mi jornada.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco en primer lugar a Dios por haberme permitido llegar hasta este día. A mi padre, por su ejemplo, inspiración y por haber compartido su tiempo y conocimiento conmigo durante el desarrollo de este trabajo. A mi madre, por su compañía en aquellas noches que parecían interminables, por ser mi guía y mi más grande apoyo. A mi hermana, por todos esos días y noches en que interrumpí sus juegos. A mi abuelo Marcelo, por haber sido una de las principales fuentes de motivación para escoger este camino.

Un agradecimiento muy sincero a mi Directora de Tesis, Ivonne Tellez, por el tiempo, paciencia y esfuerzo dedicados a este trabajo. De la misma manera, quiero agradecer a mis profesores y lectores de esta tesis, la Dra. Linda Arias y el Dr. Gaetano Servidio, por contribuir con sus opiniones y conocimientos a la culminación exitosa de la misma. Al Dr. Telmo Tirado, por haber inculcado en mí hábitos y valores que me han ayudado en todas las esferas de mi vida y por haber sido, a más de un excelente profesor, un gran amigo.

A Erika Barragán, Verónica Jara, Andrea Leoro y a todo el personal del ACNUR Quito por haberme ayudado a moldear este trabajo y por haber contribuido con sus invaluable conocimientos al desarrollo del mismo.

A Johanna Gallardo, por su amistad durante estos 5 años, por sus regaños y por haberme dado ánimo durante esta jornada. A Diana Rojas, por su apoyo, sus consejos de hermana mayor y por haber sido un gran ejemplo de esfuerzo, optimismo e integridad. A mis amigos Robinson Patajalo, Geovanna Velásquez, Carolina Buendía, Elisa Peñaherrera, Erika Montalvo, Diana Tirado, Paola Aldaz y Evelyn Vizcaíno porque su amistad y su cariño me han ayudado a seguir adelante.

Un sentido agradecimiento a Edward, Susan, Lucas y Berkley Gorre por haberme hecho parte de su hermosa familia, por toda su ayuda, paciencia y cariño y, porque a pesar de los años que han pasado continúan siendo una parte muy importante de mi vida. Finalmente, quiero agradecer a Hugo Zumárraga por su paciencia, apoyo e interés en este trabajo.

ÍNDICE

I.	TEMA	1
II.	RESUMEN	1
III.	ABSTRACT	1
IV.	RÉSUMÉ	2
V.	INTRODUCCIÓN	3
CAPITULO I		
CONDICIONES DE VIDA DE LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS EN LA CIUDAD DE QUITO		
1.1.	El acceso a los recursos y servicios básicos para su desarrollo	7
1.1.1.	La inseguridad alimentaria y los problemas de salud de los refugiados	7
1.1.2.	Educación: una necesidad de todos, sin embargo sigue siendo un privilegio	11
1.1.3.	¿Dónde viven los refugiados colombianos?	13
1.2.	La búsqueda de nuevas fuentes de sustento	16
1.2.1.	Precarización del trabajo	16
1.2.2.	Los colombianos son buenos trabajadores	19
1.2.3.	Los colombianos como actores que limitan el acceso al trabajo para Los ecuatorianos	21
1.3.	Ser refugiado, un motivo para la discriminación	24
1.3.1.	¿Cómo son percibidos los refugiados colombianos por los residentes de Quito?	24
1.3.2.	El papel de los medios en la discriminación	26
1.3.3.	¿En qué ámbitos se siente la discriminación?	29
CAPITULO II		
EL ROL DEL ESTADO ECUATORIANO Y DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS EN LA CIUDAD DE QUITO		
2.1.	¿Quién es un refugiado?	32
2.1.1.	La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984	32
2.1.2.	El proceso de solicitud de refugio	35
2.1.3.	Beneficios del Registro Ampliado	38
2.2.	El refugio como una respuesta a las necesidades de protección de las víctimas del conflicto colombiano	40
2.2.1.	Protección de derechos por parte del Estado Ecuatoriano	40
2.2.2.	¿Qué sucede si la solicitud de refugio es rechazada?	43
2.2.3.	Limitaciones del Estado	45
2.3.	Los programas para refugiados impulsados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a nivel local	48

2.3.1.	Mecanismos de asistencia llevados a cabo por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y sus socios para cubrir las necesidades elementales de los refugiados	48
2.3.2.	Los beneficios de pertenecer a la comunidad de acogida: ¿Qué hace el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para Garantizar la integración local de los refugiados colombianos?	51
2.3.3.	La vinculación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con el Estado Ecuatoriano	53

CAPITULO III

EL REASENTAMIENTO DE REFUGIADOS COLOMBIANOS EN ESTADOS UNIDOS COMO UNA SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN

3.1.	El programa de reasentamiento en Estados Unidos	56
3.1.1.	Conceptos claves: una definición del Reasentamiento como una Solución duradera para los refugiados	56
3.1.2.	Las políticas de reasentamiento de Estados Unidos	58
3.1.3.	¿Cuáles son las funciones que cumple el Alto Comisionado de las Naciones Unidas respecto al reasentamiento?	61
3.2.	El proceso de selección para ser reasentado	63
3.2.1.	Ubicación de los candidatos potenciales para el reasentamiento: criterios de selección	63
3.2.2.	Criterios de exclusión del gobierno estadounidense	66
3.2.3.	El rol de las misiones de selección de Estados Unidos y su vinculación con el ACNUR	69
3.3.	Estados Unidos: una nueva oportunidad	71
3.3.1.	Antes de viajar los refugiados deben prepararse	71
3.3.2.	Iniciativas especiales de integración local: el apoyo que reciben los refugiados desde su llegada a Estados Unidos	73
3.3.3.	El éxito del programa de reasentamiento en Estados Unidos: cifras reveladoras	76
VI.	ANÁLISIS	81
VII.	CONCLUSIONES	94
VIII.	RECOMENDACIONES	100
	BIBLIOGRAFÍA	104

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 CUOTAS DE ADMISIÓN DE REFUGIADOS PARA REASENTAMIENTO	60
TABLA 2 LLEGADAS DE REFUGIADOS REASENTADOS	76
TABLA 3 CASOS PRESENTADOS POR ACNUR ECUADOR PARA SU REASENTAMIENTO EN ESTADOS UNIDOS	77
TABLA 4 REFUGIADOS ACEPTADOS Y REFUGIADOS QUE LLEGARON A ESTADOS UNIDOS EN PROGRAMAS DE REASENTAMIENTO	78
TABLA 5 INDICADORES DE LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN ESTADOS UNIDOS 2005 - 2010	78

I. TEMA

LOS PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN DE LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS EN QUITO ENTRE LOS AÑOS 2005 Y 2010 COMO UN MOTIVO PARA SU REASENTAMIENTO EN ESTADOS UNIDOS

II. RESUMEN

Luego de escapar a la violencia existente en su país de origen, los ciudadanos colombianos que buscan protección en el territorio ecuatoriano en calidad de refugiados deben enfrentarse a varios obstáculos que les impiden integrarse efectivamente a la sociedad que los acoge, los cuales van desde la falta de recursos económicos hasta los actos de discriminación que deben enfrentar cotidianamente. Desafortunadamente, las condiciones estructurales del Ecuador y las limitaciones de los programas de ayuda a esta población desarrollados tanto por el Estado Ecuatoriano como por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y sus socios estratégicos no han hecho posible la eliminación de estos obstáculos. En este contexto, el reasentamiento de refugiados en un tercer país constituye una alternativa viable. Para comprobar la efectividad de los programas de reasentamiento se realizó esta investigación de tipo descriptiva, utilizando como caso de estudio a los refugiados colombianos en Quito entre los años 2005 y 2010 y su reasentamiento en Estados Unidos, demostrando que los problemas de integración de este grupo vulnerable pueden ser disminuidos o incluso solucionados mediante su relocalización definitiva en un país con condiciones estructurales más adecuadas para su desarrollo.

Palabras clave: refugiados, integración, reasentamiento, cooperación internacional, discriminación

III. ABSTRACT

After escaping the violence in their home country, Colombian citizens who are looking for protection in the Ecuadorian territory as refugees must face several obstacles that keep them from fitting in the host society. These obstacles range from lack of financial resources to the acts of discrimination they must endure daily. Unfortunately, the structural conditions of Ecuador and the limitations of refugee aid programs developed both by the Ecuadorian State and the United Nations High Commissioner for the Refugees and its strategic partners have not made it possible to eliminate these obstacles. In this context, refugee resettlement in a third country becomes a feasible alternative. In order to verify the effectiveness of resettlement programs, this descriptive research study was conducted. Colombian refugees in Quito between 2005 and 2010 and their resettlement in the United States were used as a case study; proving that their integration problems may be reduced or even completely solved through their final relocation in a country with more appropriate structural conditions for their development.

Key words: Colombian refugees, integration, resettlement, international cooperation, discrimination

Après avoir échappé à la violence dans leur pays d'origine, les citoyens colombiens en quête de protection dans le territoire équatorien comment réfugiés doivent faire face à plusieurs obstacles qui les empêchent de s'intégrer efficacement dans la société d'accueil. Ces obstacles vont du manque de ressources financières aux actes de discrimination qu'ils doivent affronter tous les jours. Malheureusement, les conditions structurelles de l'Équateur et les restrictions des programmes d'aide à cette population développées à la fois par l'État équatorien et l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés et ses associés stratégiques n'ont pas fait possible d'éliminer ces obstacles. Dans ce contexte, la réinstallation des réfugiés dans un tiers pays est une alternative viable. Pour vérifier l'efficacité des programmes de réinstallation, cette recherche descriptive a été réalisée en prenant comme cas d'étude aux réfugiés colombiens en Quito entre 2005 et 2010 et leur réinstallation dans les États-Unis, démontrant que les problèmes d'intégration de ce groupe vulnérable peuvent être atténués e même résolus par leur relocalisation définitive dans un pays avec plus de conditions structurelles appropriées pour leur développement.

Mots clés : réfugiés colombiens, intégration, réinstallation, coopération internationale, discrimination.

V. INTRODUCCIÓN

El conflicto armado que atraviesa Colombia desde hace poco más de cincuenta años ha generado, entre otros efectos, el desplazamiento de cientos de miles de sus nacionales tanto al interior del vecino país, como fuera de él. En este sentido, la cercanía del Ecuador con Colombia ha convertido a nuestro país en el principal destino de la población refugiada colombiana y dentro de él, son los centros urbanos los que reciben al porcentaje más alto de personas con necesidad de protección internacional, debido a la percepción de que en estos lugares la posibilidad de mejorar su calidad de vida es mayor que en los centros menos poblados y rurales.

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que las condiciones socioeconómicas del Ecuador no han permitido que los refugiados colombianos puedan asegurarse el acceso a las condiciones adecuadas para su desarrollo, tales como el disfrutar de los servicios básicos de salud y educación o llevar una vida sin discriminación. Estas limitaciones, tanto en el ámbito económico como en el social, han impedido que los refugiados colombianos logren integrarse en la sociedad ecuatoriana de una forma efectiva, productiva y autosuficiente, al punto que son percibidos por nuestros conciudadanos como actores que limitan el acceso de la población ecuatoriana a sus derechos e incluso, como una amenaza a la seguridad a nivel de las comunidades.

Frente a la falta de capacidad del Estado colombiano para proteger a todos sus ciudadanos, del Estado ecuatoriano para garantizar el cumplimiento estricto de los derechos de aquellos que llegan al país en busca de protección y asistencia, de los propios refugiados para exigir el acceso a condiciones de vida propicias, y a las limitaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y demás organizaciones que trabajan en la temática del refugio para asegurar una integración efectiva de esta población; surge la alternativa del reasentamiento en un tercer país. Esta reubicación de refugiados en un nuevo país constituye uno de los ejes de las soluciones duraderas propuestas por el ACNUR y podría representar una alternativa para los problemas de integración de los refugiados.

Es por lo tanto que el presente estudio pretende analizar la falta de integración, tanto a nivel económico, como social y cultural, de los refugiados

colombianos en Quito como un motivo para su reasentamiento en Estados Unidos; un país que debido a sus condiciones políticas y socioeconómicas, está en capacidad de brindar un mejor entorno para el desarrollo de las capacidades de esta población vulnerable, de ofrecerle un mayor nivel de protección frente a las amenazas sufridas en su país de origen (y probablemente en el primer país de asilo) y de garantizar un mayor cumplimiento de sus derechos, enfocándose en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2010, el cual se caracteriza por el aumento del flujo de refugiados colombianos y por el establecimiento (entre los años 2009 y 2010) del programa de Registro Ampliado, el cual ha permitido un mejor y más amplio servicio a la población refugiada en general.

Para llevar a cabo este análisis se tiene por objetivo en primer lugar, analizar el impacto que tiene el haberse establecido en Quito en el mejoramiento de las condiciones de vida de los refugiados colombianos; además de determinar la falta de efectividad de los proyectos del Estado ecuatoriano y del ACNUR para finalmente verificar si su reasentamiento en Estados Unidos constituye una solución duradera para la falta de integración.

En ese sentido, se plantea como hipótesis que el reasentamiento en Estados Unidos de los refugiados colombianos establecidos en Quito constituiría una solución idónea para el mejoramiento de sus condiciones sociales y económicas ya que sustituiría a los programas desarrollados por el Gobierno ecuatoriano y el ACNUR con el objetivo de solucionar sus problemas de integración.

De esta forma, el presente trabajo ha sido dividido en tres capítulos que examinan de forma detallada la situación de los refugiados colombianos en la ciudad de Quito, las acciones llevadas a cabo por el Estado ecuatoriano, el ACNUR y demás actores del refugio dentro de su esquema de protección de esta población vulnerable y la posibilidad y consecuencias de su reasentamiento en Estados Unidos.

Así, en el primer capítulo se describen exhaustivamente las condiciones de vida en las que se desenvuelven los refugiados colombianos en Quito, tomando en cuenta, en primer lugar, al acceso a los recursos y servicios básicos para su desarrollo, tales como la alimentación, la salud, la educación y la vivienda. En

segundo lugar se detallan los problemas que encuentran los refugiados para integrarse al mercado de trabajo, la percepción de los ecuatorianos sobre el empleo para esta población y la precarización del mismo. Por último, se aborda el tema de la discriminación, tomando en cuenta la percepción de la sociedad quiteña sobre los colombianos, los ámbitos en que es sentida esta discriminación y el papel de los medios de comunicación en esta problemática.

En el segundo capítulo se expone el rol del Estado ecuatoriano y del ACNUR en el proceso de integración de los refugiados colombianos en la ciudad de Quito, para lo cual se empieza por definir qué se considera como refugiado por parte de estos dos actores basándonos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967 y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, tomando en cuenta también el proceso de solicitud de refugio y el programa de Registro Ampliado.

Se consideró necesario también investigar si el refugio responde a las necesidades de protección de las víctimas del conflicto colombiano, para lo cual se considera el nivel de garantía de derechos por parte del Estado ecuatoriano, sus limitaciones y la posibilidad de que la solicitud de refugio sea negada. Por último, se abordan los programas desarrollados por el ACNUR y sus socios estratégicos, sus mecanismos de asistencia y sus esfuerzos y limitaciones para garantizar la integración local.

En el tercer capítulo se presenta al reasentamiento de refugiados colombianos en Estados Unidos como una solución a sus problemas de integración empezando con un acercamiento a su conceptualización, una descripción de las políticas de reasentamiento de este país y las funciones del ACNUR en este proceso. Posteriormente, se describen los criterios para escoger y también para excluir a los posibles candidatos, dentro de un contexto en el cual las misiones de selección estadounidenses juegan un papel protagónico. Evidentemente, el viajar y establecerse en un nuevo país constituye un reto, por lo cual en el último apartado de este capítulo se presentará el proceso de preparación para el viaje y las iniciativas de integración con que cuenta Estados Unidos, para finalmente observar la efectividad de este programa.

La línea de pensamiento escogida para esta investigación es el Enfoque de las Capacidades Básicas enmarcado en la Teoría del Desarrollo Humano como Libertad, planteado por Amartya Sen. Esta teoría gira en torno a una idea fundamental: la promoción de la riqueza de la vida humana en todas sus facetas y no únicamente en el sentido económico (que ha sido considerado tradicionalmente en las medidas del desarrollo humano como único, o principal indicador) puesto que considera que la economía en la que se desarrollan los seres humanos constituye únicamente una parte de su desarrollo integral (CASASSAS, 2006).

En este sentido, el enfoque de las capacidades está basado en dos supuestos: en primer lugar, se afirma que la libertad para alcanzar el bienestar es de gran importancia; y, en segundo lugar, que esta libertad debe ser entendida en términos de las capacidades que tienen las personas, es decir, en términos de sus oportunidades reales para ser o hacer lo que ellas consideren que deben ser o hacer más allá de su desarrollo o éxito económico. Entonces, la combinación de la capacidad de ser y hacer con libertad constituyen la base de la construcción de una vida llena de riqueza en todo sentido para las personas (ROBENYS, 2011).

Este enfoque permite tener una idea más clara sobre los problemas de integración, tanto a nivel social como económico, que deben enfrentar los refugiados colombianos en Quito. En un principio, se podría pensar que el único factor de análisis sobre la integración de esta población sería el económico, ya que el dinero permite acceder a una educación de mejor calidad, a servicios básicos óptimos y a una alimentación apropiada.

Sin embargo, al analizar los problemas de integración desde el enfoque de las capacidades básicas se puede observar que existen otros factores que determinan la imposibilidad de los refugiados para insertarse en la sociedad quiteña, tales como la falta de capacidad de un refugiado de ejercer su profesión u oficio en nuestro país, la capacidad de acostumbrarse a las diferencias culturales con los locales y poder vivir en un entorno sin discriminación y sin el acoso de quienes los perseguían en su país natal.

Estos factores, evidentemente, no dependen del nivel económico de los refugiados, sino de las garantías que tanto la sociedad ecuatoriana como el

gobierno les ofrecen para ejercer este tipo de capacidades y funcionamientos y del hecho de que los refugiados conozcan que tienen derechos en nuestro país y los exijan. Es en este punto donde interviene el reasentamiento como un modo efectivo de aplicar el enfoque de las capacidades. Un país como Estados Unidos, con mejores condiciones socioeconómicas y con programas de integración para refugiados tiene una mayor posibilidad de ofrecer un entorno en el que éstos puedan desarrollar sus capacidades en todos los ámbitos.

Debe tomarse en cuenta que esta investigación tiene su razón de ser en el poder analizar, en primer lugar, la lamentable situación en que viven miles de refugiados colombianos en la capital ecuatoriana, al igual que abordar las limitaciones locales y estatales en materia de protección y asistencia de refugiados y la efectividad de los programas de reasentamiento en terceros países, concretamente en el caso de Estados Unidos. Por otro lado, la presente investigación encuentra su motivación en una pretensión de tratar profundamente la figura del reasentamiento e incluso darla a conocer con mayor detalle, puesto que a pesar de ser una de las tres soluciones duraderas planteadas por el ACNUR hace ya varios años, muchos refugiados desconocen las ventajas –y desventajas –de este tipo de programas y la posibilidad de ser parte de ellos bajo las condiciones adecuadas.

Este trabajo, debido a su limitada extensión, no tiene por objetivo realizar un análisis exhaustivo del éxodo de colombianos debido al conflicto interno que aqueja a este país, ni de las consecuencias que tiene éste para el Ecuador como país receptor de refugiados, sino más bien tomar al reasentamiento de refugiados en un tercer país no sólo como una forma de aligerar la carga que representa para el Estado ecuatoriano la protección de esta población vulnerable, sino analizarlo como una solución para los problemas de integración efectiva de los refugiados en nuestro país a pesar de su espectro limitado de aplicación. Finalmente, cabe destacar que este tema de investigación se enmarca en el perfil de la carrera de Negocios y Relaciones Internacionales debido al carácter internacional y multidisciplinario del conflicto armado en Colombia, sus implicaciones en el Ecuador y la participación de un tercer país y de varios organismos internacionales en los procesos de reasentamiento.

CAPITULO I

CONDICIONES DE VIDA DE LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS EN LA CIUDAD DE QUITO

Los refugiados colombianos se han trasladado hacia los diferentes centros urbanos ecuatorianos con el objetivo de escapar del conflicto armado existente en su país y de mejorar sus condiciones de vida en general. En este sentido, se observa que Quito ha sido una de las ciudades con mayor concentración de este tipo de población, con un 34% del total de refugiados y solicitantes de asilo registrados (ORTEGA y OSPINA, 2012). Sin embargo, el hecho de que Quito sea una de las ciudades con mayor desarrollo económico en el país, no garantiza que los refugiados colombianos puedan gozar de las condiciones necesarias para tener una vida digna.

1.1. El acceso a los recursos y servicios básicos para su desarrollo

Para poder desenvolverse dentro de una sociedad de una forma óptima, una persona necesita poder acceder a ciertos recursos y servicios básicos que le permita, en primer lugar, tener una alimentación adecuada, una salud estable y una vivienda digna, elementos que constituyen la base del desarrollo humano sobre la cual se construyen luego, nuevas capacidades basadas en una educación continua y de calidad. Lamentablemente, estos recursos y servicios básicos no se encuentran al alcance de toda la población refugiada que habita en Quito, debido a las razones que se analizarán a continuación:

1.1.1. La inseguridad alimentaria y los problemas de salud de los refugiados

La importancia de la alimentación como base de una buena salud es indiscutible. Una buena nutrición es un requisito fundamental para que una persona alcance un desempeño físico e intelectual adecuado y desarrolle todas sus capacidades; y, para que una persona funcione en su nivel óptimo, debe consumir alimentos adecuados y variados en las cantidades apropiadas (IZQUIERDO et al, 2004). Es por esta razón que se reconoce el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos y a no padecer hambre, derecho que contempla la existencia de una oferta alimenticia que sea variada y

de buena calidad, que cubra las necesidades nutricionales y energéticas generales y que esté libre de elementos tóxicos (EIDE, 2003).

Sin embargo, a pesar de ser un derecho universal, la buena alimentación dista mucho de ser una realidad para los refugiados colombianos que viven en la ciudad de Quito. El problema básico al que se enfrenta esta población es su baja capacidad para pagar por los alimentos, relacionada principalmente con la falta de un trabajo estable y un salario adecuado. (SHEDLIN, et al, 2012). El dinero que logran conseguir les permite adquirir únicamente alimentos como arroz, fideo y pan, dejando de lado otros grupos alimenticios importantes para su desarrollo y distanciándose muchas veces de la dieta a la que estaban acostumbrados en su país de origen (ATEHORTUA, 2013).

La falta de dinero ha llevado a los refugiados colombianos no solo a limitar la variedad de alimentos que consume sino también la frecuencia en que lo hace. Esto se observa principalmente durante los primeros meses de estadía de esta población en Quito, periodo durante el cual los refugiados colombianos se han visto obligados a comer una sola vez al día (HERNÁNDEZ, 2013), especialmente aquellos que tienen hijos, puesto que prefieren ceder sus raciones alimenticias a estos últimos (ROMERO, 2014).

Es preciso tener en cuenta que el acceso a alimentos está íntimamente relacionado con los primeros meses de adaptación al Ecuador (SHEDLIN, et al, 2012). Al llegar a la ciudad de Quito, los refugiados colombianos pueden acceder a ayudas provistas por el Programa Mundial de Alimentos, que otorga raciones alimenticias mensuales por un periodo de un año. Sin embargo, estas raciones no son completas e incluyen únicamente alimentos no perecibles y un pequeño bono económico (ROMERO, 2014). A medida que aumenta su tiempo de estadía en la capital, los refugiados colombianos construyen redes de apoyo con sus compatriotas, lo cual les ayuda a cubrir sus necesidades alimenticias ocasionalmente (HERNÁNDEZ, 2013).

Estas limitaciones en la alimentación, la falta de horarios establecidos para alimentarse y el consumo de comida en mal estado, han generado una serie de problemas de salud en esta población. Existen casos de desnutrición, pérdida de peso, dolores abdominales y de cabeza, gripes debido a la baja en las defensas –

especialmente en los niños – y casos de estrés y depresión (SHEDLIN, et al, 2012).

Frente a estos problemas, los refugiados colombianos se ven en la necesidad de buscar atención médica. Las experiencias en este campo son diversas: por un lado, se observan grandes beneficios para esta población puesto que en varios centros de salud públicos no se les ha exigido la presentación de documentos que certifiquen su condición migratoria lo cual les ha permitido obtener una atención adecuada (HERNÁNDEZ, 2013). Pero, por otro lado, se observa que en el caso de enfermedades severas que requieren cuidados especializados, los refugiados colombianos se enfrentan a las mismas limitaciones del sistema de salud ecuatoriano que aquejan a la población local (SHEDLIN, et al, 2012).

A esto se suma el factor de la discriminación. Se registran casos en los que los refugiados colombianos han sido relegados y han debido esperar a que primero sean atendidos los habitantes ecuatorianos o simplemente no han sido tomados en cuenta. Se registran también casos en los que incluso han sido objeto de conjeturas ofensivas acerca del origen de sus enfermedades o heridas en los centros de salud y hospitales (SHEDLIN, et al, 2012).

Se observa que los problemas de inseguridad alimentaria y mal nutrición de esta población vulnerable no se derivan directamente de la falta de oferta de alimentos (o falta de variedad, en su defecto) en la ciudad –puesto que las zonas quiteñas con presencia de refugiados colombianos cuentan con servicios de venta de una gran cantidad de alimentos diversos y frescos –sino más bien a la falta de dinero que enfrentan estas personas para poder acceder a una alimentación adecuada, su falta de conocimiento sobre la misma y la carencia de un sistema de apoyo constituido por amigos y familiares. (SHEDLIN, et al, 2012).

En lo que respecta al acceso a los servicios de salud, se observan opiniones divididas. Por un lado, se registran opiniones positivas de refugiados colombianos que han recibido atención general gratuita y oportuna en los servicios de salud públicos. Sin embargo, cuando se trata de atención especializada, tanto médica como psicológica, el acceso continúa siendo restringido, tomando en cuenta que la población refugiada en general no cuenta con un seguro médico.

Adicionalmente, los problemas de salud de esta población han constituido también un motivo para su discriminación (ACNUR y FLACSO, 2011).

1.1.2. Educación: una necesidad de todos, sin embargo sigue siendo un privilegio

La educación constituye un derecho humano fundamental y una herramienta decisiva para el desarrollo tanto de los individuos como de las sociedades, puesto que, al permitir a las personas adquirir los conocimientos y aptitudes necesarios para adoptar formas de vida adecuadas y participar activamente en la toma de decisiones, se constituye como una pieza clave para terminar con el círculo de la pobreza (UNICEF, 2013). En el caso de los refugiados, el acceso a un sistema educativo efectivo implica la posibilidad de integrarse a un espacio que ofrezca protección física y psicosocial y contribuya en el proceso de superar las secuelas de la violencia vivida en su país de origen (SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS, 2013).

En teoría, el derecho a la educación está garantizado para la población refugiada colombiana en el Ecuador. Según el Acuerdo Ministerial 337 del Ministerio de Educación (desde el 2008), los niños, niñas y adolescentes extranjeros que requieren atención prioritaria por su condición migratoria deben acceder y permanecer dentro del sistema educativo. Para facilitar dicho acceso, el Acuerdo contempla la posibilidad de que esta población extranjera pueda ingresar al sistema presentando cualquier documento legítimo de identidad sin necesidad de haber obtenido una visa y, en los casos de no contar con ninguna documentación se les permitirá obtener una matrícula provisional para poder estudiar (SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS, 2013).

Sin embargo, se ha observado que en la generalidad de los centros educativos no se sigue lo dispuesto en este Acuerdo, ya sea por la falta de conocimiento del personal directivo de los mismos acerca de la existencia de esta normativa o porque, a pesar de conocerla, toman la decisión de no aplicarla. Esta situación se ha traducido en la existencia de un 20% de menores en edad de cursar el nivel primario no se encuentren estudiando; en el caso de aquellos estudiantes de nivel secundario la cifra asciende al 40% (ACNUR y FLACSO, 2011).

Se ha constatado que el 67% de los refugiados que han realizado trámites para matricular a un miembro de su familia en los centros educativos locales se ha encontrado con dificultades, entre las cuales se puede incluir, a más de la falta de certificados de los estudios realizados en Colombia, al factor económico (ORTEGA y OSPINA, 2012). Aun cuando los refugiados colombianos logren conseguir un cupo para estudiar, la falta de dinero para adquirir útiles escolares, uniformes y cubrir gastos de transporte, influye también en que se tome la decisión de relegar al estudio a un plano menos importante (ROMERO, 2014).

Otro de los problemas más recurrentes que tiene que enfrentar esta población es la equiparación errada de los estudios realizados en Colombia. Si bien existen testimonios que apuntan hacia la realización efectiva de exámenes de ubicación en las instituciones educativas y la correspondiente ubicación en el nivel adecuado de los estudiantes refugiados colombianos, los problemas de equiparación inadecuada y asignación arbitraria en los niveles a cursar, siguen siendo frecuentes. Este problema afecta especialmente a los adolescentes, quienes debido a la falta de aplicación de un sistema de ubicación justo, terminan en un grupo de extraedad, por lo cual los mismos colegios les niegan la posibilidad de estudiar (ACNUR y FLACSO, 2011).

Adicionalmente, se registran casos de personas que no han podido acceder a la educación debido a que han llegado a la ciudad de Quito fuera del periodo de inicio de clases, situación que los ha obligado a esperar e incluso, a desistir de su propósito de estudiar (ROMERO, 2014). Finalmente, cabe tomar en cuenta a la discriminación entre los factores que dificultan el proceso educativo de los refugiados colombianos. Al ser víctimas de maltrato psicológico e incluso físico por parte de sus compañeros basados en su nacionalidad y/o condición migratoria y socioeconómica, la deserción escolar es una realidad para la población refugiada (ROMERO, 2014).

Es importante mencionar también que la falta de acceso a la educación de esta población no se debe únicamente a circunstancias externas. De acuerdo con el concepto de la transmisión intergeneracional de la pobreza, el nivel educativo del padre de un individuo (cuando adolescente) influye en el nivel de formación que alcanzará este último. Cuanto mayor es el nivel educativo alcanzado por el

padre, mayor será la probabilidad de que sus hijos alcancen un grado de formación superior (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2008).

En este sentido, de acuerdo con un estudio realizado en uno de los barrios quiteños con mayor concentración de refugiados colombianos –El Comité del Pueblo –, se observó que el patrón de deserción escolar y no acceso al sistema educativo se reprodujo en los hijos de estas familias, teniendo causas comunes: la falta de recursos económicos y la expulsión de su país de origen. Esta situación se produce a pesar de que los refugiados colombianos reconocen la importancia y la necesidad de la educación para garantizar una inserción efectiva en el mercado laboral y un mejoramiento en las condiciones de vida a nivel familiar (ANDRADE, 2012). Cabe resaltar que esta población no necesariamente interpreta a la educación como una herramienta útil para mejorar su relación con sus pares ecuatorianos e integrarse a la sociedad quiteña de una forma más efectiva (ROMERO, 2014).

Se observa que el derecho al acceso a la educación no es una realidad para la totalidad de familias colombianas refugiadas en la ciudad de Quito debido principalmente a la falta de documentación que acredite su nivel educativo y a las trabas impuestas por los centros educativos de la ciudad. A estas causas se suman la falta de recursos económicos, la necesidad de anteponer el trabajo al estudio, el momento del periodo escolar en que llega esta población a la ciudad de Quito, los problemas de equiparación del nivel educativo y la falta de movilidad intergeneracional educativa.

La falta de acceso al sistema educativo y la imposibilidad de contar con una educación de calidad constituye un verdadero problema para la población refugiada colombiana asentada en la ciudad de Quito puesto que puede agravar la situación de riesgo en la que se encuentran muchos miembros de esta población vulnerable (SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS, 2013).

1.1.3. ¿Dónde viven los refugiados colombianos?

La tercera base fundamental para la construcción de una adecuada calidad de vida es el acceso a una vivienda que cuente con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad para el desarrollo digno de una persona. La vivienda es el

lugar donde se desarrolla el proyecto de vida de un individuo y constituye un espacio de reunión, convivencia y protección de una familia (AYALA, 2010) siendo también un elemento importante dentro del proceso de asentamiento e integración social de la población refugiada (ACNUR y FLACSO, 2011). Por estos motivos, el derecho a la vivienda se ha constituido como un derecho universal (GOLAY y ÖZDEN, 2007).

Respecto al acceso a la vivienda, se ha notado que los barrios con mayor concentración de población colombiana refugiada son lugares en los que ha existido también una considerable dinámica de emigración ecuatoriana, evidenciándose también la presencia de otro grupo de extranjeros constituido por cubanos, peruanos y haitianos (ACNUR y FLACSO, 2011). Estos barrios son el Comité del Pueblo, La Bota, Carapungo, Calderón, Toctiuco, La Tola, El Tejar, La Marín, La Magadlena, Chillogallo, Los dos Puentes, La Biloxi (SHEDLIN, et al, 2012). La concentración de esta población en estos barrios se debe principalmente a los bajos costos de arrendamiento de las viviendas (ROMERO, 2014).

El derecho a la vivienda es un derecho humano universal que se encuentra restringido por varias razones. Uno de los principales factores que contribuyen a esta restricción es la discriminación que experimenta la población refugiada debido a su nacionalidad colombiana (ACNUR y FLACSO, 2011). Se observan casos en los que, cuando el propietario de una vivienda identifica al potencial arrendatario como colombiano (principalmente debido a la forma de hablar), toma la decisión de no arrendarle el inmueble (SALAVARRIA, 2014).

El factor económico también influye al momento de alquilar una casa o departamento. A más de los costos de los arriendos, la falta de dinero también influye a la hora de pagar la garantía económica que es solicitada por los propietarios de los inmuebles en la mayoría de los casos (ROMERO, 2014). Adicionalmente, la falta de documentos de identidad también constituye un impedimento al respecto (ACNUR y FLACSO, 2011).

Más allá de la falta de una vivienda propiamente dicha, lo que resulta más preocupante son las condiciones en las que se encuentran las viviendas en términos de acceso a los servicios básicos de saneamiento (GOLAY y ÖZDEN,

2007). Precisamente debido al bajo presupuesto con el que cuentan los refugiados colombianos, las condiciones de infraestructura de las viviendas que habitan no son las más adecuadas: existen casos en que no se cuenta con agua potable y otros en los que se registra una gran cantidad de humedad o frío dentro de las viviendas (ROMERO, 2014).

Por otra parte, el número de integrantes de las familias refugiadas también influye en las condiciones en las que habitan. Se han registrado casos de familias numerosas que, precisamente debido a la falta de recursos económicos, viven en condiciones de hacinamiento, lo cual contribuye al deterioro de su salud (ROMERO, 2014).

La falta de muebles y enseres adecuados también influye en la calidad de la vivienda de estas personas y puede verse justificada tanto en el factor económico como en la salida abrupta de su país natal. El hecho de que estas personas hayan dejado sus hogares en Colombia de una forma precipitada, no les ha permitido llevarse consigo gran parte de sus pertenencias y los ha llevado a depender de donaciones de fundaciones, familiares y amigos que se encuentren en una mejor situación económica; ayuda que resulta insuficiente en muchos casos (ROMERO, 2014).

Adicionalmente, el tema de la discriminación por parte de la sociedad quiteña no ha influido únicamente en la consecución de una vivienda, sino también en el proceso de asentamiento efectivo en la misma. En un principio, los prejuicios negativos acerca de la población colombiana han generado condicionamientos y restricciones en la utilización de los espacios de las viviendas para estas personas por parte de propietarios y vecinos. Sin embargo, se observa que, a medida que el proceso de asentamiento va avanzando, estos prejuicios se van dejando de lado para dar paso a la construcción de relaciones de vecindad y al establecimiento de una verdadera integración de la población refugiada dentro de los barrios que habitan (ACNUR y FLACSO, 2011).

Cabe tomar en cuenta también que, aunque en menor grado, otro de los motivos que ha influido negativamente en el asentamiento efectivo de esta población es el miedo a ser encontrados por aquellos grupos que los perseguían en Colombia. En casos extremos, los refugiados colombianos deben cambiar de

domicilio constantemente para evitar volver a ser víctimas de la violencia (SALAVARRIA, 2014).

El acceso a una vivienda adecuada constituye un factor primordial para la inserción efectiva de la población colombiana refugiada en la ciudad de Quito. Sin embargo, resta mucho por hacer en este sentido. La discriminación relacionada con su nacionalidad, la falta de recursos económicos tanto para poder costear una vivienda con servicios sanitarios adecuados como para adquirir muebles y enseres en buen estado, el hacinamiento, la falta de documentos y el constante temor de ser encontrados son factores que han determinado que las viviendas en las que habita esta población no sean las más adecuadas para su desarrollo.

1.2. La búsqueda de nuevas fuentes de sustento

Al llegar a la ciudad de Quito, una de las principales preocupaciones de los refugiados colombianos es conseguir recursos económicos que les permitan tener una vida digna. Es así como inicia su proceso de búsqueda de empleo o de establecimiento de su propio negocio. El ámbito del trabajo es uno de los espacios en los que mayores desafíos se presentan para esta población y también uno de los más sensibles ya que su calidad de vida depende, en gran medida, de la calidad del empleo que puedan conseguir (ACNUR y FLACSO, 2011). A continuación se analizará la situación de esta población vulnerable con respecto al empleo.

1.2.1. Precarización del trabajo

La integración económica de la población colombiana refugiada en la ciudad de Quito se lleva a cabo a través de la obtención de un empleo que le permita acceder al mejoramiento de sus condiciones de vida. Esta integración económica se produce a través del empleo en actividades de comercio y servicios y en la ejecución de actividades informales, en un escenario caracterizado por la reducida cantidad de oportunidades laborales para los miembros de esta población y por una profunda segregación tanto económica como étnica (ACNUR y FLACSO, 2011).

Cuando un refugiado obtiene la visa de protección internacional, en teoría, sus oportunidades dentro del mercado de trabajo aumentan, tanto en el sector

privado como en el estatal. Sin embargo, se observa que una parte de la población refugiada colombiana asentada en la ciudad de Quito gana su sustento trabajando por cuenta propia en el sector informal (CEVALLOS y GARCÍA, 2012).

Esta situación se genera debido a que no todos los miembros de la población refugiada colombiana logran acceder a la protección que les brinda el ser reconocidos como refugiados por el Estado Ecuatoriano. Si bien, en caso de que la visa de refugiado les sea negada por parte de la Dirección General de Refugio les queda la posibilidad de solicitar una visa laboral, el costo de ésta, que asciende a los mil dólares, constituye un limitante más en su proceso de integración efectiva al mercado laboral (SCHUSSLER, 2009).

Las actividades ejercidas por los miembros de esta población dentro del sector informal incluyen la creación y promoción de pequeños negocios, ya sean individuales o familiares. El comercio informal caracteriza mucho el trabajo de los refugiados: las actividades de mayor concentración son la venta de discos compactos, ropa, artículos de bazar, venta de caramelos en los transportes de la ciudad, venta de bebidas y comidas propia de su país de origen (SHEDLIN, et al, 2012).

Al trabajar dentro del sector del comercio informal, los refugiados colombianos se enfrentan a problemas de diversa índole. En primer lugar, la venta ambulante de artículos, bebidas y comidas no es necesariamente rentable, situación que provoca que los ingresos mensuales de estas personas no siempre alcancen para cubrir sus necesidades básicas (SALAVARRIA, 2014). Por otro lado, esta actividad tampoco les brinda condiciones de seguridad a aquellos que la ejercen: trabajar todo el día en las calles los expone a la contaminación de la ciudad, a situaciones de deshidratación y los convierte en víctimas potenciales de la delincuencia (HERNÁNDEZ, 2013).

Además, los refugiados que pasan mucho tiempo ejerciendo sus actividades de comercio en las calles también tienen altas posibilidades de contacto con los miembros de la fuerza pública y los efectivos de la Policía de Migración (SCHUSSLER, 2009), lo cual constituye un verdadero problema para aquellas personas que no han logrado legalizar su permanencia en el país (SALAVARRIA, 2014). Finalmente, las actividades de comercio informal no

permiten el acceso a las prestaciones sociales garantizadas por un trabajo con un contrato legal (ROMERO, 2014).

No todos los refugiados colombianos trabajan en el sector de las ventas informales; existen también aquellos que se dedican a actividades más organizadas, tales como el trabajo en peluquerías, en establecimientos comerciales y mercados, atención en panaderías, trabajo de artesanos y operarios (ACNUR y FLACSO, 2011), carpintería y labores de construcción (ROMERO, 2014) y atención al público en hoteles y restaurantes (CEVALLOS y GARCÍA, 2012).

Desafortunadamente, el trabajo dentro de estos sectores también puede caracterizarse por su precariedad debido a la falta de estabilidad laboral de la que es víctima esta población y, en algunos casos, a la ausencia de condiciones de seguridad social. Un refugiado reconocido como tal por el Estado Ecuatoriano tiene los mismos derechos que un nacional para acceder a un trabajo con todas las prestaciones sociales, lo cual no se da en todos los casos; en cambio, una persona con el carnet de solicitante de refugio no tiene estos derechos y accede al trabajo “bajo su propio riesgo” (ROMERO, 2014). Se observa que, si bien alrededor de un 70% de la población refugiada colombiana afirma tener una relación de dependencia en el ámbito laboral, dentro de este grupo, un 90% no tiene un contrato formal, sino más bien un acuerdo meramente verbal (ACNUR y FLACSO, 2011).

A esta situación se suma la probabilidad de tener desacuerdos con empleadores, que pueden desembocar en amenazas de deportación (SHEDLIN, et al, 2012) e incluso en situaciones de maltrato verbal, físico y sexual; en la falta de pago o el pago de cantidades que no fueron las acordadas inicialmente debido, precisamente, a la falta de un contrato legal que garantice las condiciones laborales adecuadas del trabajador refugiado colombiano (HERNÁNDEZ, 2013).

La ausencia de políticas que garanticen de manera efectiva el acceso al trabajo para esta población vulnerable, la falta de documentos que certifiquen su estatus legal en el país, a más de la discriminación basada en su origen y la necesidad de conseguir el sustento diario “cueste lo que cueste”, son situaciones que han provocado que los refugiados colombianos que habitan en la ciudad de

Quito se vean obligados a trabajar en actividades que no necesariamente generan una remuneración adecuada, ni otorgan condiciones de seguridad social, actividades que van desde el comercio informal hasta el trabajo en el sector de la construcción, pasando incluso por la prostitución –tanto en hombres como en mujeres – (SHEDLIN, et al, 2012), situación que agrava en mayor medida su condición de vulnerabilidad.

1.2.2. Los colombianos son buenos trabajadores

Como se mencionaba en el apartado anterior, las actividades laborales de los refugiados colombianos en la ciudad de Quito son variadas: comercio informal, atención en restaurantes y labores de carpintería y construcción. Cualquier actividad que genere recursos económicos para el sustento familiar es ejercida de buen agrado por los miembros de esta población. Con base en esto, cabe destacar que, en el proceso de obtención de un empleo, tiene gran importancia la capacidad de adaptación de los refugiados colombianos (SALAVARRIA, 2014).

Esta capacidad de adaptación laboral se desarrolla dentro de un contexto social en el que la opinión generalizada de los quiteños respecto a los refugiados y refugiadas provenientes de Colombia presenta dos polos: por un lado, estas personas son consideradas como violentas y peligrosas, pero por otro, se les reconoce por ser buenas trabajadoras (ROMERO, 2014). Incluso los refugiados colombianos reconocen en sí mismos esta cualidad, y no solo la reconocen, sino que también la promocionan (ATEHORTUA, 2013).

Uno de los primeros aspectos en que se reconoce esta capacidad laboral de los refugiados colombianos son las ventas y contacto directo con el cliente. Esta situación obedece, en primer lugar, a la idea generalizada de que los colombianos y colombianas son personas astutas con una facilidad de palabra que les permite obtener lo que ellos deseen, cualidades que los convierten en excelentes vendedores y comerciantes (VILLACRÉS, 2009). De acuerdo al criterio de un refugiado entrevistado, lo que le permite a un colombiano ser un muy buen vendedor es el hecho de que estas personas son muy despiertas, amables y no les da vergüenza hablar con el resto de la gente, lo cual les permite brindar un excelente trato a sus potenciales clientes (ATEHORTUA, 2013).

La motivación y el espíritu de superación de esta población, basados en las experiencias vividas en sus lugares de origen, también juegan un papel importante en la construcción de su reputación como “buenos trabajadores”. Cuando una persona se encuentra en una situación de necesidad extrema, de alta vulnerabilidad y, adicionalmente, no cuenta con una verdadera estabilidad laboral, se ve en una situación que la obliga a esforzarse más y a desempeñar sus tareas con mayor empeño y dedicación para poder cuidar de su única fuente de sustento (ROMERO, 2014).

Otro de los ejes de la capacidad de adaptación constituye la correlación entre las actividades ejercidas en Colombia y las actividades ejercidas en el Ecuador. En términos generales, se llega a la conclusión de que la mayor parte de la población refugiada colombiana en Quito desempeña actividades similares o del mismo rango social / económico de las que ejercía en su lugar natal. Por ejemplo, se observa que el porcentaje de personas refugiadas que trabajaban en el sector de peluquería en Colombia y que lo hacen ahora en el Ecuador es de un 6% (ORTEGA y OSPINA, 2012).

Sin embargo, si bien el segmento de la población refugiada colombiana con formación profesional no es el más representativo, se registran varios casos en los cuales se evidencian grandes cambios en el ámbito laboral al pasar de un país al otro. Uno de estos casos es el de Johanna, una mujer colombiana con formación profesional en el área de la salud quien tuvo que recurrir, en un inicio, a la preparación y venta ambulante de maní. Johanna afirma que le resultó sumamente difícil adaptarse a esta nueva actividad, pero que debía hacerlo para sobrevivir (ORTEGA y OSPINA, 2012).

José trabajaba en Colombia como dentista, pero fue amedrentado por varios miembros de grupos irregulares al punto que se vio obligado a trasladarse al Ecuador para sentirse seguro. Una vez llegó que a la ciudad de Quito, intentó conseguir un empleo en el cual pudiera ejercer su profesión, sin embargo, al ser un solicitante de refugio, encontró muchísimas dificultades para conseguir un trabajo en este ámbito y tuvo que dedicarse a la venta de discos compactos en los buses y calles de la ciudad y, posteriormente, trabajar en una panadería, donde

sus compañeros reconocen sus cualidades de buen trabajador (GONZÁLEZ, 2014).

Una de las opciones que permiten a esta población el desarrollo de sus capacidades laborales y reconocimiento de sus cualidades de buenos trabajadores son las bolsas de empleo. El Centro de Información y Orientación (CINOR) desarrollado por la fundación HIAS ha diseñado una bolsa de empleo con el objetivo de vincular a los distintos empleadores con los extranjeros en situación vulnerable (CINOR, 2012). Sin embargo, si bien los refugiados colombianos son reconocidos como buenos trabajadores, los problemas de legalización de su estatus migratorio en el Ecuador constituyen un limitante a la hora de ser ubicados en un empleo (ROMERO, 2014).

Paralelamente a las bolsas de empleo, se han desarrollado programas de microcrédito para impulsar el trabajo de los refugiados. Tal es el caso del programa desarrollado por la Fundación Ambiente y Sociedad, socio operativo del ACNUR, que otorga créditos a los refugiados colombianos para que desarrollen su negocio propio. Una de las beneficiarias de este programa fue Susana, quien en el 2005 inició un negocio de venta de comida. Al igual que ella, cientos de refugiados colombianos han creado pequeños negocios que incluyen talleres de carpintería, tiendas y comedores (SPINDLER, 2005).

En conclusión, se observa que su gran capacidad para adaptarse a cualquier actividad laboral que se les ofrezca, su gran facilidad de palabra y buen trato brindado a sus clientes, unidos a su motivación y espíritu emprendedor han hecho que los refugiados colombianos sean reconocidos como muy buenos trabajadores. Gracias a este reconocimiento, han logrado encontrar actividades que les permitan ganar el sustento diario e incluso, acceder a microcréditos y ayudas económicas para desarrollar sus negocios propios y llegar, en algunos casos, a convertirse en generadores de empleo.

1.2.3. Los colombianos como actores que limitan el acceso al trabajo para los ecuatorianos

Los refugiados colombianos viven en un escenario laboral matizado por las pocas oportunidades de trabajo que se les ofrecen (y por las condiciones precarias que brindan las mismas) y en el cual se los concibe de una forma

ambivalente: por un lado, como se indicaba en el apartado anterior, los colombianos son vistos por la población ecuatoriana como buenos trabajadores y excelentes vendedores y comerciantes, pero por el otro, son vistos como individuos que limitan el acceso al trabajo para los nativos del país receptor (ACNUR y FLACSO, 2011).

Uno de los principales indicadores de que los refugiados colombianos son actores limitantes del acceso al trabajo para los ecuatorianos es la tasa de desempleo que presenta esta población, la cual es inferior a la de los ecuatorianos. Esta realidad encuentra su explicación en el hecho de que, al encontrarse en una situación vulnerable, estas personas se ven urgidas a aceptar cualquier tipo de trabajo, sin ningún tipo de garantía laboral y en condiciones que pueden llegar a ser extremadamente precarias (ORTEGA y OSPINA, 2012).

El sector informal se ha caracterizado por ser una de las primeras opciones de trabajo para la población refugiada debido a la facilidad de entrada que presenta este segmento del mercado laboral (ROMERO, 2014). Las características de los colombianos que los han consolidado como buenos vendedores se evidencian de manera especial en este sector; sin embargo, estas cualidades han despertado malestar en los ecuatorianos que trabajan en el mismo sector, según el testimonio de un refugiado entrevistado, quien afirmó que incluso fue víctima de agresiones verbales por parte de varios vendedores ambulantes quiteños (GONZÁLEZ, 2014). A su vez, los comerciantes informales locales confirman esta percepción sobre los refugiados colombianos, asegurando que se han convertido en sus competidores y mostrando un marcado rechazo hacia ellos (PÉREZ, 2014).

Su reputación de buenos vendedores los ha convertido en competidores de los vendedores ecuatorianos no solo en el sector informal, sino también en los locales comerciales autorizados de la ciudad de Quito. La facilidad de palabra de los refugiados colombianos y su personalidad abierta y extrovertida, ha hecho que los propietarios de varios locales de venta de ropa y de comida opten por contratarlos. De acuerdo con una propietaria de una tienda de ropa entrevistada, desde que decidió contratar personal colombiano para atender su local, las ventas

han mejorado significativamente, puesto que sus clientes se sienten mejor atendidos (RUBIO, 2014).

Esta realidad se repite en el sector turístico. Se registra que alrededor de un 10% de la población refugiada trabaja en el sector de los hoteles y restaurantes. Los empresarios de esta rama prefieren contratar personal colombiano puesto que son considerados como excelentes empleados en el ámbito de la atención al público, especialmente aquellos procedentes de Medellín y Cali, al contrario de la mano de obra ecuatoriana (CEVALLOS y GARCÍA, 2012).

El factor económico tiene también una gran influencia al momento de contratar personal. Como se indicaba anteriormente, los refugiados colombianos, debido a su necesidad urgente de encontrar un empleo, suelen acceder a trabajar por salarios inferiores a los que solicitan los trabajadores ecuatorianos. Adicionalmente, cuando son contratados fuera del margen legal, los empleadores logran evitar el pago de prestaciones sociales, convirtiendo a la contratación de refugiados colombianos en una decisión sumamente rentable, aunque peligrosa desde el punto de vista legal (SALAVARRIA, 2014).

Incluso en el mercado laboral de las trabajadoras sexuales, las mujeres colombianas han desplazado a las ecuatorianas. Las mujeres colombianas son reconocidas por su buena apariencia física, situación que las vuelve más cotizadas en este mercado; adicionalmente, su situación de vulnerabilidad al llegar a la ciudad de Quito, las coloca en una posición de mayor acceso para aquellos que manejan las redes de prostitución (GONZÁLEZ, 2014). Evidentemente, esta situación ha provocado la envidia de su contraparte ecuatoriana, que se siente desplazada dentro de este mercado (VILLACRÉS, 2009).

Se observa que la urgencia de encontrar un trabajo en el Ecuador inmediatamente luego de su llegada, sume a la población refugiada en una búsqueda que se ve dificultada, entre otras razones, por la estigmatización de los colombianos a causa de representar una “competencia” para los ecuatorianos (ROMERO, 2014). Sus grandes cualidades en la atención al cliente y su gran capacidad para las ventas constituyen elementos que les otorgan una gran ventaja sobre los ecuatorianos al buscar un empleo. A esto se suman los bajos sueldos por los que trabajan los refugiados colombianos y la posibilidad de

eliminar el pago de prestaciones sociales y demás beneficios, que los vuelven más atractivos para los empleadores locales, pero agravan los problemas de discriminación de los que son víctimas.

1.3. Ser refugiado, un motivo para la discriminación

Cuando se produce un movimiento migratorio, la consecuencia lógica es que se generen cambios en la población de acogida, los cuales van desde modificaciones en el sistema para garantizar la participación social y la exigibilidad de derechos de la población migrante hasta el surgimiento de nacionalismos y formas de discriminación y exclusión. Los refugiados colombianos viven a diario esta realidad, en un contexto de altos índices de discriminación por parte de la población ecuatoriana que los asocia con la prostitución, el narcotráfico y la delincuencia (ROMERO, 2014).

1.3.1. ¿Cómo son percibidos los refugiados colombianos por los residentes de Quito?

El ex canciller ecuatoriano, José Ayala Lasso ha propuesto una clasificación para los colombianos que llegan al Ecuador. Según esta clasificación, existirían tres grupos: aquellos que llegan al país con el objetivo de invertir y aportar económicamente; aquellos que cuentan con escasos recursos económicos y huyen de la violencia existente en Colombia, convirtiéndose en refugiados; y, los violentos, delincuentes y subversivos (LA HORA, 2004).

Desafortunadamente, la falta de conocimiento de la población quiteña y su tendencia a dejarse llevar por los estereotipos, ha provocado que estos tres grupos sean consolidados en uno solo: todos los colombianos son delincuentes. Los refugiados colombianos se ven especialmente afectados por esta situación puesto que, de acuerdo con Josef Merx, representante adjunto del ACNUR, la mayor parte de la población receptora no comprende lo que es un refugiado y no toma en cuenta que éstos no vienen voluntariamente al Ecuador, sino que se ven obligados a hacerlo debido a la violencia (EL COMERCIO, 2013) Y al no comprender esta realidad, los quiteños los estigmatizan como delincuentes.

Cada vez que se transmite una noticia en la televisión o se comenta acerca de un robo, de un asalto o sobre el tráfico de estupefacientes en nuestro país, es común que las personas asuman que los responsables son de nacionalidad

colombiana. En este sentido, una de las principales quejas que surgen de los refugiados que viven en Quito es el estereotipo de que los colombianos son sicarios, ladrones o incluso miembros de grupos guerrilleros (SHEDLIN, et al, 2012). Sin embargo, si se analiza las cifras de la Dirección de Refugio se observa que la cantidad de extranjeros refugiados que han sido detenidos por infringir la ley es mínima: el 2% a nivel nacional (EL COMERCIO, 2013).

Los refugiados colombianos son percibidos como una amenaza debido no solo al estereotipo que los vincula con la delincuencia sino también a aquel que los relaciona con la guerrilla y los grupos paramilitares. Son juzgados en base a la presunción de que estuvieron involucrados con el conflicto armado colombiano (SHEDLIN, et al, 2012). En su entrevista, José comenta que muchas veces escuchó a sus vecinos referirse a él como un guerrillero y afirmar que seguramente había huido de su natal Colombia en un intento por escapar de las autoridades de este país quienes lo perseguían por dedicarse a actividades al margen de la ley (GONZÁLEZ, 2014).

Adicionalmente de ser vistos como una amenaza, los refugiados colombianos son considerados por los residentes de Quito como una carga para el país no solo porque ocupan las plazas de trabajo destinadas inicialmente para los propios ecuatorianos (SHEDLIN, et al, 2012), sino también por el costo que implican para el Estado Ecuatoriano, debido a los recursos que se destinan para su protección (ROMERO, 2014).

Por otro lado, las refugiadas colombianas son un caso que merece especial atención. El impacto de género juega un papel fundamental en la percepción de estas mujeres, quienes no solo son objeto de los estereotipos que aquejan a los colombianos mencionados anteriormente, sino que tienen que enfrentarse a uno nuevo: el de ser vistas como prostitutas o como potenciales trabajadoras sexuales. La principal consecuencia negativa de esta percepción es la expectativa de que las mujeres colombianas se involucren sexualmente con hombres para conseguir un trabajo o una vivienda (SHEDLIN, et al, 2012).

Además del género, la edad de los refugiados constituye también un factor determinante de la percepción que tiene la sociedad quiteña sobre éstos. Se registran casos en que los ecuatorianos se han negado a alquilar una vivienda a

los colombianos porque perciben a los más jóvenes como incapaces de pagar la renta (SHEDLIN, et al, 2012). Sin embargo, las personas de edad avanzada también sufren: debido a la percepción de los empleadores quiteños de que no son capaces de trabajar, los refugiados colombianos mayores no son contratados (ATEHORTUA, 2013).

Sin embargo, la percepción de los habitantes quiteños con respecto a los refugiados colombianos no es cien por ciento negativa. Como se indicaba en los apartados anteriores, los colombianos son vistos como buenos trabajadores y como personas muy positivas y optimistas, lo cual en ocasiones, ha hecho que su estadía en la ciudad sea un poco más llevadera. (HERNÁNDEZ, 2013).

Es importante tomar en cuenta que las percepciones de la sociedad quiteña, ya sean positivas o negativas, tienen una gran influencia en el proceso de adaptación e inserción socioeconómica de los refugiados colombianos en la capital ecuatoriana. Solo cuando la sociedad en general deje de lado los estereotipos con los que se juzga a la población colombiana refugiada y haga un esfuerzo por comprender los motivos por los que llegaron a la ciudad y la situación en la que se encuentran, se podrá consolidar una verdadera integración de los refugiados en un contexto pacífico que les permita desarrollar todo su potencial como seres humanos.

1.3.2. El papel de los medios en la discriminación

Una de las principales consecuencias de la globalización es la creciente importancia que han adquirido los medios de comunicación en la vida de la sociedad en general. Por un lado, esta influencia es positiva ya que contribuye a que la población esté informada y se constituya en veedora de los funcionarios de turno. Sin embargo, también implica ciertos riesgos. En este caso en particular, se observa que los medios de comunicación contribuyen a la reproducción social de una imagen negativa y discriminatoria de los inmigrantes, refugiados y minorías, lo cual puede crear o exacerbar los prejuicios étnicos y racistas en la población receptora (VAN DIJK, 2001).

Las comunidades de acogida perciben a los refugiados como una amenaza para la prosperidad económica y la estabilidad social y cultural locales. Estas

percepciones generan un caldo de cultivo en el que se desarrollan la xenofobia y la intolerancia dentro de un contexto en el cual la falta de responsabilidad de los medios de comunicación, que utilizan a los refugiados como chivo expiatorio de los problemas económicos y de los conflictos sociales del país anfitrión, contribuye únicamente al agravamiento de estas percepciones y al aumento de la discriminación (LOBO, 2008).

Uno de los principales ejes de la discriminación hacia los refugiados colombianos en la ciudad de Quito lo constituye la percepción de criminalidad. La exigencia del pasado judicial como requisito migratorio (Decretos ejecutivos 1471 y 1522) demuestra la dificultad de separar la imagen de criminalidad de la imagen de los refugiados colombianos en el Ecuador (SHEDLIN, et al, 2012). El decreto ejecutivo 1471 exigía la presentación del pasado judicial apostillado previo al ingreso al Ecuador. Posteriormente, esta exigencia es modificada mediante el decreto ejecutivo 1522 que elimina este requisito para menores de edad, refugiados legalmente reconocidos, entre otros (COALICIÓN POR LAS MIGRACIONES Y EL REFUGIO, 2011).

Frente a estos decretos, la respuesta de la prensa colombiana fue acusar al Ecuador de tener actitudes de xenofobia contra el vecino del norte. A su vez, ciertos representantes de la prensa ecuatoriana defiende la postura del Ecuador justificándola de la siguiente manera: en un artículo publicado en el diario El Comercio el 18 de febrero de 2009, Sebastián Mantilla Baca afirmó que la exigencia del pasado judicial a los ciudadanos colombianos respondía al derecho del Estado de guardar su seguridad y no a criterios xenófobos (SHEDLIN, et al, 2012).

Cuando se presentan noticias sobre algún delito ocurrido en la ciudad, se hace énfasis en la presunción de que los sospechosos de haberlo cometido son de nacionalidad colombiana (SALAVARRIA, 2014). Basta con dar un breve recorrido por los artículos de prensa para evidenciar esta realidad. Titulares como “Cubana degollada por colombiano” (DIARIO EXTRA, 2010), “Colombiano se viró a un Ecuatoriano” (DIARIO EXTRA, 2010), “Delincuentes se mimetizan entre los miles de refugiados” (EL UNIVERSO, 2010) y “Capturan a banda de

narcotraficantes integrada por colombianos y ecuatorianos” (DIARIO HOY, 2009) son comunes en los diarios ecuatorianos.

La salida de refugiados colombianos de su país de origen hacia el Ecuador ha conllevado que aquellos delincuentes y miembros de grupos irregulares que los perseguían en Colombia se trasladen también hacia nuestro país. La asociación entre los refugiados colombianos y la delincuencia hace que el discurso de la prensa sea confuso: en vez de presentar a los refugiados como individuos vulnerables ante los problemas sociales que aquejan a Quito, se los suele mostrar como portadores de estos problemas (SHEDLIN, et al, 2012). Por lo general, los medios de comunicación muestran únicamente a aquellos delincuentes que vienen al Ecuador, sin hacer distinción entre este grupo y los refugiados que vienen en busca de paz y de ganarse la vida de una forma honesta (ROMERO, 2014).

Se debe notar que, a pesar de esto, existen también medios que presentan las historias de los refugiados y muestran las condiciones de vida en las que se desarrollan y los obstáculos y retos a los que deben enfrentarse. Por ejemplo, en el año 2006, se presenta en el Diario Hoy la historia de Victoria Gómez, una refugiada colombiana que ha debido enfrentarse a serios problemas de discriminación (DIARIO HOY, 2006). Este tipo de historias presentan el problema de los refugiados como una situación más real y cercana a la realidad local contribuyendo a la concientización acerca de la situación de esta población vulnerable. Sin embargo, el número de artículos que presentan estas historias personales es mínimo y, en la mayoría de los casos, se publican datos cualitativos sobre la vida de los refugiados como punto de enganche para otro tipo de discusiones (SHEDLIN, et al, 2012).

Cabe tomar en cuenta que los medios de comunicación ecuatorianos no son los únicos involucrados en la temática de los refugiados. Los medios colombianos también juegan un papel fundamental en la forma en que esta población vulnerable es percibida y en las acciones que se pueden tomar para contribuir a su desarrollo. En este contexto, resulta evidente la necesidad de que los medios de comunicación colombianos profundicen sobre las consecuencias del conflicto existente en este país sobre el Ecuador, los costos que genera la

presencia de refugiados en nuestro territorio y las condiciones en las que estos viven con el objetivo de visibilizar la realidad de esta población vulnerable (PNUD, 2008) y encontrar nuevas alternativas conjuntas que contribuyan a la eliminación de las actitudes discriminatorias y de esta manera, al mejoramiento de sus condiciones de vida en todos los ámbitos.

En resumen, se observa que al tener los medios de comunicación gran influencia en la opinión de los ciudadanos quiteños y, éstas a su vez, gran influencia sobre el proceso de adaptación de los refugiados colombianos en la capital, es importante que quienes se encargan de estos medios presenten la información de una forma imparcial que permita a lectores, televidentes y radioescuchas entender la verdadera situación en la que esta población vulnerable se encuentra, contribuyendo de esta forma a la eliminación de prejuicios y estereotipos que han resultado nocivos para los refugiados colombianos y sus condiciones de vida en el país.

1.3.3. ¿En qué ámbitos se siente la discriminación?

Las percepciones erradas y los estereotipos con los que se juzgan a los refugiados colombianos en la ciudad de Quito, basados en el desconocimiento y el prejuicio, han provocado que el proceso de integración de esta población vulnerable se vea marcado y dificultado por las actitudes discriminatorias de la población receptora. En este contexto, surgen las barreras de la nacionalidad, del sexismo, el origen étnico, racial y de la situación económica en los espacios de participación pública, el espacio laboral, las instituciones educativas y los barrios donde se asientan (ACNUR y FLACSO, 2011).

De acuerdo con una encuesta realizada por ACNUR y FLACSO, los espacios públicos son los escenarios donde se ejerce con mayor fuerza la discriminación hacia los refugiados colombianos; de hecho, un 67% de ellos se han sentido discriminados en estos espacios (ACNUR y FLACSO, 2011). Los colombianos son identificados en primer lugar, por su acento al hablar, y una vez esto sucede, el trato que reciben es diferente. Un refugiado colombiano entrevistado afirmó que al haber intentado comprar varios artículos en una tienda, la respuesta que recibió fue “aquí no se vende a colombianos” y que, al subirse a

un autobús o asistir con sus hijos al parque, las personas locales tendían a alejarse de él al darse cuenta de que es colombiano (SALAVARRIA, 2014).

Insertarse en el sistema educativo de la ciudad de Quito también implica arriesgarse a actos discriminatorios. Por un lado, la discriminación se ejerce desde las autoridades y profesores y, por el otro, son los mismos compañeros de los refugiados colombianos quienes los aíslan debido a su origen, acusándolos incluso de ser guerrilleros (HERNÁNDEZ, 2013). Lo mismo sucede con el sistema de salud: varios refugiados colombianos no han recibido atención médica oportuna o incluso han sido ofendidos por el personal médico debido a su nacionalidad (SHEDLIN, et al, 2012).

El segundo escenario donde más discriminación se evidencia es el ámbito laboral, con un porcentaje del 15% (ACNUR y FLACSO, 2011). A pesar de la percepción de que los colombianos son buenos trabajadores, su origen les dificulta el acceder a un empleo. Se registran testimonios de personas que han solicitado empleo en varios establecimientos comerciales en la ciudad de Quito, siendo ésta solicitud negada. La negativa se basa en el argumento de que en dichos lugares no se contrata colombianos o en la afirmación de que las vacantes ya están cubiertas (ANIZARES, 2014).

La discriminación en el ámbito laboral afecta también a los trabajadores informales. Los refugiados colombianos que trabajan como vendedores ambulantes han experimentado situaciones en las que el resto de la población ha decidido no comprar sus productos al identificarlos como colombianos (ANIZARES, 2014) e incluso han tenido que enfrentarse al hostigamiento por parte de las autoridades, teniendo que sobornar a policías en las calles para no ser detenidos por su origen y su estatus legal (SCHUSSLER, 2009).

Las trabajadoras sexuales colombianas también se ven afectadas por actos de discriminación. Varias mujeres refugiadas han recurrido a la prostitución al no poder obtener otro tipo de trabajo, otras han optado por esta alternativa para tener una segunda fuente de ingresos para mantener a sus familias y otras tantas han sido víctimas de la trata de personas (DIARIO HOY, 2011). Ser colombiana puede ser visto como una excelente estrategia para obtener un espacio dentro de la industria sexual quiteña, pero también como una desventaja debido a la

estigmatización que sufren las colombianas en el país. Al desempeñarse en un trabajo que de por sí ya conlleva un matiz de discriminación, las refugiadas colombianas deben enfrentarse a la segregación por parte de sus mismas compañeras ecuatorianas quienes las asocian con la delincuencia y las acusan de querer quitarles a sus esposos o novios (VILLACRÉS, 2009).

Conseguir una vivienda se ha convertido también en un reto para los refugiados colombianos. Cuando los propietarios de las viviendas se dan cuenta de que los potenciales inquilinos son de origen colombiano deciden, en algunos casos, negarles la posibilidad de arrendar sus inmuebles basándose en el argumento de que “no se arrienda a colombianos”; en otros casos, los propietarios fijan precios de alquiler extremadamente altos con la intención de que los refugiados no puedan costearlos (ROMERO, 2014).

La discriminación contra los refugiados colombianos se produce en todos los ámbitos de sus vidas, ya sea a nivel público o privado. Las acusaciones ofensivas y el trato diferenciado negativo hacia esta población se evidencian en las instituciones educativas, centros de atención médica, en los buses, calles y parques de la ciudad y provienen tanto de autoridades, como de los ciudadanos comunes. Por esta razón, es necesario concienciar a las personas en todos estos niveles, sobre la verdadera situación de los refugiados colombianos y la importancia de facilitar su integración mediante el desarrollo de sus capacidades y funcionamientos para poder construir una comunidad pacífica e incluyente.

Finalmente, debe recalcar que, al establecerse en la ciudad de Quito, los refugiados colombianos no observan necesariamente una mejora en sus condiciones de vida debido a las restricciones que encuentran en el acceso a servicios de salud, alimentación, educación y vivienda. Estas restricciones vienen dadas principalmente por la dificultad que tiene esta población para conseguir un empleo con un salario digno que contemple todas las prestaciones sociales, en un contexto social marcado por actos de discriminación tanto en la esfera pública como privada, los cuales encuentran su origen en la falta de conocimiento de la sociedad respecto a la figura del refugio y a la situación de esta población vulnerable, agravada por la información parcializada presentada al respecto por los medios de comunicación locales.

CAPITULO II

EL ROL DEL ESTADO ECUATORIANO Y DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LOS REFUGIADOS COLOMBIANOS EN LA CIUDAD DE QUITO

Un refugiado es una persona que se encuentra en una situación extrema de vulnerabilidad debido a que su país de origen ha demostrado ser incapaz de brindar la protección debida a sus ciudadanos o no ha mostrado mayor disposición para proteger sus derechos, lo cual ha forzado a este individuo a abandonarlo. Frente a esto, es la obligación del Estado de asilo asegurarse de que los refugiados reciban la protección necesaria dentro de su territorio y la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados asistir a dicho Estado en esta labor, asegurándose de que esté al tanto de sus obligaciones para con esta población vulnerable y de que las mismas sean totalmente acatadas (ACNUR, 2010).

2.1. ¿Quién es un refugiado?

Para comprender el rol del Estado ecuatoriano y del ACNUR en la protección de la población refugiada colombiana, es necesario comenzar definiendo el término *refugiado*. En términos generales, una persona que está fuera de su país de nacionalidad y es incapaz o se encuentra renuente a retornar al mismo debido al miedo de ser perseguida por su raza, orientación política, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o incluso debido al peligro que correría su vida por la presencia de conflictos armados u otros desastres creados por los seres humanos, tales como la dominación extranjera, la intervención armada o el colonialismo, es considerada como refugiada (UNHCR, 2011).

2.1.1. La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984

La existencia de la figura de los refugiados dentro del derecho internacional conlleva consecuencias legales para los Estados y la responsabilidad de protegerlos. En este sentido, el propósito de definir quién es un refugiado es el de facilitar y justificar la ayuda y la protección que le es brindada

(GOODWILL y McADAM, 2008). Respecto a esta definición, existen dos categorías de personas que pueden ser consideradas como refugiadas bajo la protección del mandato internacional del ACNUR: los refugiados bajo el artículo 1A de la Convención de 1951 y los refugiados bajo una definición más amplia que incluye aquellas contempladas en varios instrumentos internacionales (UNHCR, 2011); ambas categorías serán analizadas a continuación:

La Convención de Ginebra de 1951 constituye la instauración de un sistema general de protección para los refugiados dentro del cual, por primera vez en la historia, el concepto de refugiado no depende del criterio de la nacionalidad. Las crisis producidas por los desplazamientos masivos de personas entre las fronteras europeas en el periodo de entreguerras se convierten en un problema internacional que provocó la creación de la Sociedad de Naciones en 1919, creación que a su vez contribuyó con la socialización de la idea de que los refugiados son una clase especial de inmigrantes cuya situación requiere de la atención de los gobiernos (GIL, 2006).

En este sentido, se desarrollan diversos instrumentos internacionales que contemplan los derechos que los Estados reconocían a los grupos étnicos o nacionales a los que se consideraba necesitados de protección internacional. Sin embargo, la gravedad de la crisis europea provocó que dichos instrumentos resultaran insuficientes. Es en este contexto y en el seno de las Organización de las Naciones Unidas que se suscribe la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada el 28 de julio de 1951 en Ginebra, Suiza (GIL, 2006), misma que establece los lineamientos para determinar quiénes son considerados como refugiados y como sujetos de protección del ACNUR. Cabe destacar que luego de la Convención de 1951, se firma en 1967 el Protocolo Sobre el Estatuto de los Refugiados mediante el cual se retira la limitación temporal establecida en la Convención, ampliando el espectro de protección a los refugiados (OACNUDH, 2012).

De acuerdo con los lineamientos de la Convención, una persona es considerada como refugiada únicamente si se encuentra fuera de su país de nacionalidad o, en el caso de ser apátrida, fuera del país de residencia habitual. Adicionalmente, se debe comprobar que tal persona es objeto de un temor bien

fundamentado de ser perseguido, es decir que existe una posibilidad razonable, ya sea actual o futura, de que esta persona se enfrente a algún tipo de daño, amenaza a su vida o a su libertad física o a la violación de los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de 1948 si regresa a su país de origen o residencia habitual, (UNHCR, 2011). La Convención especifica que para que una persona pueda aplicar para obtener el estatus de refugiada, su temor de ser perseguida debe estar contemplado dentro de una o más de las siguientes seis categorías (UNHCR, 2011):

1. Persecución debido a su raza. La raza es interpretada en términos generales como cualquier tipo de característica étnica distintiva, ya sea real o percibida. Por lo general, las minorías raciales son perseguidas por las mayorías, aunque existen casos como el *Apartheid* en Sudáfrica en los cuales la mayoría racial es oprimida por la minoría (UNHCR, 2011).

2. Persecución debido a la nacionalidad de una persona. En estos casos la nacionalidad no se refiere únicamente al concepto de ciudadanía, sino que se extiende a los grupos de personas que se definen colectivamente en base a una misma identidad étnica, religiosa, cultural o lingüística (UNHCR, 2011).

3. La religión de una persona, ya sea institucionalizada o únicamente constituida como un sistema informal de creencias, puede también representar un motivo de persecución, al igual que el no pertenecer a ninguna de ellas. La persecución por razones religiosas es considerablemente compleja y puede tomar varias formas, entre las cuales se pueden citar a la prohibición de pertenecer a una comunidad religiosa, de realizar prácticas religiosas en público o en privado, a la discriminación grave a los miembros de una religión, e inclusive la conversión religiosa forzada (UNHCR, 2004).

4. Una persona puede también ser perseguida por su pertenencia a un grupo social determinado, el cual es considerado como *diferente* ya sea por parte del resto de personas o por los mismos miembros del grupo. Dicho grupo social debe tener características en común, ya sean innatas (como la raza), inmutables o fundamentales para su identidad. Ex miembros de las fuerzas armadas, o incluso personas con orientación sexual diferente pueden ser objeto de persecución. (UNHCR, 2008).

5. Persecución por género. Existen también situaciones en las cuales las mujeres son consideradas como un grupo perseguido al ser víctimas de violencia sexual o incluso de casos de mutilación genital, convirtiendo al género en un factor importante en la determinación del estatus de refugiado (UNHCR, 2008).

6. Finalmente, la opinión política de un individuo puede constituir también un motivo para su persecución cuando la identificación con un partido político o incluso la opinión sobre los roles de género no es tolerada por las autoridades de un país o por la comunidad en general y dicha intolerancia, pone en peligro al individuo (UNHCR, 2011).

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que si bien una persona puede cumplir los criterios de inclusión contemplados en el artículo 1A de la Convención, puede no ser reconocida como refugiada si ha cometido crímenes contra la paz o crímenes de lesa humanidad, crímenes serios en el país de refugio o actos que van en contra de los propósitos y principios de las Naciones Unidas (UNHCR, 2011).

Finalmente, debe considerarse que existen refugiados colombianos que han sido reconocidos como tales bajo la definición ampliada contemplada en la Declaración de Cartagena de 1984 que extendió el radio de protección a aquellas personas que hayan huido de su país debido a que su vida, su seguridad o su libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Esta Declaración constituyó un avance para el sistema de asilo a nivel regional y especialmente en el caso de la población colombiana, pues permitió que los casos de violencia generalizada y de conflictos internos por las cuales estas personas huyeron de sus hogares, pero que no son considerados como motivos de persecución concretos, fueran contemplados dentro de la figura del refugio (COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, 2012).

2.1.2. El proceso de solicitud de refugio

Al llegar al Ecuador, una persona extranjera que ha salido de su país de origen, cualquiera que este sea, y que tenga temores fundados de regresar al

mismo y ser perseguido debido al grupo al que pertenece, a su religión, a su nacionalidad, a sus opiniones políticas o a su condición racial o que sienta que su vida está amenazada por los conflictos internos de su país, la violencia generalizada o incluso la agresión extranjera, tiene la posibilidad de solicitar ser reconocido como refugiada (ROMERO, 2014).

Con el propósito de crear un marco legal para los refugiados, se expide el Decreto 3301 en 1992, con el cual se regula la aplicación de las normas tanto de la Convención de 1951 como de su Protocolo de 1967 y de la Declaración de Cartagena. Este Decreto contiene todos los lineamientos jurídicos en materia de refugio, tales como el del proceso que los solicitantes deben realizar para adquirir el estatus de refugiados en el Ecuador, e incluye los derechos y obligaciones de los refugiados en el territorio ecuatoriano (ORDÓÑEZ, 2011).

En este contexto, para obtener el estatus de refugiado, el primer paso es presentar formalmente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud de refugio llenando el formulario correspondiente para que los datos del solicitante sean ingresados en el sistema nacional de registro. Junto con el formulario, se debe presentar un documento de identificación personal, ya sea la cédula de identidad, el pasaporte o el registro civil de nacimiento. Luego de esto, cada solicitante obtiene un número de registro y una identificación individual (ACNUR, 2010).

A aquellas personas que hayan pedido el estatus de refugiado en el Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores les otorga un certificado provisional que los acredita como solicitantes de refugio, con una validez de 90 días prorrogables hasta que dicha entidad tome una decisión definitiva sobre la solicitud (ACNUR, 2010). Este documento les permite a los solicitantes permanecer de forma legítima en el Ecuador (PÉREZ, 2014), pero no les garantiza los derechos que tiene un refugiado reconocido, tales como el acceso al trabajo (ROMERO, 2014).

Para garantizar que este proceso sea efectivo, las personas que se han registrado como solicitantes de refugio deben pasar por una entrevista efectuada en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador (ACNUR, 2010). Estas entrevistas son la base del sistema actual de reconocimiento del estatus de

refugiado en el Ecuador y son realizadas de forma individual para permitir un análisis caso por caso que posteriormente llevará a la decisión de elegibilidad (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN, 2008).

Es importante resaltar que, hasta diciembre de 2006, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el ACNUR y el Comité Pro Refugiados (creado mediante acuerdo del ACNUR y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en 1976) podían recibir las solicitudes de refugio. Sin embargo, el 13 de junio de 2007 se crea a la Dirección General de Refugio dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores (CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA, 2008) A partir de este momento, la DGR, es la única entidad encargada en el país de llevar a cabo el proceso de conocimiento y análisis de las solicitudes de refugio y de efectuar las entrevistas a los solicitantes conforme a las normas jurídicas nacionales e internacionales, a más de brindar apoyo a los refugiados en su proceso de integración a la comunidad y de promulgar el respeto a sus derechos (SCHUSSLER, 2009).

Dentro de este proceso, luego de realizarse la entrevista individual al solicitante, la Comisión para Determinar la Condición de Refugiado en el Ecuador (conformada por dos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante del Ministerio de Gobierno y un observador –sin derecho al voto – del ACNUR) analiza cada caso igualmente de forma individual y emite la decisión, ya sea de reconocer al solicitante como refugiado inmediatamente, o de rechazar su solicitud (ACNUR, 2010).

El proceso para el reconocimiento de la condición de refugiado está compuesto por varios pasos y, si bien requiere de tiempo y puede resultar tedioso e incluso complicado para los solicitantes (ANIZARES, 2014), es sumamente importante puesto que constituye la única posibilidad de que los derechos de estas personas desplazadas sean respetados, especialmente aquel que tienen todos aquellos que se encuentren en necesidad de protección internacional de no ser rechazados en la frontera, devueltos, deportados, expulsados, extraditados o sujetos a medidas que los obliguen a retornar a un territorio donde su seguridad se encuentre amenazada (ACNUR, 2010) .

2.1.3. Beneficios del Registro Ampliado

A partir del año 2000, la cifra de solicitantes de refugio que llegaron desde Colombia hacia el Ecuador aumentó de manera considerable (ACNUR, 2008), aumento que se ha mantenido en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2010, aunque se ha observado que no todas las solicitudes de refugio han sido aceptadas. Por ejemplo, para el año 2008, el 63% de la población solicitante de refugio vio rechazadas sus solicitudes (FLACSO, 2010). Estas deficiencias en materia de refugio por parte del Estado Ecuatoriano, obedecen a la baja capacidad que tuvo este para adaptarse al crecimiento en el ingreso de solicitantes de refugio y para dar respuestas oportunas y efectivas a sus necesidades (PÉREZ, 2014).

Por otro lado, se ha observado que los inmigrantes colombianos son víctimas del temor de ser retornados a su patria y que, además, desconocen sobre la posibilidad de solicitar refugio y de los procedimientos necesarios para ello, situaciones que han contribuido a que no todas las personas en necesidad de protección internacional que ingresan al Ecuador lleguen a presentar su solicitud. En este sentido, se puede constatar que el 40% de las personas que pertenecen a este grupo desconocen que pueden solicitar refugio (ACNUR y MRECI, 2009).

Frente a esta situación, el Estado ecuatoriano inició el proyecto del Registro Ampliado (FLACSO, 2010), que buscaba dar protección a las personas llamadas invisibles porque no se atrevían a acercarse a las instituciones públicas y reclamar los derechos que el Estado ecuatoriano debe garantizarles (CODHES, 2011) y consistía en la movilización de varias brigadas del Ministerio de Relaciones Exteriores y del ACNUR a las provincias fronterizas de Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana e Imbabura, con el propósito de viabilizar la legalización de la situación estas personas (ORDÓÑEZ, 2011).

En el marco de este programa, entre marzo de 2009 y marzo de 2010, miles de solicitudes de asilo fueron examinadas. Los responsables del programa actuaron con base en los criterios de la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena de 1984. En este contexto, alrededor de 28.000 colombianos fueron reconocidos como refugiados y obtuvieron, en cierta medida, la protección que dicho reconocimiento conlleva. En teoría, el rechazo definitivo de la condición de

refugiado no era una opción dentro de este programa; sin embargo, alrededor de 1.200 casos fueron remitidos para una segunda evaluación dentro del proceso regular (MUY, 2014).

En este punto es importante señalar que, si bien el proyecto de Registro Ampliado contempla el atender a las poblaciones vulnerables ubicadas en la zona fronteriza del norte del Ecuador, tuvo también implicaciones sobre los refugiados y solicitantes de refugio que habitaban en la ciudad de Quito (PÉREZ, 2014).

Una de las principales preocupaciones de los refugiados colombianos que viven en la ciudad de Quito respecto a las consecuencias de la implementación del registro ampliado era la posibilidad de que aquellos miembros de grupos irregulares que los perseguían en Colombia logaran infiltrarse más fácilmente en el país, llegar a la capital y provocarles algún tipo de daño. La población Quiteña también compartió esta preocupación, puesto que consideraba que el programa del registro ampliado aumentaría la delincuencia en la ciudad y en el país (SHEDLIN, et al, 2012). Sin embargo, se observó que del total de personas que fueron marginadas del proceso, 350 fueron excluidas por haber cometido delitos en su país de origen, demostrando que si bien el programa buscaba extender la cobertura del refugio, también planteaba restricciones basadas en la paz social de la población ecuatoriana (ESPÍN, 2010).

Por otro lado, la aplicación de este programa supuso la movilización de brigadas de registro y de la Comisión de Elegibilidad hacia las comunidades de residencia de las personas en situación migratoria vulnerable para la toma de decisiones *in situ* (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN, 2008). El desarrollo de este programa con personas ajenas a las comunidades en las que fue aplicado fue visto de manera negativa, e incluso como una imposición, por los miembros de las mismas puesto que al trabajar con personas que no conocen profundamente la realidad de frontera –y al no socializar el programa con los actores fundamentales de estas zonas, tales como los tenientes políticos y los presidentes de las juntas parroquiales – se generó una situación que agravó la irregularidad y vulnerabilidad de los colombianos (LARA, 2010).

Este agravamiento tuvo una repercusión directa sobre la situación del refugio en la ciudad de Quito. Si bien el programa del registro ampliado ha sido reconocido a nivel internacional debido a que gracias al mismo, miles de refugiados han logrado obtener una visa que, en teoría, les garantiza el acceso a servicios y el respeto a sus derechos (ACNUR, 2010), sus limitaciones generaron que varios grupos de refugiados decidieran trasladarse hacia la ciudad de Quito, agravando el problema de los refugiados en la capital. Esta situación es especialmente evidente en la provincia de Esmeraldas, donde se registran la mayoría de testimonios de personas que se han trasladado ya hacia la ciudad de Quito, debido a las inadecuadas condiciones socioeconómicas y a la violencia generalizada que aqueja a la provincia, situaciones que no pudieron ser solucionadas por el registro ampliado ni por programas paralelos ejecutados por el gobierno (ANIZARES, 2014).

2.2. El refugio como una respuesta a las necesidades de protección de las víctimas del conflicto colombiano

El reconocer que un individuo es un refugiado es un acto declaratorio mediante el cual se confirma formalmente que esa persona tiene varios derechos entre los cuales se encuentra la protección contra la devolución (*refoulement*) a un país en donde su vida o libertad son amenazados, el derecho a la asistencia con el fin de tratar de encontrar una solución duradera (ACNUR, 2005) y el derecho a acceder a la educación, la salud y la justicia del país de acogida (ACNUR, 2010), los cuales pretenden satisfacer las necesidades de protección de esta población vulnerable.

2.2.1. Protección de derechos por parte del Estado ecuatoriano

El derecho a buscar y recibir asilo (entendido como la protección subsidiaria que otorga un Estado a un extranjero) es un derecho humano fundamental, que proviene del principio del respeto a la dignidad de las personas y se fundamenta en los compromisos adquiridos por el Ecuador al adherirse a la Convención de 1951, a su Protocolo de 1967 y a la Declaración de Cartagena de 1984 (ACNUR, 2007), y constituye la base del resto de derechos a los que tendrá acceso un refugiado.

En concordancia con este derecho, el Estado Ecuatoriano se encuentra en la obligación de proveer mecanismos de recepción adecuados para identificar y procesar las peticiones de los potenciales refugiados (ACNUR, 2007). Al mismo tiempo, como se mencionaba anteriormente, un refugiado, o solicitante de refugio, tiene derecho a no ser devuelto a su país de origen y, estos últimos, tienen también derecho a permanecer dentro del Ecuador de forma regular hasta que reciban una respuesta definitiva a su solicitud (ACNUR, 2010). Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que un refugiado puede ser devuelto a su país de origen únicamente si representa una amenaza para la seguridad nacional o el orden público del país de acogida y esta decisión deberá ser realizada por una autoridad competente y bajo los procedimientos legales correspondientes (MOSCOSO, 2007).

Sobre la base de estos dos derechos, se construyen otros derechos de los cuales también gozan, en teoría, los refugiados y solicitantes de refugio colombianos en nuestro país. En este contexto, el Ecuador se acoge a lo citado en el artículo 27 del Derecho Internacional Humanitario donde se señala que los refugiados gozan en el territorio de acogida de los mismos derechos que los extranjeros en general, al igual que aquellos que están previstos en la Convención de 1951 (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, 2006).

En este sentido, a más de gozar del derecho a la vida, seguridad y libertad de su persona y a no ser sometidos a actos de tortura, esclavitud, ni a tratos inhumanos o denigrantes, derechos previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los refugiados colombianos en el Ecuador disfrutaban también de la mayoría de derechos civiles y, a partir de 2008, de derechos políticos al igual que el resto de extranjeros que han vivido en el Ecuador por más de 5 años, de la forma prevista en la Constitución. (PÉREZ, 2014).

Sin duda alguna, uno de los principales derechos de los cuales debe gozar un refugiado en el Ecuador es aquel de no ser discriminado por ningún motivo (ACNUR, 2010). En relación a este derecho, la Constitución ecuatoriana, a más de garantizar una serie de derechos, declara que nadie puede ser discriminado por su condición migratoria y que se adoptarán medidas de acción afirmativa para aquellas personas que sufren por esta desigualdad (SCHUSSLER, 2009).

Por otro lado, el Estado Ecuatoriano debe asegurarse de que los refugiados accedan el derecho a trabajar, ya sea bajo dependencia o por cuenta propia (ACNUR, 2010). La Constitución también garantiza este derecho, afirmando que esta población debe no solo acceder al trabajo, sino que este debe ser dignificado y remunerado (SCHUSSLER, 2009). El derecho al trabajo digno es de vital importancia puesto que permite a los refugiados acceder a otros derechos, tales como alimentación, salud, educación y vivienda adecuadas (JIMÉNEZ, 2007).

Existen instrumentos nacionales e internacionales que protegen también a los niños refugiados en materia de educación. Por ejemplo, en el Código de la Niñez y Adolescencia se establece la obligación del Estado de garantizar el acceso y la permanencia de los niños a los 10 niveles de educación básica; tomando en cuenta que los niños y niñas refugiados deben, de acuerdo con la Constitución, gozar de los mismos derechos que los nacionales, este derecho debe ser también protegido en este sentido. Adicionalmente, la Convención de 1951 establece también que los Estados pertenecientes a la misma están obligados a conceder el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a la educación básica (JIMÉNEZ, 2007).

El acceso a la salud y a la alimentación adecuada es otro derecho fundamental de los refugiados en el Ecuador (ACNUR, 2010). Para acceder a estos servicios, los refugiados deben acudir a los Hospitales Públicos, a los Centros y Subcentros de Salud, puesto que, en teoría, el acceso a los servicios de salud no le pueden ser negados a una persona por su estatus migratorio irregular en el país o por cualquier otra distinción impuesta arbitrariamente (ROMERO, 2014). Adicionalmente, los refugiados colombianos en el Ecuador tienen derecho a acceder al sistema financiero, al sistema de seguridad social y a la justicia (ACNUR, 2010).

La protección de los derechos de los refugiados por parte del Estado Ecuatoriano se evidencia en los diferentes proyectos que ha llevado a cabo para garantizar la integración social de los refugiados con estatus oficial (SCHUSSLER, 2009). Entre estos proyectos se encuentra el Programa de Ciudades Solidarias (FLACSO, 2010), el programa del Registro Ampliado y el Plan Ecuador, dentro

del cual se incluye explícitamente el eje de “*Derechos Humanos y Asistencia Humanitaria y Refugio*” y se busca la inclusión de la población refugiada con el objetivo de evitar confrontaciones entre los distintos grupos de la población vulnerable y asegurar que los mismos conozcan mejor sus derechos y sus obligaciones (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN, 2008). Adicionalmente, el Estado Ecuatoriano realiza campañas de visibilización de la temática de los refugiados (SCHUSSLER, 2009). Sin embargo, como se demostrará más adelante, muchos de estos programas resultan no ser suficientes para proveer una protección efectiva para los refugiados.

2.2.2. ¿Qué sucede si la solicitud de refugio es rechazada?

Para que un refugiado colombiano que vive en el territorio Ecuatoriano pueda gozar de la protección de todos sus derechos y demás beneficios otorgados por el Estado mencionados en el apartado anterior, es necesario que haya sido reconocido formal y legalmente como tal, ya sea bajo la Convención de Ginebra de 1951, su Protocolo de 1967 o la Declaración de Cartagena de 1984 (PÉREZ, 2014).

Sin embargo, existen casos en los que la solicitud para ser reconocido como refugiado es negada. Cuando esto sucede, el interesado es notificado sobre el resultado de la resolución y recibe una explicación muy general de las razones por las cuales su petición fue rechazada. Este tipo de explicación ha sido cuestionada por varias organizaciones de defensa de derechos humanos (RIVERA, et al, 2007), puesto que esta falta de información dificulta el derecho que tiene el solicitante de defenderse (MOSCOSO, 2007). A la vez, el solicitante de refugio es notificado sobre su derecho de presentar una apelación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en treinta días a partir de dicha notificación; esta apelación le permitirá dar inicio a la segunda instancia (RIVERA, et al, 2007).

En caso de que el solicitante decida presentar la apelación, podrá quedarse en el Ecuador hasta que la decisión final sea emitida y su certificado de permanencia temporal será renovado (PÉREZ, 2014). De acuerdo con el artículo 24 del Decreto 3301, este certificado será renovado las veces que sean necesarias hasta que se genere una respuesta para su caso, la cual debe ser

emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en un plazo máximo de treinta días hábiles (RIVERA, et al, 2007).

En teoría, la apelación es una buena opción para aquellas personas que no fueron reconocidas como refugiada en primera instancia. Sin embargo, se ha observado que la tasa de reconocimiento en segunda instancia es únicamente del 4% puesto que el proceso de apelación ha demostrado ser inadecuado. En general, en la apelación los solicitantes no pueden presentar alegatos lo suficientemente convincentes para recibir la protección internacional o para desvirtuar las razones por las cuales su caso fue negado en primera instancia, debido a que el escrito de apelación es realizado con un modelo general para todos los aplicantes quienes, al no conocer a profundidad las razones del primer rechazo a su solicitud, no cuentan con argumentos verdaderamente útiles en la apelación (RIVERA, et al, 2007).

En caso de que el recurso de apelación haya sido aceptado, el solicitante obtiene la visa 12-IV, mediante la cual se reconoce su estatus de refugiado y se le permite acceder a los mismos derechos de aquellos que obtuvieron el reconocimiento en primera instancia (PÉREZ, 2014). Es importante tomar en cuenta que, existe la posibilidad de que la apelación no sea aceptada y de que el Ministerio de Relaciones Exteriores ratifique la decisión de rechazar la solicitud de refugio de una persona (RIVERA, et al, 2007). Si esto sucede, se aplica el artículo 26 del Decreto 3301 el cual reza que, al ser negada de forma definitiva dicha solicitud, el individuo tendrá que abandonar el territorio ecuatoriano, pero que se le concederá un tiempo razonable para buscar y obtener su admisión en otro país – cabe notar que no se establece un plazo determinado para que el individuo abandone el Ecuador – (PÉREZ, 2014).

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que, si luego de pasar por todo el proceso de solicitud y apelación, una persona no logra aún obtener su reconocimiento como refugiada, queda excluida del círculo de protección ofrecida no solo por el Estado Ecuatoriano, sino también por el ACNUR, es decir que caería fuera del mandato de este último y ya no sería considerada como parte de la población de interés del mismo (SCHUSSLER, 2009).

Frente a la negación de la solicitud de refugio, ya sea en primera o en segunda instancia, se ha observado que algunas personas recurren a solicitar una visa de amparo. Sin embargo, se debe aclarar que para solicitarla, el interesado debe cumplir con una serie de condiciones, entre las cuales se encuentra tener hijos ecuatorianos o haber contraído matrimonio con una persona ecuatoriana (RIVERA, et al, 2007).

Sin embargo, no todas las personas en necesidad de protección internacional a quienes se les ha negado definitivamente su solicitud de refugio se encuentran en condiciones de solicitar la visa de amparo y, muchos de ellos encuentran varias limitaciones significativas para ser aceptados en un tercer país. En respuesta a esto y debido al temor que tienen de regresar a su país de origen y volver a ser víctimas de la violencia y de la persecución, un gran número de refugiados colombianos han decidido permanecer de forma irregular en la ciudad de Quito (ROMERO, 2014).

Si bien esta alternativa es evidentemente peligrosa y los coloca en una situación aún más extrema de vulnerabilidad y desprotección, se expande de forma continua debido a la falta de respuestas efectivas por parte de los organismos estatales e internacionales frente a esta grave problemática (RIVERA, et al, 2007). Aquellas personas a las que se les ha negado el refugio prefieren permanecer en el Ecuador, exponiéndose a una serie de peligros, puesto que consideran que en este país tienen mayores oportunidades de desarrollo y se sienten más seguros que en su natal Colombia (GONZÁLEZ, 2014).

2.2.3. Limitaciones del Estado

Una de las prioridades del Estado Ecuatoriano es otorgar protección a los miles de refugiados que se encuentran en su territorio. Esta protección inicia con el reconocimiento del estatus de refugio de un individuo, continúa con el respeto a los principios de no devolución y no sanción penal por la violación a la normativa migratoria vigente y se fortalece en gran medida con las acciones que ejecuta para lograr la inclusión efectiva de estas personas vulnerables en la población local (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN, 2008).

Sin embargo, a la vez que se reconoce esta prioridad, también se declara que las acciones que lleve a cabo el gobierno ecuatoriano respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los instrumentos internacionales referentes al tema del refugio, se realizarán en la medida de las realidades y posibilidades del Ecuador (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN, 2008).

En este sentido, resulta complicado que un país aquejado por la pobreza – causada por la falta de comunicación entre las entidades del Estado y los escasos recursos y falta de institucionalidad para desarrollar y ejecutar políticas públicas (SCHUSSLER, 2009) –tenga la capacidad de proteger efectivamente a los más pobres entre los pobres: los refugiados; puesto que, a pesar de contar con una de las más avanzadas estructuras jurídicas en materia de refugio, sus recursos económicos son un gran limitante para garantizar una vida digna a los mismos ecuatorianos, y mucho más a los refugiados colombianos (MOSCOSO, 2007).

La falta de recursos que aqueja a las instituciones públicas ecuatorianas constituye un grave problema para los refugiados y los perjudica desde el inicio del proceso de reconocimiento de su estatus. Por ejemplo, en el caso de la Dirección General de Refugio para el año 2008, el total de \$398.000 que recibió esta dirección se probó insuficiente para abastecer las demandas de un equipo que maneja alrededor de 8.000 solicitudes al año. Esta restricción presupuestaria explica la alta tasa de negación de peticiones, puesto que resulta más fácil para los funcionarios tomar esta decisión rápida que darle al solicitante el beneficio de la duda y permitirle defender con mayor profundidad su caso (SCHUSSLER, 2009).

Por otro lado, los problemas con el presupuesto reducido del Estado han provocado que el tema de políticas públicas relevantes para los refugiados sea olvidado. El procesamiento de las solicitudes de refugio ha pasado a ser la principal prioridad de la Dirección Nacional de Refugio, relegando a un segundo plano la creación de políticas que faciliten la integración local de esta población vulnerable, tales como la generación de empleos adecuados, el acceso a servicios básicos y la capacitación a los miembros de la fuerza pública en el tema de derechos de los refugiados (SCHUSSLER, 2009).

Es importante tomar en cuenta que las limitaciones económicas de las que es objeto el Estado Ecuatoriano son subsanadas en gran medida por el ACNUR, organismo que destina alrededor del 80% de su presupuesto para apoyar las labores de la Dirección Nacional de Refugio y del Ministerio de Relaciones Exteriores en lo concerniente al tema de refugiados (SCHUSSLER, 2009). Esta falta de autonomía financiera ha sido ampliamente cuestionada, puesto que la mayor parte del personal y recursos destinados a los trámites de refugio son financiados por este organismo, lo cual ha llevado a creer que se ha generado una dependencia programática hacia el ACNUR, la cual a su vez hace que el Estado no pueda tomar decisiones contrarias a las de dicho organismo (RIVERA, et al, 2007).

Por otro lado, si bien el tema del refugio ha cambiado en los últimos años en el Ecuador, existen varias situaciones, más allá del factor económico, que han influido negativamente en la situación de los refugiados colombianos y su integración local. En primer lugar, las crecientes tensiones en las relaciones entre Ecuador y Colombia reforzaron la idea de que el tema de refugiados es un problema que le concierne únicamente a este último país y agravaron la actitud defensiva de nuestros nacionales frente a los refugiados, quitando el carácter humanitario de la figura del refugio (RIVERA, et al, 2007).

Esta concepción ha llevado a que los derechos de los refugiados se limiten aún más con medidas tales como el incremento del personal militar en la frontera norte, el requisito del pasado judicial para entrar al Ecuador durante ciertos periodos determinados y la exigencia de un carné ocupacional para que los refugiados puedan ejercer su derecho al trabajo –documento que por su precio de \$60 es difícil de obtener para muchos de ellos – (RIVERA, et al, 2007).

Finalmente, se debe reconocer también que, aún cuando el Estado Ecuatoriano, a pesar de sus grandes limitaciones, destina importantes recursos a la causa de los refugiados colombianos, este trabajo se ve muchas veces obstaculizado por las opiniones de los mismos nacionales, quienes al enterarse sobre los programas u organizaciones establecidos para ayudar a esta población vulnerable, manifiestan abiertamente su enojo afirmando que no se debería ayudar a los extranjeros por encima de las grandes cantidades de ecuatorianos

indigentes que también necesitan ayuda. Sin embargo, lo que estas personas no consideran es que los refugiados sufren de una vulnerabilidad especial que los hace diferentes tanto de los migrantes económicos como de las otras personas que sufren necesidades y limitaciones y que dificulta aún más su proceso de inserción a nivel local (SCHUSSLER, 2009).

2.3. Los programas para refugiados impulsados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a nivel local

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados fue creado con el objetivo de apoyar a los Estados alrededor del mundo para resolver el problema de que vivían los refugiados que surgieron como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, continúa con su propósito de brindar asistencia a los refugiados en el mundo y encontrar soluciones duraderas para los mismos (ROMERO, 2014). En este sentido, uno de los principales ejes de la agenda del ACNUR es la protección, dentro del cual se ha buscado fortalecer la aplicación de los instrumentos internacionales de los refugiados y mejorar, a la vez, la capacidad de los Estados para recibirlos y protegerlos (ACNUR, 2008).

2.3.1. Mecanismos de asistencia llevados a cabo por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y sus socios para cubrir las necesidades elementales de los refugiados

Desde el año 2000, el ACNUR trabaja en el Ecuador con el objetivo de proteger a la mayor población refugiada de América Latina, de la cual, el 98% proviene de Colombia. En cumplimiento de su mandato, esta agencia busca la protección de las personas refugiadas mediante el fortalecimiento de las políticas públicas y prácticas administrativas locales, la potenciación de sus derechos, la búsqueda de soluciones duraderas (que incluyen a la repatriación voluntaria y el reasentamiento como instrumento de protección) y el diseño de campañas que promueven la solidaridad y la convivencia pacífica y combaten la xenofobia y la discriminación (ACNUR, 2014).

Dentro del esquema de protección, el ACNUR se asegura de brindar asistencia vital a los refugiados que ingresan al territorio ecuatoriano. Tomando en cuenta que la mayoría de refugiados y desplazados internos abandonan sus hogares sin tener la oportunidad de llevar consigo la mayoría de sus objetos

personales, el ACNUR se encarga de proveer artículos de primera necesidad, alimentos y ayuda básica al momento de su llegada (ACNUR, 2014). Para poder llevar a cabo estas acciones, el ACNUR requiere de la asistencia de varios socios estratégicos que le ayuden a coordinar y ejecutar sus diferentes programas (ROMERO, 2014).

En este sentido, el ACNUR cuenta con varios tipos de socios. En primer lugar se encuentran las agencias implementadoras, entre las cuales se puede citar a la Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados, la Fundación Ambiente y Sociedad, la Misión Escalabriniana y el Servicio Jesuita a Refugiados. Por otro lado, existen también los socios operativos, entre los cuales se debe tomar en cuenta a varias instituciones gubernamentales, tales como la Dirección General de Refugio y la Secretaría Nacional del Migrante, cuyos proyectos y acciones serán analizados más adelante, y a varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (OMS, OPS, PMA) (ACNUR, 2010).

Como se mencionaba anteriormente, uno de los organismos que trabaja con el ACNUR en programas de apoyo y asistencia a los refugiados es la Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados HIAS, la cual ha desarrollado mecanismos de asistencia mediante los cuales se brinda información sobre los servicios básicos a los que los refugiados tienen derecho, asesoramiento legal en los trámites de refugio, contribuciones económicas y acceso a una bolsa de empleo para aquellas personas en necesidad de protección internacional (HIAS, 2012).

La Fundación Ambiente y Sociedad también ha desarrollado mecanismos de asistencia para los refugiados colombianos. Esta fundación, que se ha constituido como una de las agencias implementadoras del ACNUR, otorga microcréditos a los refugiados que se encuentran en territorio ecuatoriano (DOBBS, 2014). Adicionalmente, existe también la Misión Escalabriniana que promueve y defiende los derechos de las personas en movilidad, mediante el establecimiento de mecanismos que fortalecen a varios actores del refugio en el país que trabajan en temas de sensibilización sobre la situación de esta población y brindan asesoría jurídica y asistencia en general (MISIÓN ESCALABRINIANA, 2014); al igual que el Servicio Jesuita a Refugiados, el cual se estableció en el

Ecuador en el año 2000 y ha creado mecanismos de apoyo a los refugiados mediante el desarrollo de programas de capacitación y formación a los miembros de esta población y la difusión de la situación de los refugiados mediante campañas de sensibilización (SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS, 2014).

Existen además varias agencias y programas de las Naciones Unidas que participan como socios estratégicos apoyando el trabajo del ACNUR. Por ejemplo, al ser la alimentación uno de los ejes básicos del desarrollo de una persona, la participación de una entidad especializada en el tema se vuelve sumamente necesaria. En este sentido, el Programa Mundial de Alimentos contribuye al objetivo de asistir a los refugiados que llegan al Ecuador, mediante la provisión de raciones alimenticias. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud contribuyen también mediante la realización de campañas y el desarrollo de mecanismos que ayuden a cuidar la salud de los refugiados (ROMERO, 2014).

Pero más allá de la asistencia inicial que el ACNUR y sus socios brindan a los refugiados colombianos que llegan a la ciudad de Quito, existen también otros mecanismos para satisfacer las necesidades de estos. En este sentido, como se menciona al inicio de este apartado, el ACNUR ha desarrollado las llamadas soluciones duraderas, entre las cuales se encuentran el reasentamiento –que será analizado más adelante –, además de la repatriación voluntaria, mecanismo mediante el cual el refugiado regresa de una forma segura y digna a su país de origen basándose en una decisión libre e informada que le permitirá reintegrarse de manera efectiva a su comunidad (UNHCR, 2011).

Finalmente, entre las soluciones duraderas se encuentra la integración local en todos los ámbitos de la comunidad de acogida por parte de los refugiados colombianos, proceso en el cual, como se observará a continuación, el ACNUR – al igual que sus socios estratégicos –juega un papel fundamental (ROMERO, 2014).

2.3.2. Los beneficios de pertenecer a la comunidad de acogida: ¿Qué hace el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para garantizar la integración local de los refugiados colombianos?

La integración local es un proceso que incluye aspectos sociales, culturales, económicos y legales y que tiene por objetivo el proveer a los refugiados el derecho permanente de vivir en el país de asilo. Este proceso se deriva del otorgamiento formal del estatus de refugiado y de la implementación de mecanismos que le permitan vivir y desarrollarse de una forma independiente en la comunidad de acogida (UNHCR, 2011).

La esencia de los procesos de integración local es que un refugiado vaya ampliando el espectro de derechos de los cuales puede disfrutar, a medida que el tiempo pasa y sus vínculos con el Estado receptor se van fortaleciendo. Esta consolidación de la integración local se va realizando a medida que el refugiado accede a la libertad de movilización en el país, a la educación, los servicios de salud y al mercado de trabajo pudiendo alcanzar la naturalización en el país receptor (UNHCR, 2011).

Para que un proceso de integración local pueda producirse, es necesario que se cumplan dos condiciones previas: el país de acogida debe estar de acuerdo con la generación de este proceso y debe existir un ambiente adecuado que permita el desarrollo de los refugiados y que ayude a evitar la posibilidad de nuevos desplazamientos. Adicionalmente, este proceso debe ser gradual y está compuesto por tres dimensiones (UNHCR, 2011).

La primera de ellas es el marco legal: los refugiados deben ser reconocidos como tales por el Estado Ecuatoriano (PÉREZ, 2014). En este proceso, el ACNUR tiene una clara participación al ser parte de la Comisión para Determinar la Condición de Refugiado y contribuyendo con la mayor parte del presupuesto de la institución encargada de este proceso, la DGR (SCHUSSLER, 2009) y al participar en los programas de asistencia legal a los refugiados mediante su apoyo a diversas organizaciones, tales como la Casa de la Movilidad de la ciudad de Quito (ACNUR, 2010).

La segunda esfera que conforma este proceso es la económica (UNHCR, 2011). Los refugiados deben dejar de depender de las ayudas del Estado y de la

asistencia humanitaria provista por las fundaciones y organizaciones locales de forma gradual y convertirse en actores que contribuyen a la economía local. En un inicio, el ACNUR, con la ayuda de sus socios locales, provee a los refugiados con los recursos que necesitan para sobrevivir. Tal es el caso del Programa de Asistencia Humanitaria creado por HIAS en el año 2007 por petición del ACNUR con el objetivo de proporcionar comida, refugio y artículos de primera necesidad para los refugiados (HIAS, 2013). Este programa, que se encuentra en funcionamiento en ocho localidades ecuatorianas, incluyendo a la ciudad de Quito, brinda asistencia humanitaria a los refugiados, especialmente durante su primer año de estadía en el Ecuador (ROMERO, 2014).

Sin embargo, la donación de alimentos y provisiones no puede ser ilimitada y debe mantenerse únicamente mientras los refugiados se habitúan a sus nuevas condiciones de vida en la ciudad de Quito y logran establecerse en ella de forma efectiva. En este sentido y con el objetivo de apoyar el desarrollo económico de esta población, el ACNUR y sus socios han desarrollado diferentes programas que contribuyen a su empoderamiento y autosuficiencia económica. Entre ellos se puede citar a los microcréditos otorgados por la Fundación Ambiente y Sociedad, los cuales son utilizados por los refugiados para el establecimiento de sus propios negocios, tal como en el caso de Carlos, un refugiado colombiano que habita en la ciudad de Quito que recibió créditos por parte de esta fundación y de otras instituciones (Fundación Maquita Cushunchic) para el equipamiento y expansión de su propia panadería, la cual incluyó llegó a emplear mano de obra ecuatoriana (ACNUR, 2014).

Finalmente, una integración local efectiva se consigue mediante la inclusión de las esferas sociales y culturales. Para que este tipo de integración se consolide es necesario que los refugiados y la población local interactúen entre sí mediante la participación en la vida social comunitaria sin que exista el miedo a la discriminación y a la hostilidad y sin que los refugiados deban abandonar su propia cultura (UNHCR, 2011).

Uno de los mecanismos específicos establecidos por HIAS es la creación del Programa de Asistencia Psicosocial, creado en 2003 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los refugiados colombianos mediante la provisión de

servicios de ayuda y terapia psicológica a aquellos que han sobrevivido a torturas y experiencias traumáticas a fin de ayudarlos a integrarse en la vida social de la comunidad de manera más efectiva. (HIAS, 2013). Otro programa constituyen las campañas de sensibilización organizadas por el ACNUR y las ferias realizadas con los refugiados colombianos en la ciudad de Quito que permiten que la cultura de estos pueda ser apreciada por los habitantes locales y les brindan un espacio en el que pueden compartir no solo con sus demás compatriotas refugiados, sino también integrarse a la sociedad Quiteña (HERNÁNDEZ, 2014).

2.3.3. La vinculación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados con el Estado Ecuatoriano

El Estado Ecuatoriano es el encargado de llevar a cabo las políticas públicas a nivel nacional en materia de refugiados, involucrando diversos actores de la sociedad y del sistema internacional de protección de los mismos (RIVERA, et al, 2007). En este sentido, uno de los principales organismos encargados de dar soporte al Estado en materia de protección y asistencia a esta población es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ROMERO, 2014), cuya apertura en el Ecuador en el año 2000 respondió a las expulsiones masivas de personas hacia el país del sur generadas por el conflicto colombiano (RIVERA, et al, 2007).

Inicialmente, se observa que uno de los principales objetivos del ACNUR es asegurarse de que los estados conozcan sus obligaciones para con los refugiados y solicitantes de asilo y las cumplan, ya que esta agencia no puede suplir la protección inmanente que deben brindar los mismos a esta población vulnerable (PIZARRO, 2008). Para cumplir este objetivo, el ACNUR, a más de participar como observador en los procesos de reconocimiento del estatus de los refugiados (ACNUR, 2010) brinda al Estado Ecuatoriano asesoramiento técnico en temas de Derecho Internacional de Refugiados con el objetivo de facilitar la adopción de políticas públicas y normativas que reconozcan y respeten los derechos de esta población y que faciliten su integración a nivel local (CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 2009).

Por otro lado, el ACNUR contribuye también con la labor del Estado Ecuatoriano mediante la financiación de los proyectos que lleva a cabo en temas

de refugio y asistencia, puesto que es el integrante del panorama internacional de protección que cuenta con la mayor cantidad de recursos económicos (SCHUSSLER, 2009), los cuales provienen del presupuesto general de la Organización de las Naciones Unidas y sobre todo de donaciones directas de los gobiernos de varios países (PÉREZ, 2014).

Dentro de su esquema de financiación, el ACNUR destina la mayor parte de sus recursos a las acciones ejecutadas por la Dirección General de Refugio, entre las cuales se puede citar a las diversas campañas de sensibilización ejecutadas a nivel nacional, a los proyectos que buscan la integración social de aquellos refugiados que cuentan con un reconocimiento oficial de su estatus, al programa del Registro Ampliado desarrollado en el año 2009 (SCHUSSLER, 2009) y, lógicamente, a los procesos regulares de determinación de la calidad de los refugiados –procesos cuyos costos son asumidos por el Alto Comisionado prácticamente en su totalidad (RIVERA, et al, 2007).

Las acciones del ACNUR en Ecuador giran también alrededor de los Proyectos de Apoyo Comunitario e Integración (PACIs), los cuales abarcan diferentes áreas, tales como educación, salud y generación de ingresos, basándose en un trabajo conjunto con las autoridades, la población local y los refugiados (CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 2009). En este sentido, hasta el año 2007, se han realizado 65 proyectos comunitarios en el Ecuador con un total de 23.565 beneficiarios, los cuales contaron también con inversiones provenientes de la comunidad internacional, dentro de un marco de responsabilidad compartida (ACNUR, 2007). Para el año 2008, se alcanzó la cifra de 50.000 personas beneficiadas (CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 2009).

Si bien las acciones vinculadas entre el Estado Ecuatoriano y el ACNUR han sido, en términos generales, positivas, se han generado diversas críticas. En primer lugar, se ha visto al ACNUR como una entidad que genera una especie de monopolio en materia de asistencia y protección a los refugiados en el país al ser el mayor contribuyente económico y al mantener una gran red de ONGs que implementan sus proyectos en el territorio Ecuatoriano (SCHUSSLER, 2009).

Esta amplia participación del ACNUR, como se mencionó anteriormente, genera el riesgo de que se desarrolle una dependencia considerable del Estado Ecuatoriano hacia esta Agencia y de las fundaciones y organizaciones de apoyo, las cuales han demostrado ya mantener vínculos paternalistas con el ACNUR (RIVERA, et al, 2007). Finalmente, la participación del ACNUR en el proceso de determinación de la condición de refugio –mediante la financiación de este proceso –lo convierte en juez y parte del proceso (RIVERA, et al, 2007), situación que también ha generado críticas y constituye una gran limitación en la vinculación efectiva entre el ACNUR y el Estado Ecuatoriano.

Finalmente, debe notarse que si bien el Estado Ecuatoriano garantiza la protección de los derechos de los refugiados establecidos tanto en la Convención de Ginebra como en la Declaración de Cartagena de 1984, sus limitaciones de presupuesto y capital humano no han permitido que estos derechos sean respetados a cabalidad. En este sentido se observa que, a pesar de los esfuerzos del gobierno ecuatoriano, del ACNUR y de sus socios estratégicos por desarrollar proyectos que satisfagan las necesidades de protección de los refugiados colombianos, no se logra consolidar una integración efectiva de esta población en la sociedad Quiteña, situación que se evidencia en la falta de conocimiento de los refugiados sobre sus derechos, en la falta de acceso a servicios básicos y en las complejas dinámicas sociales establecidas entre éstos y nuestros connacionales.

CAPITULO III

EL REASENTAMIENTO DE REFUGIADOS COLOMBIANOS EN ESTADOS UNIDOS COMO UNA SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN

En una situación ideal en el país de acogida, los refugiados deberían ser capaces de integrarse en todos los aspectos de la vida comunitaria de dicho lugar en un contexto en el que todos sus derechos sean respetados y se les permita desarrollar todas sus potencialidades. Sin embargo, esto no sucede en todos los casos, razón por la cual es necesario buscar nuevas soluciones para los problemas de la población refugiada. Una de ellas es el reasentamiento en un tercer país que pueda ofrecer a este grupo vulnerable la posibilidad de mejorar su calidad de vida y de disfrutar de la mayoría de derechos de los que goza la población local.

3.1. El programa de reasentamiento en Estados Unidos

El reasentamiento es una solución para los problemas de los refugiados y una experiencia que cambia definitivamente sus vidas. Sin embargo, el número de países que participan en los programas de reasentamiento de refugiados es considerablemente reducido y entre ellos se puede citar principalmente a Australia, Canadá, varios países nórdicos e incluso a ciertos países de Latino América, los cuales se han comprometido con esta opción durante los últimos años. Hasta el momento, el país que más se ha destacado en términos de reasentamiento ha sido Estados Unidos (ACNUR, 2010).

3.1.1. Conceptos claves: una definición del Reasentamiento como una solución duradera para los refugiados

En términos generales y de acuerdo con la definición provista por el ACNUR, el reasentamiento se refiere a la selección y transferencia de un refugiado de un país en el cual ha solicitado protección a un tercer país que ha accedido a acogerlo con un estatus de residente permanente. Este tercer país le garantiza que no será devuelto a su país de origen y que el refugiado (y sus familiares o dependientes) gozarán de derechos similares a aquellos otorgados a los nacionales del tercer país con la posibilidad para el refugiado de convertirse en un ciudadano nacionalizado del mismo (UNHCR, 2011).

El reasentamiento es aplicado cuando el primer país de asilo no puede ofrecer protección efectiva al refugiado como resultado de las siguientes situaciones: el primer país de asilo no puede brindarle reconocimiento oficial como refugiado, o no cuenta con la infraestructura ni los recursos económicos suficientes como para hacerse cargo del refugiado, o el gobierno del primer país siente que está siendo involucrado en el conflicto del país de origen del solicitante o debido a problemas entre la misma población refugiada y la población local del primer país receptor (ACCEM, 2005). También es considerado cuando el retorno a su país de origen no es una opción para el refugiado (ICMC, 2007).

Junto con la repatriación voluntaria y la integración local, el reasentamiento constituye una de las tres soluciones duraderas propuestas por el ACNUR para los refugiados. En este sentido, se considera que el reasentamiento constituye una solución duradera puesto que resuelve los problemas que tenía el refugiado en el primer país de asilo. Por ejemplo, existen muchos casos en que los refugiados no cuentan con la documentación necesaria para su estadía en el primer país de asilo o son víctimas de condiciones de vida inadecuadas; entonces, el país de reasentamiento provee al refugiado de una documentación de residencia y pone a su disposición diferentes tipos de proyectos de ayuda que le permitirán mejorar significativamente sus condiciones de vida (LEORO, 2014).

Evidentemente existen varios criterios de base que un refugiado debe cumplir para ser considerado como candidato al reasentamiento (LEORO, 2014). En términos generales, existen varias categorías dentro de las necesidades de reasentamiento: personas en necesidad de protección legal y física, sobrevivientes de la violencia y la tortura, personas con necesidades médicas, mujeres y niñas en riesgo, reunificación familiar, niños y adolescentes en riesgo, refugiados adultos mayores y los refugiados sin perspectivas de integración local (ACNUR, 2004), los cuales serán descritos en detalle más adelante.

A más de ser una solución duradera para los refugiados, el reasentamiento cumple con dos funciones adicionales. En primer lugar, constituye una herramienta internacional para proteger a aquellos refugiados que se encuentran en peligro en el primer país de acogida. Y, en segundo lugar, el reasentamiento se presenta como una de las más claras expresiones de la solidaridad internacional y

los mecanismos de responsabilidad compartida, reduciendo el impacto y la carga de la presencia de refugiados en el primer país receptor (UNHCR, 2011). En este sentido, el reasentamiento constituye un acuerdo entre varios países para compartir cargas con el objetivo de que ningún país tenga que brindar protección a un número desproporcionado de refugiados (REACH OUT REFUGEE PROTECTION TRAINING PROJECT, 2005).

Sin embargo, se debe considerar que el reasentamiento no constituye en sí un derecho de los refugiados, aun cuando existen bases legales para reclamarlo como una solución duradera establecidas en la Convención de 1951 (REACH OUT REFUGEE PROTECTION TRAINING PROJECT, 2005). Esta es una de las razones por las cuales el reasentamiento tiene un espectro de ejecución sumamente limitado (FELLER, 2006), aplicándose a una cantidad bastante reducida de casos identificados de forma individual, que alcanza el 1% del total de refugiados de interés del ACNUR (LONG, 2009). En el caso específico del Ecuador y de acuerdo con estadísticas presentadas por José Sandoval, Director de Refugio durante el año 2011, se observa que existe un promedio de alrededor de 500 casos anuales de reasentamiento (QUINTANA, 2011, abril, 09).

Esta situación encuentra su origen en el establecimiento de cuotas de reasentamiento por parte de los terceros países. Al igual que muchos países de reasentamiento, Estados Unidos recibe únicamente a un número limitado de refugiados. Estas cuotas anuales dejan fuera a varios refugiados que cumplen con las condiciones iniciales para ser reasentados, pero que no cumplen con criterios adicionales impuestos por estos países, tales como hablar la lengua local del país receptor o tener determinadas habilidades (REACH OUT REFUGEE PROTECTION TRAINING PROJECT, 2005). Sin embargo, cabe notar que a pesar de tener un número sumamente bajo de beneficiarios, los programas de reasentamiento continúan siendo considerados como una solución duradera y efectiva para la problemática de los refugiados debido a la mejora en las condiciones de vida de aquellos que han sido reasentados (LEORO, 2014).

3.1.2. Las políticas de reasentamiento de Estados Unidos

Estados Unidos es el país más representativo en la temática del reasentamiento de refugiados (ACNUR, 2010). De acuerdo con las estadísticas

del ACNUR, alrededor del 1% de los refugiados a nivel mundial son reasentados en un tercer país; de esta cifra, más de la mitad son reasentados en los Estados Unidos (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2014). Estas altas cifras responden a la política estadounidense de permitir el ingreso de personas de interés en materia humanitaria dentro de su territorio, basada en el propósito de constituirse como un lugar seguro para las personas perseguidas y oprimidas a nivel internacional, política que tiene sus orígenes en 1948 con la creación de la primera legislación sobre refugiados que permitió el ingreso al territorio norteamericano de alrededor de un cuarto de millón de europeos desplazados (OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT, 2014).

A partir de este momento, se produjeron varias llegadas masivas de refugiados provenientes de Hungría, Polonia, Yugoslavia, China, Corea y Cuba que huían de los regímenes comunistas establecidos en sus países de origen. Posteriormente, se incluyó en la figura del reasentamiento a cientos de miles de refugiados indochinos en el año de 1975. Estas experiencias sentaron las bases para la elaboración de la Ley de Refugiados de 1980 –que constituye una enmienda a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1954 –, en la cual se incluyó la definición de refugiado propuesta por las Naciones Unidas en la Convención de 1951 y gracias a la cual se estandarizaron los servicios de reasentamiento para los refugiados admitidos en este país (REFUGEE COUNCIL, 2014). Adicionalmente, la Ley de 1980, basada en los cambios establecidos por el Protocolo de 1967 en materia de refugio, contempla una definición de refugiado que es tanto geográfica como políticamente neutra, (MARTIN, 2010).

Para que un candidato sea aceptado dentro del programa de reasentamiento debe evidentemente ajustarse a la definición de refugiado establecida en esta legislación (LEORO, 2014), la cual excluye automáticamente, en términos generales, a cualquier persona que haya participado en la persecución de otro individuo o que sea sospechosa de representar una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos (THE LIBRARY OF CONGRESS, 2014). Estos criterios de exclusión serán analizados en los apartados subsiguientes.

Un aspecto sumamente importante de la política de reasentamiento de este país es el establecimiento de cuotas anuales de refugiados aceptados. Al

inicio de cada año fiscal, el Presidente consulta con el Congreso sobre el establecimiento de una cuota general para la admisión de refugiados, dividida en 5 regiones establecidas y una reserva adicional para una región no determinada, la cual puede ser utilizada en una de las 5 regiones previa notificación al Congreso (MARTIN, 2010). Las asignaciones de cuotas por región han variado cada año como se observará en la tabla a continuación:

TABLA 1
CUOTAS DE ADMISIÓN DE REFUGIADOS PARA REASENTAMIENTO

Región / Año	Cuota					
	2010	2009	2008	2007	2006	2005
África	15.500	12.000	16.000	22.000	20.000	20.000
Asia Oriental	18.000	20.500	20.000	11.000	15.000	13.000
Europa / Asia Central	2.500	2.500	3.000	6.500	15.000	9.500
América Latina / El Caribe	5.500	5.500	3.000	5.000	5.000	5.000
Cercano Oriente / Sur de Asia	38.000	39.500	28.000	5.000	5.500	2.500
Reserva adicional	500	0	10.000	20.000	10.000	20.000
TOTAL:	80.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000

Fuente: U.S. Department of State, Proposed Refugee Admissions
Elaborado por: Adriana Monar Salazar

Las cifras presentadas en esta tabla corresponden a las cuotas definitivas asignadas entre los años 2005 y 2010. Las cuotas de reasentamiento varían cada año dependiendo de la situación del refugio a nivel mundial. En caso de que exista una situación de emergencia estas cuotas pueden ser modificadas –tanto las cuotas regionales como las cuotas totales – (JEFFERYS, 2006). Por ejemplo, para el año 2008 se observó un incremento de 70.000 a 80.000 plazas debido al aumento en las necesidades de reasentamiento de refugiados iraquíes, butaneses e iraníes, lo que explica el significativo incremento en las cuotas parciales asignadas a la región Cercano Oriente / Sur de Asia (MARTIN y HOEFER, 2009), incremento que se mantiene incluso hasta el año 2010. Las cuotas asignadas a América Latina han sido históricamente bajas en comparación a las demás regiones.

Por último, es importante identificar a las instituciones que se encargan del proceso del reasentamiento. Durante el proceso de selección y ejecución de esta solución duradera en el país norteamericano participan varias agencias

gubernamentales: La Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM por sus siglas en inglés) perteneciente al Departamento de Estado, que se encarga de dirigir las políticas de reasentamiento y coordina el proceso de los candidatos en el exterior; y, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, pertenecientes al Departamento de Seguridad Nacional que se encargan de determinar la elegibilidad de un candidato como refugiado y de ejecutar las verificaciones de seguridad previas a la aceptación del caso. Finalmente, cuando un refugiado es aceptado para el reasentamiento en Estados Unidos, este país debe encargarse de proteger sus derechos (LEORO, 2014), y lo realiza mediante la PRM, que se encarga del transporte y recepción inicial de los refugiados reasentados y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados que administra los programas locales y estatales de asistencia (REFUGEE COUNCIL USA, 2014).

3.1.3. ¿Cuáles son las funciones que cumple el Alto Comisionado de las Naciones Unidas respecto al reasentamiento?

El reasentamiento es una solución que requiere la ejecución de una serie de actividades coordinadas con diferentes socios estratégicos (UNHCR, 2014), entre los cuales se encuentran las Organizaciones No Gubernamentales ubicadas en el primer país de asilo y en el país de reasentamiento que brindan diversos tipos de asistencia a los refugiados; y los gobiernos de ambos países (ROMERO, 2014). Estos socios, junto con el ACNUR, se encargan de llevar a cabo varias tareas, tales como la identificación in situ de aquellos individuos que tienen una necesidad de reasentamiento, procesar cada caso y recibir y apoyar a los refugiados luego de su llegada al tercer país (UNHCR, 2014).

En primer lugar, el ACNUR, junto con sus socios estratégicos locales se encarga de identificar los casos potenciales para el reasentamiento basándose en una serie de categorías de necesidades de protección (LEORO, 2014). Una identificación adecuada de un caso de reasentamiento debe estar basada en una correcta determinación de las necesidades de protección del refugiado (ROMERO, 2014). Para lograrlo, el ACNUR hace uso de herramientas como *progres* –implementado en 2004 –, donde se registran las necesidades de cada refugiado, permitiendo una planeación estratégica de los programas de reasentamiento en el futuro y una identificación mucho más clara de cada caso potencial (UNHCR, 2011). Adicionalmente, sus funcionarios realizan evaluaciones

de casos mediante la *herramienta para la identificación de personas en situación de mayor riesgo*, la cual permite identificar las necesidades de protección de un individuo basándose en entrevistas formales estructuradas y en listas de verificación (UNHCR, 2010).

La información obtenida mediante estas herramientas, permite realizar una referencia formal de un refugiado para un caso de reasentamiento, la cual, con el objetivo de asegurar un procesamiento justo y adecuado, debe contener información básica sobre el refugiado, la razón por la que fue referido, el nivel de prioridad del caso y su composición familiar (ACNUR, 2004). Una vez que un caso es referido para su consideración dentro del programa de reasentamiento, se debe analizar si el mismo está incluido en una de las categorías de necesidades de reasentamiento que constituyen los criterios de selección (LEORO, 2014), que serán descritas en el siguiente apartado.

Posteriormente, el ACNUR se encarga de verificar el caso y evaluarlo mediante una nueva entrevista formal. Si el encargado del caso considera que el refugiado se encuentra en necesidad de reasentamiento, preparará un *formulario de inscripción de reasentamiento* en el cual se incluirá toda la información del refugiado y su familia y se demostrará no sólo que el individuo tiene un caso de refugio, sino una clara necesidad de ser reasentado en un tercer país (ACNUR, 2004).

El ACNUR se encarga también de determinar el país adecuado para el reasentamiento de un refugiado (LEORO, 2014). Para el efecto, se debe tomar en cuenta varios aspectos que incluyen una correlación entre el tiempo que tarda un país en procesar un caso de reasentamiento y la vulnerabilidad y prioridad que tiene el caso, los criterios de admisión de dicho país, sus cuotas de admisión, el idioma y aspectos culturales, la composición familiar del refugiado y, si es posible, su preferencia sobre el país de reasentamiento (UNHCR, 2011).

Una vez se ha seleccionado el país de reasentamiento, el ACNUR se encarga de enviar el formulario de registro para que el caso sea considerado para una entrevista por los funcionarios del gobierno del país receptor (JARA, 2014). Existen situaciones en las que un caso puede ser aceptado para el reasentamiento sin que se realice esta entrevista, mediante una presentación *vía*

dossier (ACNUR, 2004), sin embargo, en el caso de Estados Unidos, todos los candidatos deben ser entrevistados por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional para ser considerados en el programa (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013).

Por último, debe tomarse en consideración que el ACNUR no participa únicamente en el proceso de recomendación de casos para el reasentamiento, sino que también tiene un rol activo en la discusión de las políticas de reasentamiento y el apoyo a sus socios en el mejoramiento de su aplicación. Para esto, se ha conformado el *Grupo de Trabajo de Reasentamiento* que está compuesto por los países de reasentamiento y el ACNUR. En el mes de junio de cada año, este grupo de trabajo es expandido para incluir a las ONGs socias de los programas en las *Consultas Tripartitas Anuales*. Finalmente, el ACNUR trabaja para fortalecer los programas de reasentamiento y consolidarlos en nuevos países mediante intercambios con los países de reasentamiento tradicionales (UNHCR, 2014).

3.2. El proceso de selección para ser reasentado

Como se indicaba anteriormente, el reasentamiento no constituye en sí un derecho para todos los refugiados, sino más bien una solución aplicable únicamente a aquellos refugiados que cumplen con una serie de criterios para ser elegidos. En este sentido, una vez los potenciales candidatos han sido identificados, recomendados por los socios estratégicos del ACNUR, deberán someterse a un proceso de selección que incluye entrevistas y la verificación de sus antecedentes para asegurar que sean verdaderamente elegibles para participar en este proceso. En los siguientes apartados se describirá quiénes pueden ser elegidos para ser reasentados en un tercer país y el proceso que debe seguirse.

3.2.1. Ubicación de los candidatos potenciales para el reasentamiento: criterios de selección.

La posibilidad de ser reasentado en un tercer país no es una figura muy conocida para la mayoría de los refugiados colombianos que habitan en la ciudad de Quito, a pesar de que la información se encuentra disponible en varios lugares, tales como el sitio web del ACNUR. En principio, no existe ningún impedimento

para que una persona solicite individualmente –sin la recomendación de alguno de los socios estratégicos del ACNUR –ser considerada para el reasentamiento (LEORO, 2014). Sin embargo, estos socios participan de una forma muy activa en el proceso recomendando la mayor parte de casos potenciales para reasentamiento. Esto se realiza con el objetivo de establecer una especie de filtro o salvaguarda que evite que el ACNUR se vea obligado a entrevistar a grandes cantidades de personas que en realidad no tienen un caso con una verdadera necesidad de reasentamiento, con el objetivo de optimizar la utilización de recursos económicos y humanos, al igual que el tiempo que toma este proceso (JARA, 2014).

Instituciones como la Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados HIAS y la Fundación Ambiente y Sociedad son las encargadas de realizar las entrevistas de identificación previas para la recomendación del análisis de un caso potencial de reasentamiento (ROMERO, 2014). Los funcionarios de estas organizaciones recomiendan al ACNUR el procesamiento de los casos que consideren adecuados basándose en los siguientes criterios o categorías, que han sido establecidas en el manual de reasentamiento de este último organismo (JARA, 2014):

En primer lugar se encuentra la necesidad de protección física o legal del refugiado en el primer país de asilo. Esta necesidad de protección puede variar dependiendo de las características personales del individuo en cuestión, pero en términos generales, un refugiado es considerado dentro de esta categoría si: se encuentra en peligro de ser retornado a su país de origen, de ser arrestado o encarcelado de forma arbitraria o si cualquiera de sus derechos fundamentales se encuentra amenazado (ACNUR, 2004), consideración que se aplica de forma especial en el caso de grupos doblemente vulnerables, como aquellas personas pertenecientes al grupo GLBTI (UNHCR, 2011).

Otra de las categorías de refugiados considerados para el reasentamiento está constituida por aquellas personas que han sobrevivido a actos de violencia o tortura, debido al trauma que han enfrentado y al efecto de estos actos en su salud física y emocional. Dentro de esta categoría se encuentran los refugiados que han sufrido violencia o tortura en su país de origen o en el primer país de

asilo, aquellos que tienen graves secuelas psíquicas o psicológicas aunque no muestren signos aparentes de tortura física, aquellos cuyos traumas pueden ser agravados por su estadía en el primer país de asilo o por su retorno al país de origen y aquellos que necesitan atención médica y/o psicológica que no está disponible en el país de asilo (ACNUR, 2004).

Aquellos refugiados con necesidades médicas especiales también pueden ser considerados para reasentamiento. Esta es una de las categorías en que más retos se presentan y con mayor limitación de oportunidades. Para garantizar la imparcialidad dentro de esta categoría, es recomendable que la evaluación de las necesidades médicas del individuo en consideración sea efectuada por un médico independiente al proceso de reasentamiento. Esta categoría contempla a individuos cuya vida se encuentra en riesgo o cuya condición puede empeorar significativamente si no reciben tratamiento adecuado, el cual no está disponible en el primer país de asilo y no puede ser llevado a cabo de forma temporal en un tercer país (UNHCR, 2014). Cabe notar que tener una condición médica especial, no perjudica la consideración de un refugiado dentro del resto de categorías de reasentamiento (ROMERO, 2014).

Las mujeres y niñas refugiadas en riesgo corresponden a una categoría especial dentro de los criterios para el reasentamiento. Esta población es doblemente vulnerable debido a que puede enfrentar formas únicas de persecución basadas en el género, tales como violencia sexual, abuso físico, la violación “correctiva” de mujeres que son consideradas lesbianas, explotación y marginalización económica por género, mutilación genital, entre otras (ACNUR, 2004).

Por otro lado, la reunificación familiar es también un criterio de selección. La familia es la base de una sociedad y cobra vital importancia al momento de adaptarse a un nuevo ambiente y superar las experiencias traumáticas que conllevan los conflictos violentos que han generado la necesidad de refugio (ROMERO, 2014). Cuando no se promueve la oportunidad de que los miembros de una familia de refugiados se reunifiquen, existe el riesgo de que el reasentamiento no sea una solución duradera y sostenible. Dentro del reasentamiento por reunificación familiar pueden ser considerados los cónyuges,

hijos, padres de un refugiado adulto, menores no acompañados –a ser reunificados con sus hermanos –y casos especiales de dependientes que sean o no parientes del refugiado (ACNUR, 2004). Debe tomarse en cuenta de que para que esta figura se aplique, al menos uno de los miembros de la familia debe encontrarse previamente en el país de reasentamiento (UNHCR, 2011).

Los niños y adolescentes en general constituyen también una categoría especial debido a su estatus legal y social y a su nivel de dependencia. Dentro de esta categoría se consideran a personas menores de 18 años con un caso de refugio en el cual el reasentamiento haya sido identificado como la mejor solución luego de la realización de un proceso de *Best Interests Determination (BID)* o determinación del interés superior del menor (ACNUR, 2004). Por otro lado, al ser la edad un factor importante dentro del reasentamiento, los adultos mayores también constituyen una categoría independiente debido a su alta vulnerabilidad. Por lo general, se busca que el refugiado adulto mayor sea reasentado con su familia y, de no ser posible reunificarlo, se trata de ubicar una familia adoptiva adecuada (ACNUR, 2004).

Finalmente se encuentra la categoría de falta de una perspectiva duradera de integración local, la cual incluye a refugiados que no necesitan de una protección inmediata, pero que no tienen la oportunidad de retornar de una forma segura a su país de origen en el futuro ni de establecerse definitivamente en el país de asilo, debido a que se encuentran en una situación de “limbo”, tanto en materia económica, social o psicológica y dependen en gran medida de la asistencia externa –cuando se encuentra disponible –para acceder a los servicios básicos necesarios para su subsistencia (educación, atención médica, acceso al trabajo y a la propiedad), es decir que no son autosuficientes en ninguno de estos niveles (ACNUR, 2004).

3.2.2. Criterios de exclusión del gobierno estadounidense

Los lineamientos para determinar qué persona puede ser considerada como un refugiado se encuentran establecidos en instrumentos internacionales tales como la Convención de 1954 y su Protocolo de 1967 (LEORO, 2014). Sin embargo, cada país tiene una legislación propia. En el caso específico de los Estados Unidos, los lineamientos establecidos por estos instrumentos constituyen

la base de la Ley de Refugiados de 1980, la cual rige las políticas en materia de refugio en este país (REFUGEE COUNCIL, 2014). Como se indicaba anteriormente, este instrumento detalla qué personas pueden ser reconocidas como refugiadas y, por ende, recibir la protección del Estado y qué personas quedan excluidas de esta protección.

En este sentido, con el objetivo de proteger la integridad del reasentamiento, es importante que se tomen en cuenta ciertos criterios de exclusión de refugiados antes de que un caso sea considerado dentro de estos procesos y referido a un país de reasentamiento. De acuerdo con la legislación norteamericana, para que una persona sea considerada para el reasentamiento debe ajustarse a la definición de refugiado establecida en la Ley de Nacionalidad e Inmigración (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013), la cual excluye automáticamente de la figura del refugio, en primer lugar, a cualquier persona que haya ordenado, incitado, o participado de cualquier manera en la persecución de otro individuo debido a su raza, condición, religión u orientación política (THE LIBRARY OF CONGRESS, 2014).

Por otro lado, cualquier individuo que haya sido reasentado previamente en un tercer país queda fuera de la posibilidad de ser incluido en el programa estadounidense de reasentamiento (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013). Además, aquellas personas que sean sospechosas de representar una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos; aquellas que hayan sido condenadas por un crimen grave y aquellas que sean sospechosas de haber cometido un crimen no político grave fuera del territorio estadounidense tampoco serán consideradas para su reasentamiento en el país norteamericano (THE LIBRARY OF CONGRESS, 2014).

Entre estos criterios también se presta atención a aquellos refugiados que se hayan visto involucrados en actos de espionaje o terrorismo, hayan sido miembros de partidos comunistas o de cualquier otro tipo de regímenes totalitarios o hayan cometido actos de genocidio o persecución Nazi. Por esta razón, un refugiado debe pasar por una serie de chequeos biográficos y biométricos para garantizar que no representa una amenaza para el país receptor antes que su

aprobación final dentro del programa de reasentamiento sea emitida (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013).

En el caso concreto de los refugiados colombianos, se ha observado que aquellos candidatos que han trabajado en el procesamiento de coca o de otras sustancias ilegales, han tenido antecedentes penales relacionados con el narcotráfico o han cometido delitos graves tales como el asesinato, han sido excluidos de los programas de reasentamiento en Estados Unidos (LEORO, 2014). También existen casos de hombres y mujeres que se han visto involucrados en la prostitución y cuyo proceso de reasentamiento ha sido negado debido a esta práctica (JARA, 2014). Sin embargo, si se llega a demostrar claramente que la prostitución se ha ejercido durante un corto plazo y únicamente por motivos extremos de supervivencia, el caso de reasentamiento podría ser aceptado (LEORO, 2014).

Estos criterios de exclusión son revisados por los funcionarios del ACNUR antes de que un caso sea recomendado a un tercer país. Sin embargo, existen casos en los cuales los criterios de exclusión salen a relucir luego de que el caso haya iniciado el proceso de reasentamiento; en estas circunstancias, el caso debe ser remitido a la unidad de protección para que la exclusión del programa de reasentamiento sea considerada (UNHCR, 2011). Entre estos casos de exclusión se podría considerar a aquellas personas que tienen condiciones médicas riesgosas, puesto que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos excluye de la figura del reasentamiento a los refugiados que tienen ciertas enfermedades contagiosas, desórdenes físicos o mentales y problemas de abuso y adicción a las drogas al momento de la aplicación al programa (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013).

Sin embargo, en caso de que estos problemas de salud sean tratados de manera efectiva y exitosa, pueden dejar de constituir un criterio de exclusión en un caso particular. Adicionalmente, otros criterios de exclusión también pueden ser reconsiderados en caso de que el Departamento de Seguridad Nacional lo considere pertinente y emita un documento de exención, ya sea por propósitos humanitarios, para asegurar la unidad de una familia o por cualquier otra razón de interés público (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA,

2013). Por ejemplo, ciertos refugiados que experimentaron retrasos en el procesamiento de sus solicitudes debido a que apoyaron de forma material, bajo coerción, a los grupos irregulares colombianos vieron sus casos resueltos gracias a la emisión de ciertas exenciones durante los años 2007 y 2008 (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2011).

3.2.3. El rol de las misiones de selección de Estados Unidos y su vinculación con el ACNUR

Si bien el ACNUR y sus ONGs socias llevan a cabo el largo proceso de identificar a los potenciales candidatos para el reasentamiento, filtrar a aquellos que pueden demostrar una verdadera necesidad de ser reasentados en un tercer país, analizar y recomendar los diferentes casos y brindar apoyo a los refugiados durante este proceso, es el país receptor de refugiados reasentados quien toma en última instancia la decisión de aprobar o no la solicitud de reasentamiento de un individuo (JARA, 2014).

En primer lugar, la aplicación de un refugiado para su reasentamiento en Estados Unidos debe ser enviada con documentación de apoyo (LEORO, 2014). El objetivo del envío de esta documentación, es corroborar el caso de refugio del individuo y puede incluir reportes sobre las condiciones del país, certificados de defunción, órdenes de arresto, certificados de afiliación a un determinado grupo, entre otros, los cuales serán revisados por el oficial encargado de la entrevista con el objetivo de corroborar su autenticidad (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013). Sin embargo, en muchos de los casos, los refugiados colombianos no cuentan ni siquiera con un documento de identidad, debido a que las condiciones de violencia sufridas en su país los obligaron a huir de forma inmediata, sin tener la oportunidad de llevar consigo muchas de sus pertenencias (ROMERO, 2014). En estos casos, los encargados de la decisión de reasentamiento en Estados Unidos pueden utilizar únicamente el testimonio del refugiado –de ser este creíble –sin la necesidad de documentación adicional. (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013).

Como se dejó dicho, existen ocasiones en los que un caso puede ser procesado basándose únicamente en la presentación de un informe del ACNUR respecto a la situación del refugiado. Este tipo de selección tiene la ventaja de ser

más rápido y económico puesto que excluye el viaje del personal que debe entrevistar al refugiado. Sin embargo, los países de reasentamiento son cada vez más renuentes a aceptar casos procesados con esta metodología puesto que no existe la exactitud de una entrevista personal (RUE, 2008).

La ventaja de ser entrevistado personalmente por una misión de selección radica en el hecho que el refugiado tiene la oportunidad de preparar y defender su propio caso para el reasentamiento, a la vez que permite a los países de reasentamiento seleccionar a los mejores candidatos basándose en información de primera mano y en el propio conocimiento y juicio de sus funcionarios (RUE, 2008). En el caso de Estados Unidos, todos los refugiados aplicantes deben ser entrevistados previamente (LEORO, 2014).

Los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional son los encargados de realizar esta entrevista. Existen países donde el Departamento de Seguridad Nacional cuenta con oficinas permanentes encargadas de efectuar estas entrevistas; sin embargo, en el caso del Ecuador, las mismas son llevadas a cabo por funcionarios que viajan al país únicamente para realizar el análisis de los casos y retornan a Estados Unidos para continuar con el procesamiento de los mismos (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013). Estas son las llamadas misiones de selección (JARA, 2014).

Las misiones de selección de Estados Unidos trabajan coordinadamente con el ACNUR para realizar las entrevistas de elegibilidad de los refugiados colombianos. En caso de ser necesario, el ACNUR apoya a las misiones en la consecución de intérpretes que participan en la traducción de las entrevistas (JARA, 2014). El rol de los intérpretes y de los entrevistadores es de vital importancia (LEORO, 2014) tomando en cuenta que la claridad y veracidad de las respuestas dadas por los refugiados entrevistados influye de manera significativa en la aceptación de su caso y podría afectar su estatus legal en Estados Unidos en un futuro si se detecta alguna falsedad en el testimonio (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2014).

Cuando se procesa un caso de reasentamiento en los Estados Unidos compuesto por una familia, todos los miembros adultos son entrevistados por estas misiones. Sin embargo, para que el caso sea considerado únicamente uno

de los miembros del grupo familiar debe cumplir con los criterios de definición de refugiado, esta persona es conocida como el aplicante principal y puede derivar el estatus de refugiado a su cónyuge e hijos solteros menores de 21 años. Aquellos familiares que quedan fuera de esta condición, tales como hijos mayores de 21 años, hijos casados, sobrinos, entre otros, deben cumplir con la definición de refugiados por sí mismos para poder ser incluidos dentro del programa de reasentamiento en este país (REFUGEE COUNCIL, 2014).

La información adicional recopilada por las misiones de selección permite al país de reasentamiento tomar una decisión final sobre cada caso particular, siendo este el único que tiene la autoridad para aprobar o rechazar un caso (LEORO, 2014). Una vez que la misión de selección haya realizado las entrevistas pertinentes y los diferentes casos hayan sido aprobados o negados, los refugiados en cuestión serán notificados de esta decisión y, en caso de ser aceptados, continuarán con el proceso de reasentamiento (JARA, 2014).

3.3. Estados Unidos: una nueva oportunidad

Estados Unidos ha sido visto a lo largo de la historia como la tierra de las oportunidades; un lugar donde las personas, sin importar cual sea su origen, tendrán la oportunidad de prosperar si sus acciones son realizadas con esfuerzo y basadas en el trabajo duro. En este sentido, y luego de pasar por las experiencias traumáticas ocasionadas por los conflictos internos producidos en su país de origen y por la falta de respuesta a sus necesidades en su primer país de asilo, el reasentamiento en un tercer país como Estados Unidos se presenta como una nueva oportunidad para mejorar la calidad de vida de un refugiado (ROMERO, 2014).

3.3.1. Antes de viajar los refugiados deben prepararse

Uno de los aspectos clave del proceso de reasentamiento de un refugiado es la preparación previa para el viaje, dentro de la cual el acompañamiento y consejería por parte del ACNUR cobra especial importancia. Este proceso de acompañamiento inicia desde el momento en que se establece el primer contacto con el candidato potencial y con su familia, y se centra en manejar de forma

adecuada las expectativas que va formándose el candidato respecto al reasentamiento y al país en el que se efectuará este proceso (ROMERO, 2014).

El personal del ACNUR trabaja conjuntamente con los miembros del gobierno de ambos países y con las ONGs involucradas en el apoyo al refugiado en el proceso de acompañamiento y consejería. Durante este proceso se debe explicar al candidato el estado en el que se encuentra su solicitud y todos los procedimientos que deben llevarse a cabo antes de que el viaje se efectúe en caso de que su aplicación sea aceptada, haciendo énfasis en la gratuidad de los servicios referentes al reasentamiento y en la extensión de tiempo que el proceso podría tomar (UNHCR, 2011).

Una vez el caso de reasentamiento es aceptado por un tercer país, se deben seguir una serie de pasos para asegurar que el viaje y el proceso de reasentamiento del refugiado sea exitoso (JARA, 2014). En términos generales, estos pasos incluyen una orientación cultural previa, chequeos médicos previos, tramitación de visas y permisos de salida y la planificación del transporte (UNHCR, 2011). Sin embargo, cada país tiene también requerimientos específicos previos al viaje del refugiado y debe encargarse de cubrir todos los costos que estos impliquen (UNHCR, 2011).

En el caso de Estados Unidos se realiza, en primer lugar, chequeos médicos que son obligatorios para todos los refugiados. Por lo general, estos chequeos son realizados por médicos contratados por la embajada estadounidense en el Ecuador o por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En caso de que un refugiado que ya ha sido aceptado en el programa de reasentamiento requiera atención médica antes de viajar, el gobierno de los Estados Unidos, por lo general, cubrirá los costos de este proceso (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013) y si el refugiado necesita acompañamiento o tratamiento especial durante el viaje debido a una condición médica, la OIM se encargará de proveerlo (UNHCR, 2011). Luego de ser aceptados en el programa de reasentamiento estadounidense, los refugiados deben también pasar por una serie de verificaciones de seguridad realizados a través de bases de datos federales e internacionales (REFUGEE COUNCIL USA, 2014).

Cuando se trata de los refugiados colombianos que se encuentran en el Ecuador, se observa que la mayoría de países en los que pueden ser reasentados presentan claras diferencias culturales que pueden resultar completamente nuevas para el refugiado a ser reasentado (ROMERO, 2014). Esta falta de conocimiento sobre la nueva cultura puede llevar a que el refugiado se forme expectativas poco realistas sobre el país que lo recibirá y sobre la forma en que su vida se desarrollará en él y podría disminuir la efectividad de su proceso de integración (UNHCR, 2011).

Los *Centros de apoyo de reasentamiento* estadounidenses realizan orientaciones culturales antes de que el refugiado viaje, las cuales pueden durar de 1 a 5 días (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013). Adicionalmente, la OIM cuenta con programas destinados a desarrollar habilidades comunicativas en el idioma del país de reasentamiento, para facilitar la adaptación del refugiado y aumentar su independencia (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, 2014).

Por lo general, un refugiado viaja hacia su locación final en Estados Unidos entre 4 y 6 meses luego de haber sido aceptado dentro del programa (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013). Estos refugiados reciben asistencia por parte de la OIM en lo referente al transporte hacia el país de reasentamiento. Esta organización cuenta con beneficios especiales para los boletos de viaje provistos por diferentes aerolíneas, los cuales incluyen concesiones especiales respecto al máximo de equipaje gratis permitido y a los costos de los boletos (UNHCR, 2011). Los refugiados reciben entonces un préstamo para poder realizar este viaje (U.S. CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES, 2014), el cual es libre de interés y debe empezar a ser reembolsado a la OIM por parte del refugiado a partir de que se cumplan 6 meses de su llegada a Estados Unidos y pagado en su totalidad alrededor de 3 años después (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013).

3.3.2. Iniciativas especiales de integración local: el apoyo que reciben los refugiados desde su llegada a Estados Unidos

Llegar a un país completamente nuevo puede convertirse en una experiencia estresante para un refugiado a pesar de haber recibido una

orientación cultural antes de realizar su viaje (LEORO, 2014), debido a los cambios significantes que implica la vida en un nuevo país. Por esta razón, una vez que un refugiado llega a su comunidad de acogida en Estados Unidos recibe varios tipos de asistencia que tienen por objetivo facilitar la adaptación a su nueva forma de vida (JARA, 2014).

Cada refugiado que ha sido aceptado para participar en el programa de reasentamiento en Estados Unidos cuenta con el auspicio de una agencia de reasentamiento miembro del *Programa de Recepción y Ubicación*, entre las cuales se encuentran la Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados HIAS, World Relief, el U.S. Committee for Refugees and Immigrants, el International Rescue Committee, entre otras. Estas agencias tienen la responsabilidad de poner en contacto a los refugiados con una de sus oficinas afiliadas y de proveerles servicios básicos iniciales, tales como hospedaje, comida, ropa, atención médica y búsqueda de empleo (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2011).

En primer lugar, cuando un refugiado llega a Estados Unidos, es recibido en el aeropuerto de entrada por un representante de una de estas organizaciones, por un miembro de su familia o un amigo y llevado a su nueva vivienda (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2014). El Departamento de Estado establece guías para que las agencias de reasentamiento se aseguren de que los refugiados tengan acceso a una vivienda digna que cuente con los servicios básicos sanitarios y que garantice la seguridad de los mismos (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013), incluyendo mobiliario básico, ropa apropiada para el clima del lugar y comida propia de la región de origen del refugiado (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2014). Adicionalmente, luego de su llegada, los refugiados reciben chequeos y asistencia médica para garantizar que se encuentren en buenas condiciones de salud y reciben apoyo para aplicar dentro de los programas de seguros médicos *Medicaid* y *Refugee Medical Assistance* (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013).

Por otro lado, la educación juega un papel fundamental en la integración de un refugiado en su nuevo país, por lo cual los refugiados cuyas edades están

comprendidas entre los 5 y 18 años tienen derecho a la educación gratuita en las instituciones públicas estadounidenses y tienen la misma posibilidad de acceso a universidades que los ciudadanos y los residentes permanentes de este país (REFUGEE COUNCIL USA, 2014). Los participantes del programa reciben también clases del idioma inglés para facilitar su integración local y apoyo para ser incluidos en programas de educación vocacional (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013).

Si bien el programa de reasentamiento en este país brinda asistencia económica a los refugiados, ésta solo tiene una duración de 3 meses, convirtiendo a Estados Unidos en uno de los países con menor duración de la asistencia humanitaria frente a los países nórdicos donde ésta puede superar los 2 años (LEORO, 2014). Esta situación encuentra su justificación en el énfasis que el gobierno de este país pone en la autosuficiencia económica de los refugiados basada en la obtención de un empleo que acelere su integración en la sociedad estadounidense (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2011).

En este sentido, las agencias de reasentamiento asisten a los refugiados en la búsqueda de un empleo, que puede ser ejercido gracias al documento de autorización de trabajo otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional al momento de llegada del refugiado, quien tiene el derecho a no ser discriminado en su lugar de trabajo (REFUGEE COUNCIL USA, 2014). Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el trabajo en el que el refugiado será ubicado no necesariamente corresponderá a las actividades laborales que el mismo realizaba en su país de origen o en el primer país de asilo (THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2013). Además, si bien los refugiados tienen varias opciones de empleo, no pueden trabajar para el Gobierno Federal (excepto en el caso de la milicia) hasta que se hayan convertido en ciudadanos estadounidenses (REFUGEE COUNCIL USA, 2014).

Sin embargo, los refugiados también tienen la opción de establecer sus propios negocios en caso de no querer o no poder acceder a un empleo en relación de dependencia (JARA, 2014). Existe un programa de desarrollo de microempresas para los refugiados reasentados que incluye asistencia técnica y un entrenamiento de corta duración para la creación de un pequeño negocio y el

otorgamiento de microcréditos que pueden alcanzar hasta los \$15.000 dólares americanos. Los emprendimientos creados dentro de este programa tienen un nivel de éxito del 80% y la tasa de devolución de los microcréditos alcanza el 98%, demostrando la efectividad del programa (OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT, 2014).

Finalmente, para que la integración local de un refugiado reasentado se consolide de manera efectiva, su estatus migratorio debe garantizar dicha integración. En este sentido, luego de un año de permanencia en los Estados Unidos, los refugiados pueden reajustar su estatus a aquel de residentes permanentes –con la obtención de una *green card* – (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2014) y, luego de haber permanecido en el país por 5 años, pueden solicitar su naturalización como ciudadanos estadounidenses (REFUGEE COUNCIL USA, 2014).

3.3.3. El éxito del programa de reasentamiento en Estados Unidos: cifras reveladoras.

La política estadounidense ampliamente receptiva en materia de asistencia humanitaria a los refugiados alrededor del mundo (OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT, 2014) ha llevado a este país a convertirse en el líder indiscutible en términos de reasentamiento de esta población vulnerable (ACNUR, 2010). En la siguiente tabla se observa la cantidad de refugiados reasentados en los principales terceros países entre los años 2008 y 2010, evidenciándose el liderazgo de Estados Unidos en la materia:

TABLA 2
LLEGADAS DE REFUGIADOS REASENTADOS

País / Año	2010	2009	2008
Alemania	469	2069	
Argentina	22	30	42
Australia	8.516	11.080	11.006
Brasil	21	33	19
Canadá	12.098	12.457	10.804
Dinamarca	495	433	552
Finlandia	541	724	749
Francia	407	-	37
Irlanda	20	192	101

Países Bajos	431	369	693
Noruega	1.097	1.391	741
Nueva Zelanda	631	727	741
Suecia	1.786	1.936	2.209
Reino Unido	715	955	722
Estados Unidos	71.362	79.937	60.192

Fuente: Anuarios estadísticos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Elaborado por: Adriana Monar Salazar

Por esta razón y dependiendo del perfil de cada refugiado y de sus necesidades de reasentamiento, Estados Unidos constituye una buena opción al momento de considerar el reasentamiento de un refugiado colombiano (JARA, 2014). Es por esto que alrededor del 13% de los casos de reasentamiento han sido enviados a este país para su consideración dentro del programa (LEORO, 2014). A continuación se presentan datos sobre la presentación de casos de reasentamiento a este país por parte del ACNUR:

TABLA 3
CASOS PRESENTADOS POR ACNUR ECUADOR PARA SU REASENTAMIENTO EN ESTADOS UNIDOS

Casos / Años	Entre 2005 y 2010	Personas años / Años	Entre 2005 y 2010
Número de casos presentados a Estados Unidos	148	Número de personas recomendadas a Estados Unidos	478
Total de casos presentados	1136	Total de personas recomendadas	3942

Fuente: Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ecuador
Elaborado por: Adriana Monar Salazar

Sin embargo, a pesar de ser el país más representativo en este sentido a nivel global, los refugiados colombianos y latinoamericanos en general no son tomados en cuenta de forma considerable dentro del programa de Estados Unidos, alcanzando un promedio de aproximadamente 4.800 plazas de reasentamiento para la región de Latinoamérica y el Caribe frente a un promedio total de aproximadamente 75.000 plazas asignadas cada año (Ver tabla 1). Esta realidad se evidencia en la siguiente tabla:

TABLA 4
REFUGIADOS ACEPTADOS Y REFUGIADOS QUE LLEGARON A ESTADOS
UNIDOS EN PROGRAMAS DE REASENTAMIENTO

País de origen / Año	2010	2009	2008	2007	2006	2005	TOTAL 2005-2010
Colombianos aceptados	123	54	93	53	113	318	754
Total aceptados	73.311	74.654	60.193	48.281	41.053	53.738	351.230

Fuente: Estadísticas de llegada de refugiados de la Oficina de Reasentamiento de Estados Unidos
 Elaborado por: Adriana Monar Salazar

Cabe notar que del total de refugiados colombianos que son reasentados en los Estados Unidos, no todos los casos provienen del Ecuador (JARA, 2014). En la tabla 4 se observa que entre los años 2005 y 2010, un total de 754 refugiados colombianos fueron reasentados en Estados Unidos, sin embargo, de esta cifra, 196 personas (divididas en 74 casos) fueron reasentadas desde el Ecuador (LEORO, 2014). En promedio, del total de casos de refugiados colombianos en general que son presentados para su reasentamiento en los Estados Unidos, alrededor de un 40% al 50% son aceptados para su reasentamiento (LEORO, 2014) y de los casos específicos de la ciudad de Quito, la tasa se encuentra entre el 60% y 70% (JARA, 2014).

Es importante también analizar varios indicadores sobre la vida de los refugiados que viven en los Estados Unidos. A continuación se presentarán tasas de desempleo e indicadores sobre acceso a atención médica, vivienda, educación y salud de los refugiados que habitan en este país. A pesar de que las cifras no muestran específicamente los casos de refugiados colombianos puesto que los datos encontrados han sido clasificados únicamente en regiones generales, proporcionan un mayor entendimiento sobre la situación de los mismos en el país norteamericano:

TABLA 5
INDICADORES DE LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN ESTADOS
UNIDOS 2005 – 2010

Indicador / Región de origen	Refugiados provenientes de Latinoamérica y el Caribe	Total Refugiados
Promedio de tasa de desempleo	9,83%	15,13%

Promedio refugiados que no hablan inglés al ingresar a Estados Unidos	70,53%	55,08%
Promedio de refugiados que cursan estudios secundarios	4,68%	12,80%
Promedio de refugiados que cursan estudios de profesionalización	0,62%	0,27%
Promedio de refugiados que reciben asistencia en servicios de salud	25,18%	45,48%
Promedio de refugiados que reciben asistencia en servicios de vivienda	11,58%	20,82%
Promedio de refugiados que reciben asistencia en alimentación (food stamps)	40,02%	56,68%

Fuente: Reportes al Congreso de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos (2005-2010)
Elaborado por: Adriana Monar Salazar

En términos de acceso al trabajo, se observa que la tasa de desempleo de los refugiados latinoamericanos es inferior a la tasa general de refugiados. Entre las principales razones para que un refugiado no se encuentre trabajando se encuentran las insuficientes habilidades para hablar inglés y el encontrarse estudiando (OFFICE FOR REFUGEE RESETTLEMENT, 2010). En este sentido, se observa que el promedio de refugiados latinoamericanos y del Caribe que no hablan inglés frente al total de refugiados es mayor, mientras que en términos de educación se observa una distinción: el porcentaje de refugiados latinoamericanos y del Caribe que cursan estudios secundarios en Estados Unidos es mayor que el promedio general, mientras que en términos de estudios de profesionalización sucede lo contrario. Por último, el porcentaje de aquellos refugiados latinoamericanos y del Caribe que reciben asistencia en salud, vivienda y alimentación es igualmente inferior que el promedio de refugiados en general.

Por otro lado, para determinar el éxito del programa debemos considerar el porcentaje de personas que han abandonado el programa de reasentamiento una vez que han llegado al tercer país. A diferencia de varios refugiados que han sido reasentados en países como Brasil y Argentina, aquellos refugiados colombianos que han sido establecidos en programas de reasentamiento en Estados Unidos no han retornado a su país de origen ni al Ecuador, su primer país de asilo, lo que demuestra que el programa en el país norteamericano tiene un mayor nivel de aceptación (LEORO, 2014).

El reasentamiento es una idea concebida dentro de las tres soluciones duraderas propuestas por el ACNUR y se presenta como una opción factible para

los refugiados colombianos que habitan en la ciudad de Quito cuyos problemas de integración local, causados por la baja capacidad de protección del Estado Ecuatoriano, no han podido ser resueltos; a más de constituir una clara manifestación de los principios de solidaridad internacional, la cual aligera la carga de nuestro país en materia de refugio. En el caso específico de este estudio se observa que, si bien el número de refugiados colombianos que pueden ser parte del programa de reasentamiento en Estados Unidos es bastante reducido –debido al establecimiento de cuotas de admisión, a los exigentes criterios de participación del programa, al bajo nivel de interés que tiene este país en la región latinoamericana en lo que se refiere al refugio y a las limitaciones de las instituciones ecuatorianas –, el mismo presenta un éxito parcial en la mejora de las condiciones de vida de esta población, gracias a la preparación previa que reciben los refugiados y a la infraestructura desarrollada en este tercer país.

VI. ANÁLISIS

A partir de la información presentada, se puede efectuar un análisis de las condiciones de vida de los refugiados colombianos que habitan en la ciudad de Quito –generadas tanto por los mismos refugiados como por la sociedad Quiteña, el gobierno ecuatoriano y los diferentes organismos de ayuda a esta población–, las repercusiones de las mismas sobre su elegibilidad para ser reasentados en Estados Unidos y la efectividad de los programas de reasentamiento en términos de integración de esta población vulnerable.

El presente estudio inicia centrándose en las condiciones de vida de la población refugiada colombiana en la capital ecuatoriana, medidas en términos de acceso a recursos y servicios básicos, empleo y al grado de discriminación del que son víctimas. Un refugiado sale de su país de origen y busca la protección de otro debido al hostigamiento que sufre en el primero y al deterioro que su calidad de vida ha sufrido debido a esta persecución. La expectativa de un refugiado colombiano al llegar al Ecuador es mejorar sus condiciones de vida, para lo cual, gran parte de esta población decide establecerse en la ciudad de Quito, debido a su mayor desarrollo económico. Desde el punto de vista del enfoque de capacidades básicas de Amartya Sen, el solo hecho de distanciarse de un conflicto armado que no les permitía desarrollar sus vidas y sus capacidades de una forma normal y establecerse en una ciudad que les garantiza, en teoría, el acceso a derechos básicos, aumentaría las capacidades de desarrollo de los refugiados colombianos y sus libertades, mejorando en consecuencia sus condiciones de vida.

Sin embargo, a pesar de que la capital ecuatoriana tiene una de las economías más sólidas a nivel nacional, el desarrollo de estas capacidades y libertades no siempre se cumple en el caso de los refugiados colombianos. En primer lugar, se tomó en cuenta al factor económico y al acceso a un empleo con una remuneración adecuada que constituya para el refugiado la base del desarrollo del resto de sus capacidades; acceso que no siempre es una realidad para esta población puesto que la mayor parte de refugiados colombianos trabaja en el sector informal o en condiciones precarias dentro del sector laboral formal, en el caso de tener la posibilidad de acceder a un trabajo.

Las condiciones económicas de esta población vulnerable generadas por la precariedad laboral en la que se desarrolla, han llevado a que el resto de aspectos y capacidades de su vida se vean también deteriorados. La falta de recursos económicos provoca que los refugiados colombianos no tengan acceso a una alimentación adecuada, a servicios de salud apropiados, a una vivienda segura en todos los aspectos ni a una educación de calidad que les permita desarrollar todo su potencial e integrarse de manera efectiva a la sociedad de acogida.

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la teoría de Sen propone que el análisis de la calidad de vida de una persona no debe centrarse únicamente en el factor económico sino en el desarrollo de las libertades integrales de un individuo. En este sentido, se observa que los refugiados colombianos de la ciudad de Quito no pueden ejercer plenamente sus libertades. Al analizar esta afirmación desde el punto de vista del empleo, se observa que esta población no es víctima únicamente de las restricciones económicas impuestas por un salario bajo sino también de la preocupación y de la depresión que genera el no contar con un sustento estable y significativo para su familia.

Por otro lado, las capacidades de estos individuos se ven limitadas por el hecho de tener que elegir cualquier empleo disponible para poder cubrir sus necesidades, lo cual los lleva en muchos casos a verse obligados a ejercer actividades que no van de acuerdo con los estudios que estas personas han realizado ni con la profesión que tenían en su país de origen, en condiciones que, en ocasiones, atentan incluso contra de la dignidad del ser humano; situaciones que denotan una carencia de sus libertades, generando frustración en esta población, a más de limitar en gran medida la utilización de sus capacidades preexistentes y constituir un obstáculo más para la generación de nuevas capacidades.

Ahora bien, si se analiza esta afirmación desde el punto de vista del acceso a alimentación y salud se constata que estos dos factores constituyen también libertades en sí y además, la base del desarrollo de sus capacidades. Una persona con una alimentación adecuada y una buena salud se desempeña de mejor forma en todos los aspectos de su vida. Por otro lado, la educación

también constituye un factor importante en el desarrollo de los refugiados y en su integración local puesto que, no solo les permite acceder en un futuro a un mejor empleo sino que aumenta el nivel de satisfacción personal del individuo y le permite el desarrollo de nuevas capacidades y libertades. Sin embargo, todas estas fuentes de desarrollo y generación de oportunidades distan mucho de ser una realidad para la totalidad de refugiados en la ciudad de Quito.

Por último, se evidencia que la percepción y el trato otorgado por los ecuatorianos que viven en la ciudad de Quito hacia la población refugiada influyen también en su desarrollo y libertad. Lamentablemente, la población quiteña comparte la percepción estereotipada de que los colombianos son delincuentes, debido a su falta de conocimiento de lo que es un refugiado y de las razones que llevaron a estos individuos a establecerse en nuestro país. Esta discriminación de la que son víctimas los refugiados colombianos –agravada por la parcialización de los medios de comunicación locales y nacionales –ha generado que su proceso de adaptación en Quito sea aún más difícil puesto que, al ser vistos como una amenaza, su posibilidad de acceso a un trabajo, vivienda y demás recursos básicos para su desarrollo se ve disminuida y su posibilidad de ejercer sus libertades y generar capacidades se ve limitada enormemente.

En este sentido, se puede observar que, si bien las condiciones de vida de los refugiados colombianos han mejorado relativamente en ciertos aspectos al establecerse en la ciudad de Quito –tomando en cuenta que han dejado de ser víctimas de la persecución y la violencia, lo cual les permite desarrollarse en un ambiente más adecuado y pacífico – existen otras áreas en las que sus condiciones han empeorado, especialmente en aquellos aspectos relacionados con el factor económico y cultural.

El presente estudio aborda también las acciones llevadas a cabo por el Estado Ecuatoriano y el ACNUR –al igual que sus limitaciones –para facilitar la integración de los refugiados colombianos en la ciudad de Quito. Para que un refugiado pueda acogerse a la protección de estos organismos debe, en primer lugar, ser reconocido como tal, ya sea bajo la definición de la Convención de Ginebra o la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. La adopción de la Convención de Ginebra constituyó un avance significativo en

materia de protección a los refugiados alrededor del mundo al tratar sobre los diferentes tipos de persecución de los que una persona debe ser objeto para ser considerada como refugiada.

Construida sobre la idea de la defensa de los derechos humanos de una persona, esta Convención se ajusta bastante bien al enfoque de las capacidades básicas de Amartya Sen. Un individuo que es perseguido debido al hecho de pertenecer a una raza –o a una nacionalidad o grupo social o político –diferente a la de la mayoría local, manifestada dicha diferencia en su color de piel o en cualquier característica física o cultural percibida, no tiene acceso a las mismas capacidades y libertades que una persona local con una condición racial, de nacionalidad o de pertenencia a un grupo considerada como normal. Los prejuicios y acciones negativas que acompañan a la discriminación –al igual que las condiciones inherentes de pertenecer a una raza, nacionalidad o grupo diferente, tales como la falta de conocimiento de las costumbres de la mayoría local –, limitan en gran medida no solo el acceso al trabajo y a la vida económica de un individuo dentro de una comunidad, sino también a su integración y participación activa dentro de los espacios públicos y privados de una sociedad, los cuales constituyen también, una parte importante de su desarrollo como seres humanos completos y del ejercicio de sus funcionamientos, desde el punto de vista del enfoque de las capacidades básicas.

El ser perseguido por tener una religión diferente es también un limitante para las ideas promovidas por Amartya Sen. Una persona que debe esconder sus rituales y prácticas religiosas –o la falta de las mismas –por miedo a ser perseguido o atacado, se encuentra en una situación extrema de vulnerabilidad que no solo restringe sus posibilidades de expresar abiertamente sus creencias y valores y llevar su vida de acuerdo a éstos, sino que también lo coloca en condiciones de miedo y preocupación que no le permitirán el desarrollo de sus capacidades no solo en el ámbito espiritual, sino en todos los aspectos de su vida y de la de su familia.

Finalmente, la persecución basada en el género de una persona –que se observa principalmente en el caso de las mujeres – se ha convertido en un grave limitante de las capacidades y libertades de aquellas personas que pertenecen a

este grupo determinado. A lo largo de la historia se ha observado que las mujeres han sido víctimas de discriminación y persecución debido a su género, situación que se ha visto reflejada en un menor acceso al mercado laboral y en condiciones de desventaja frente a aquellas de los hombres en términos de remuneración y posibilidades de desarrollo profesional; situación que se observa en todas las esferas sociales y no únicamente en el caso de poblaciones vulnerables como aquellas de los refugiados. Por otro lado, el no poder vestirse o comportarse en público de una manera determinada por temor a ser perseguidas, también ha constituido una gran limitación para el desarrollo de las mujeres.

Por otro lado, la definición ampliada contemplada en la Declaración de Cartagena de 1984 constituyó un nuevo avance en materia de refugio, que amplió la posibilidad de que un refugiado pueda ejercer sus funcionamientos, capacidades y libertades, puesto que extendió el radio de protección a aquellas personas que hayan huido de su país debido a que su vida, su seguridad o su libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, situaciones que no fueron consideradas a profundidad por la Convención de Ginebra.

El Estado ecuatoriano, al ser parte de estos dos instrumentos, está obligado a trabajar por el bienestar de los refugiados que ingresan al país o, dicho de otro modo y analizado desde el punto de vista del enfoque de capacidades de Sen, está obligado a facilitar a esta población vulnerable la obtención de capacidades y el ejercicio de sus funcionamientos. Para lograrlo, en primer lugar, el Estado debe reconocer a un individuo como refugiado luego de pasar por un proceso establecido. Este primer paso sienta las bases para el desarrollo de libertades y capacidades de un individuo puesto que lo coloca bajo la protección formal y legal de un Estado y lo acerca, en teoría, a un ejercicio efectivo de sus derechos.

Sin embargo, cabe tomar en cuenta que en el proceso de reconocimiento del estatus de refugiado de una persona en el Ecuador, existen varias dificultades y limitantes de capacidades. Las limitaciones en la infraestructura del Estado en

términos de procesamiento de las solicitudes generan que no todas aquellas personas que se ajustan a la definición de refugiados puedan acceder al reconocimiento de su estatus. Por otro lado, no todos los solicitantes logran ser reconocidos como refugiados y, cuando sus solicitudes no son aprobadas, deben legalmente regresar a su país de origen, ya que de lo contrario, se encontrarían en una situación de vulnerabilidad que reduce, aún más, sus capacidades para alcanzar el desarrollo. Sin embargo, aquellos refugiados que no son reconocidos, suelen optar por quedarse en territorio Ecuatoriano debido a su temor de ser perseguidos.

Ahora bien, otro de los avances en materia de reconocimiento de refugiados, que van de acuerdo con el enfoque de capacidades de Sen, fue la creación del Programa de Registro Ampliado, puesto que ofreció el reconocimiento de derechos a aquellas personas que no lo tenían en un principio. Al observar que los refugiados colombianos, especialmente aquellos localizados en lugares que debido a sus condiciones geográficas son de difícil acceso, no tenían mayor conocimiento sobre los procesos de reconocimiento, se desarrolló este programa con el objetivo de dar protección a las personas *invisibles*. Si bien este programa cubrió las necesidades de grupos poblacionales que de lo contrario hubieran continuado en la invisibilidad y aumentó, en cierta medida, sus posibilidades de acceso al desarrollo de capacidades y libertades, las limitaciones de su aplicación implicaron un agravamiento en la situación del refugio en Quito, puesto que muchos refugiados, especialmente aquellos provenientes de Esmeraldas, al ver la falta de efectividad de este programa, decidieron trasladarse hacia la capital.

Pero más allá del mero reconocimiento de un individuo como refugiado, el Estado Ecuatoriano se encuentra en la obligación constitucional de garantizarle el acceso a derechos y desarrollo de capacidades y libertades. En este sentido, el Estado debe asegurarse de que los refugiados colombianos en territorio ecuatoriano no sean víctimas de discriminación y tengan acceso al trabajo, a la salud, a una alimentación adecuada y sobre todo a una educación adecuada. Todos estos derechos constituyen, una vez más, la base para que estos individuos puedan tener un correcto ejercicio de sus funcionamientos y capacidades.

Lamentablemente, las realidades y posibilidades del Estado Ecuatoriano han generado que esta protección de derechos no sea completamente efectiva debido a sus limitaciones económicas y de infraestructura, aún cuando debe reconocerse que se destinan grandes cantidades de recursos a la causa de los refugiados colombianos. En este punto se debe tomar en cuenta que, de acuerdo con Amartya Sen, no solo se debe tener acceso teórico a todos estos derechos, sino que los mismos deben ser ejercidos en la práctica de una manera efectiva.

Ahora bien, las acciones del ACNUR y de sus socios han venido a aligerar en cierta medida la carga que tiene el Estado Ecuatoriano en términos de protección a los refugiados –aunque también han generado una cierta dependencia por parte del Estado hacia este organismo, la cual ha sido ampliamente cuestionada –. Este organismo internacional se encarga de cubrir las necesidades elementales de esta población vulnerable al llegar al Ecuador, proveyéndoles con alimentación y ayuda básica al ingresar a nuestro país. Luego de ello, y gracias a la ayuda de sus fundaciones socias, contribuye con esta población en la búsqueda de vivienda, empleo y acceso a una educación, que les permita adaptarse de una mejor manera a sus nuevas condiciones de vida y aplicar y ejercer sus capacidades y funcionamientos.

En este punto es importante considerar que, según el enfoque de las capacidades, los refugiados colombianos no deben convertirse en meros receptores de las ayudas del Estado, el ACNUR y de sus socios, sino que deben aplicar su capacidad de agencia –punto central de la teoría de Sen –y alcanzar, basados en esta ayuda pero aplicando sus propias competencias y destrezas, aquello que consideran valioso para sus vidas. Es por esto que por ejemplo, en el caso del ACNUR se han desarrollado proyectos que contribuyen al empoderamiento de los refugiados y al desarrollo de su autosuficiencia en todos los sentidos.

Al final de este estudio se trata el tema del reasentamiento como una solución a los problemas de integración de los refugiados colombianos asentados en la ciudad de Quito, el cual constituye una de las tres soluciones duraderas propuestas por el ACNUR para la problemática de los refugiados en su primer país de asilo (a más de la repatriación voluntaria y la integración local). En primer

lugar, se empieza por realizar una definición de la figura del reasentamiento, siendo éste la ubicación de un refugiado en un tercer país que ha accedido a acogerlo con el estatus de residente permanente y a garantizarle el respeto y acceso a derechos básicos y es aplicado cuando el primer país de asilo, en este caso el Ecuador, no puede ofrecer una protección efectiva al individuo.

Esta figura se adapta también a las ideas planteadas por Sen, de facilitar el desarrollo de capacidades y libertades de una persona para que pueda alcanzar un verdadero desarrollo como ser humano integral, pues toma en cuenta varios criterios que limitan los funcionamientos del refugiado en el primer país de origen, tales como la necesidad de protección legal y física, sus condiciones psicológicas luego de haber sido víctimas de violencia o tortura, sus necesidades médicas específicas, su género y nivel de riesgo, sus necesidades de reunificación familiar, la vulnerabilidad en que los coloca su edad y la falta de perspectivas de integración local.

Por otro lado, al ser el reasentamiento una clara expresión de los principios de solidaridad internacional y los mecanismos de responsabilidad compartida mediante la reducción de la carga que representa para un país pequeño y con muchas limitaciones socioeconómicas y de infraestructura la protección de una cantidad desproporcionada de refugiados, se ajusta al enfoque de las capacidades básicas de Sen, ya que no solo mejora el acceso a capacidades, funcionamientos y libertades de los refugiados colombianos que son reasentados, sino que también libera recursos que pueden ser utilizados para el mejoramiento de las condiciones de vida y el empoderamiento real de los mismos ecuatorianos.

En segundo lugar, se describen las políticas de reasentamiento de Estados Unidos, país escogido para este estudio por ser el mayor receptor de refugiados reasentados a nivel mundial. Estas políticas están basadas igualmente en la Convención de 1951 y en su Protocolo de 1967 y contemplan el establecimiento de cuotas de admisión. Al analizar estas cuotas por región, se observa que aquellas asignadas a la región de América Latina y el Caribe han sido históricamente bajas en comparación a la mayoría de las otras regiones, las cuales llegan a alcanzar cuotas incluso seis veces mayores. Esta situación

encuentra su explicación en las necesidades especiales de protección de refugiados en zonas altamente conflictivas como la del Cercano Oriente.

Si bien el establecimiento de cuotas de admisión puede ser visto como una situación de discriminación a los refugiados provenientes de ciertas partes del mundo, se debe recordar que el reasentamiento no constituye en sí mismo un derecho, sino una opción aplicable únicamente a aquellos refugiados que cumplan con ciertas condiciones preestablecidas. Por ejemplo, un refugiado cuya vida o cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados en el país de asilo, puede ver una mejora en sus condiciones de vida y un aumento en el ejercicio de sus capacidades si es reasentado en un lugar que le brinde una mayor protección tanto física como legal. Aquellos refugiados que sobrevivieron a actos de tortura mejorarán también sus capacidades y funcionamientos al ser retirados de un ambiente que puede agravar sus traumas y ser localizados en un lugar que cuente con la infraestructura y la capacidad de brindar atención psicológica y médica adecuada para este tipo de casos; situación que se aplica también a aquellos refugiados con necesidades médicas especiales que el primer país de asilo no puede satisfacer.

Las mujeres y niñas que han sido perseguidas debido a su género también pueden observar una mejora en la aplicación de sus capacidades si son reasentadas en un lugar que garantice que sus derechos serán respetados, al igual que aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por su edad. Lo mismo sucede con las personas que tienen necesidades de reunificación familiar. La familia es la base de una sociedad y constituye una fuente de apoyo de suma importancia en el desarrollo de las capacidades y funcionamientos de una persona.

La idea de la aplicación de estos criterios es ubicar a las personas refugiadas cuyas necesidades de ayuda son más representativas y fomentar el desarrollo de sus capacidades y funcionamientos. Sin embargo, los criterios de exclusión establecidos en los programas de reasentamiento, si no son aplicados cuidadosamente, dejan fuera de las posibilidades de ser reasentados a personas que tienen una necesidad real de ser rescatados. Es adecuado que aquellas personas que han cometido crímenes graves (demostrados) sean excluidas de los

programas de reasentamiento con el fin de proteger a los nacionales de los terceros países y de garantizar que sus capacidades y funcionamientos no se vean afectados. Sin embargo, la aplicación de criterios como la relación con grupos armados, participación en actividades relacionadas con la droga y la prostitución resulta mucho más complicada y cuestionable.

Por ejemplo, existen casos de refugiados que se vieron obligados bajo amenazas a contribuir de manera económica con grupos irregulares colombianos o a participar en el procesamiento o venta de sustancias ilegales o en actividades de prostitución y que, debido a limitaciones propias y del sistema no han podido demostrar que estas actividades fueron llevadas a cabo bajo coerción y han quedado fuera del programa de reasentamiento. No se puede esperar que una persona con un nivel de educación mínimo y con escasos recursos económicos pueda estructurar una defensa adecuada de su caso con el objetivo de demostrar su inocencia frente a estos criterios. Además, las limitaciones estructurales del Gobierno ecuatoriano y del ACNUR no permiten, en varias ocasiones, que el análisis de casos se pueda efectuar con la suficiente profundidad.

Por otro lado, se debe tomar en cuenta que el potencial inicial de integración de un refugiado no debería ser el elemento determinante en el proceso de análisis de casos de reasentamiento puesto que, si bien en un inicio la falta de conocimiento sobre la cultura, funcionamiento e idioma del país de acogida puede ser un limitante para el refugiado, el desarrollo de programas de integración puede contribuir enormemente en su proceso de integración y en el desarrollo de nuevas capacidades y aplicación de nuevos funcionamientos. Sin embargo, los terceros países continúan tomando en cuenta a la capacidad de un refugiado para integrarse a una nueva sociedad como un criterio para ser aceptado dentro de estos programas.

Dentro del tercer capítulo se toma en cuenta también al rol del ACNUR dentro del proceso de reasentamiento. Esta institución actúa en primera instancia como un filtro que permite, en teoría, que únicamente los casos de personas que tienen una necesidad real y verificable de ser reasentados sean analizados por el tercer país. Sin embargo, como se indicaba anteriormente, el ACNUR tiene

también limitaciones estructurales, de personal y presupuesto que no permiten que la identificación de casos potenciales y su procesamiento sea cien por ciento efectivo ni que se lleven a cabo estos procesos de una manera lo suficientemente rápida.

Adicionalmente, el ACNUR sirve como un vínculo entre las misiones de selección y los refugiados a ser entrevistados en los programas de reasentamiento. Por un lado, el rol de las misiones es positivo puesto que al entrevistar directamente a los refugiados tienen la posibilidad de generar una idea más clara de su situación en el Ecuador; sin embargo, las limitaciones en el presupuesto destinado a estas misiones y el tiempo reducido que sea asigna a las entrevistas (debido a la gran cantidad de casos a analizarse), a más de las limitaciones impuestas en la comunicación debido a las diferencias en el idioma y cultura –aún con la ayuda de intérpretes y traductores – restan efectividad en sus procesos.

Estados Unidos es el país más representativo en materia de reasentamiento de refugiados. Si se observa las cifras presentadas se puede concluir que Estados Unidos supera, por mucho, al resto de países de reasentamiento en la aceptación de refugiados. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que los refugiados colombianos –ni latinoamericanos –no constituyen una prioridad en términos de reasentamiento para el gobierno de Estados Unidos: de las 80.000 plazas de reasentamiento asignadas en el año 2010, únicamente 5.500 fueron para los refugiados latinoamericanos y del Caribe (6,875% del total) y de los 351.230 refugiados que llegaron al país norteamericano entre 2005 y 2010, sólo 754 son colombianos (0.21%).

En la parte final de este capítulo se hace referencia a la situación de los refugiados colombianos una vez que son aceptados en el programa de reasentamiento Estadounidense. La preparación de un refugiado comienza mucho antes de que se efectúe el viaje al país de reasentamiento. El ACNUR, junto con el gobierno estadounidense, se encarga de brindar orientación al refugiado con el objetivo de facilitar este proceso de transición y de equiparlo con nuevas capacidades que podrán ser desarrolladas en el nuevo país de acogida. Sin embargo, esta preparación es sumamente limitada, por lo cual, es necesario que

los programas de ayuda, asesoría y seguimiento continúen una vez que el refugiado llega al país norteamericano.

Al llegar a Estados Unidos el refugiado formará parte de varios programas que le ayudarán a desarrollar nuevas capacidades que le permitan integrarse de manera efectiva en la nueva sociedad de acogida. En este sentido, los cursos de inglés para refugiados y programas que los introducen a su nueva cultura y los preparan para conseguir un empleo, constituyen un mecanismo de empoderamiento que incrementa tanto las capacidades como los funcionamientos de los refugiados, aumentando, a la vez, sus posibilidades de alcanzar un nivel de vida al que difícilmente podían aspirar en su país de origen y en el primer país de asilo.

Para determinar si la calidad de vida de los refugiados colombianos ha mejorado desde su reasentamiento se debe observar el nivel de acceso a servicios básicos y empleo de esta población. Es preciso tomar en cuenta que los datos presentados por el Gobierno estadounidense son clasificados por regiones y no muestran datos desagregados específicos de la población colombiana, pero proporcionan una idea general sobre su situación. Entre los datos más representativos se observa que gran parte de los refugiados latinoamericanos recibe asistencia en servicios de salud (25,18%) y asistencia en alimentación (40,02%). Por otro lado, se observa que el acceso a educación es mínimo: 4,68% para la educación secundaria y 0,62% para estudios de profesionalización. A pesar de estas cifras, el programa de reasentamiento en Estados Unidos puede ser considerado como exitoso en materia de integración puesto que no existen casos de refugiados colombianos que hayan regresado al Ecuador o a su país de origen, demostrando que el reasentamiento es una alternativa que proporciona una solución duradera a los problemas de integración de esta población vulnerable en la sociedad quiteña-

Finalmente, si bien la idea en la que se fundamenta el reasentamiento es el hecho de que el vivir en el tercer país aumentaría las capacidades de los refugiados, esto no sucede en todos los casos debido a la posibilidad de discriminación por parte de los pobladores locales o de que factores como el clima o las amplias brechas en materia cultural y conocimiento del idioma terminen por

disminuir las posibilidades de desarrollo de la población refugiada. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que al haber sido receptores de ayuda, tanto por parte del gobierno y fundaciones en el Ecuador, como por parte del gobierno estadounidense y las instituciones benéficas de este país, los refugiados corren el riesgo de haber perdido su capacidad de generar capacidades y funcionamientos por sí mismos, convirtiéndose en meros receptores de ayuda, lo cual, a largo plazo, disminuirá en gran medida sus capacidades de desarrollo.

5. CONCLUSIONES

El estudio de los problemas de integración de los refugiados colombianos en Quito entre los años 2005 y 2010 como un motivo para su reasentamiento en Estados Unidos ha permitido comprobar que las condiciones estructurales de la sociedad quiteña y las limitaciones del gobierno ecuatoriano y del ACNUR Ecuador han ocasionado que los refugiados colombianos tengan dificultades para llevar una vida adecuada en la capital ecuatoriana, lo cual se evidencia en su escaso acceso a servicios básicos y a un empleo adecuado, situación que constituye la base para que ciertos miembros de esta población vulnerable sean considerados para los programas de reasentamiento en el país norteamericano. No obstante, la hipótesis de esta investigación se cumple de manera parcial puesto que se pudo determinar que si bien las condiciones de vida de los refugiados colombianos que habitaban en la ciudad de Quito mejoraron relativamente en términos de acceso a alimentación y servicios de salud al llegar a Estados Unidos y lograron integrarse en esta nueva sociedad, se observó también que continuaron teniendo problemas de acceso en materia de educación y empleo.

A continuación se detallan las conclusiones obtenidas gracias a este estudio:

- Aun cuando la ciudad de Quito se encuentra en mejores condiciones en términos socioeconómicos, los refugiados colombianos que habitan en ella no logran acceder a una alimentación de calidad que les permita un desarrollo adecuado, principalmente debido a su baja capacidad para pagar por comestibles, la cual limita la cantidad y la frecuencia en que esta población puede alimentarse, a pesar de contar con el apoyo de diferentes instituciones de ayuda a los refugiados.
- Los refugiados colombianos de la ciudad de Quito deben también enfrentarse a problemas de salud ocasionados por sus limitaciones en términos de alimentación y por las condiciones insalubres en las que desarrollan sus vidas, los cuales se ven agravados por su baja capacidad de costear atención médica, especialmente cuando se encuentran en

necesidad de atención médica especializada, ya que la atención médica general es provista por los sistemas de salud públicos, los cuales, han demostrado ser positivos y efectivos para esta población, pero los servicios especializados presentan una mayor dificultad de acceso.

- Si bien el acceder a la educación es un derecho para los refugiados colombianos reconocidos en territorio ecuatoriano, este derecho no se aplica en su totalidad puesto que se observa que dentro de esta población vulnerable el 20% de menores en edad de cursar el nivel primario no se encuentran estudiando y, respecto al nivel secundario se observa que la cifra llega al 40%. Esta realidad se debe a la falta de certificados de los estudios realizados en Colombia que impiden la matriculación en los centros educativos quiteños; a la falta de dinero; a la equiparación errada de los estudios realizados en su país de origen; a la baja importancia otorgada por los refugiados a la educación y a la discriminación por parte de la sociedad quiteña.
- En términos generales, las viviendas de los refugiados colombianos en Quito no brindan las condiciones adecuadas para una vida digna puesto que, en muchos casos, no cuentan con servicios básicos de agua potable y electricidad, enseres y muebles adecuados, sistemas de aislamiento apropiados. Adicionalmente, las condiciones de hacinamiento también afectan a la calidad de las viviendas de esta población.
- Si bien el estado Ecuatoriano garantiza el acceso al empleo para los refugiados reconocidos, gran parte de esta población trabaja dentro del sector informal en la venta de discos compactos, ropa, caramelos y alimentos; o se encuentra en el sector formal pero es víctima de la falta de estabilidad laboral, de la ausencia de un contrato formal, de la falta de pago y del maltrato por parte de los empleadores en algunos casos.
- La capacidad de adaptación laboral de los refugiados colombianos en Quito les ha permitido ser percibidos como buenos trabajadores, lo cual, sumado a los salarios inferiores que estos individuos demandan y a la posibilidad de evadir el pago del seguro social, ha hecho que varios

empleadores ecuatorianos opten por contratar a los refugiados por encima de los mismos trabajadores ecuatorianos, situación que a su vez ha generado que éstos sean percibidos como actores limitantes del acceso al trabajo para nuestros connacionales.

- La falta de conocimiento de la sociedad quiteña respecto a la figura del refugio y a las condiciones de vida de los refugiados tanto en su país de origen como en la capital ecuatoriana ha generado que los miembros de esta población vulnerable sean víctimas de la discriminación tanto en los espacios públicos como privados a la hora de acceder a la educación, a la vivienda, a la salud y al empleo; limitando de esta forma su capacidad de integración socioeconómica en la ciudad.
- Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la integración local de esta población puesto que pueden profundizar la discriminación de la que es objeto o sensibilizar a la ciudadanía ecuatoriana sobre la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador y facilitar su integración en nuestra sociedad.
- La discriminación de un individuo en su país de origen (o incluso en los países de asilo) basada en su condición racial, su nacionalidad, religión, género y/o en su pertenencia a un grupo social determinado, deterioran enormemente sus condiciones de vida, obligándolos en ciertos casos a dejar su lugar habitual de residencia en busca de protección a nivel internacional.
- Tanto la Convención de Ginebra (y su Protocolo) como la Declaración de Cartagena de 1984 constituyeron un gran avance en materia de reconocimiento de la figura del refugio ya que no solo establecieron los parámetros para considerar a una persona como refugiada, sino que también sentaron los lineamientos básicos de protección y defensa a los que estos individuos deben tener acceso.
- A pesar de la pertenencia del Ecuador a ambos instrumentos internacionales, sus limitaciones económicas y de infraestructura provocan

que los refugiados colombianos no puedan obtener una protección efectiva en nuestro país, a pesar del desarrollo de programas y proyectos tales como el Registro Ampliado. Estos problemas se evidencian desde el momento de solicitar el reconocimiento como refugiados hasta en los procesos de ejercicio de derechos tales como el acceso a salud, educación, entre otros.

- El ACNUR y sus fundaciones socias contribuyen también con la causa de los refugiados colombianos en el Ecuador y en su capital; sin embargo, tanto sus limitaciones internas, como aquellas generadas por las condiciones específicas de nuestro país –al igual que la dependencia que se ha generado por parte del Estado Ecuatoriano –, hacen que la protección y ayuda que estos organismos pueden brindar a los refugiados en el Ecuador no sea 100% efectiva.
- El número de países que participan como receptores dentro de los programas de reasentamiento de refugiados es sumamente reducido, al igual que las cuotas de aceptación de refugiados que han sido impuestas por los gobiernos de estos países, situación que ha generado que el reasentamiento no sea una opción viable para la mayoría de los refugiados, observándose un espectro de aplicación bastante reducido, el cual alcanza el 1% del total de refugiados de interés del ACNUR a nivel mundial.
- Las limitaciones económicas y de infraestructura del gobierno ecuatoriano en materia de protección a los refugiados colombianos que habitan en la ciudad de Quito ha provocado que se deba aplicar nuevos programas que solucionen los problemas de integración de esta población vulnerable en la sociedad local, tales como la repatriación voluntaria y el reasentamiento en un tercer país, en el caso específico de este estudio, el reasentamiento en Estados Unidos.
- El reasentamiento de refugiados es una de las manifestaciones de los principios de solidaridad internacional y de los mecanismos de responsabilidad compartida que ha permitido una reducción en el impacto

y la carga que representa la presencia de refugiados colombianos en la ciudad de Quito para el gobierno ecuatoriano y las instituciones locales de ayuda a pesar de su limitado espectro de aplicación en el país.

- Estados Unidos es el país más representativo en reasentamiento de refugiados, cubriendo más del 50% de refugiados reasentados a nivel mundial, debido a su política de protección a personas de interés en materia humanitaria dentro de su territorio. Sin embargo, su nivel de aceptación de refugiados a ser reasentados es bastante limitado debido al establecimiento de cuotas anuales que dejan fuera a refugiados que inicialmente podrían ser considerados dentro de estos programas.
- Las limitaciones del ACNUR, de sus socios locales en el Ecuador y de las misiones de selección de reasentamiento también han generado que no todos los refugiados colombianos de la ciudad de Quito que se encuentran en necesidad de ser reasentados puedan ser incluidos efectivamente dentro de los programas de reasentamiento estadounidenses.
- Si bien existen refugiados colombianos que han sido reasentados en Estados Unidos, Colombia y Latinoamérica en general, no constituye una región de interés en materia de refugio para este país. Se observa que de las plazas totales de reasentamiento asignadas a nivel mundial, aquellas destinadas para la región latinoamericana ascienden únicamente al 6,9% del total, dándose mayor prioridad a los refugiados del Cercano Oriente y Sur de Asia (47,5%), Asia Oriental (22,5%) y África (19,4%).
- A pesar de ser el país más representativo en materia de reasentamiento de refugiados, Estados Unidos es uno de los países con criterios de selección más exigentes. A más de tener que ajustarse a la definición de refugiado y de cumplir con al menos uno de los criterios de reasentamiento (tales como la necesidad de protección física o legal, las necesidades médicas especiales y la falta de una perspectiva de integración local, entre otros), los refugiados deben demostrar que no han cometido ningún tipo de violaciones graves a la ley ni haber participado en actividades relacionadas con el tráfico de sustancias ilegales y la prostitución –una realidad que

deja fuera de este programa a muchos refugiados colombianos que han sido obligados a involucrarse en estas actividades.

- La preparación previa al viaje de reasentamiento de un refugiado colombiano, al igual que el apoyo y seguimiento del ACNUR y los programas e iniciativas locales del gobierno y las instituciones de apoyo estadounidenses para su adaptación e integración en la nueva sociedad de acogida, hacen que el proceso de reasentamiento de un refugiado sea más fácil y efectivo.
- A pesar de que existen limitaciones en el programa de reasentamiento en el país norteamericano, tanto en términos de acceso a educación como en la consecución de un empleo, se puede comprobar el éxito relativo de este programa en la mejora de las condiciones de vida de los refugiados colombianos que habitaban previamente en la ciudad de Quito basándose en el acceso a salud, vivienda y alimentación, y en la disposición de los refugiados para continuar viviendo en este país.

6. RECOMENDACIONES

A continuación se detallan las recomendaciones de esta disertación:

- La falta de documentos que legalicen la situación migratoria de los refugiados constituye un grave impedimento en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Por esta razón, es necesario que el gobierno ecuatoriano continúe con los programas de legalización de refugiados colombianos y de emisión de documentos que les permitan integrarse de una manera más adecuada a sus comunidades de acogida, no solo mediante la exigencia del cumplimiento de sus derechos, sino también mediante la observancia de sus obligaciones como nuevos miembros de la sociedad ecuatoriana
- El gobierno ecuatoriano, valiéndose de la cooperación internacional, debe generar programas que permitan a los refugiados colombianos tener un empleo –con todos los beneficios sociales –que los convierta en miembros autosuficientes de la sociedad quiteña, capaces de costear por sí mismos una alimentación adecuada, acceso a servicios básicos, vivienda, educación, atención sanitaria adecuada, con el objetivo de disminuir su dependencia de ayudas tanto del gobierno como de los socios estratégicos del ACNUR.
- El gobierno ecuatoriano debe realizar programas que garanticen el acceso de los refugiados a los servicios de educación pública para evitar que problemas como la discriminación, la falta de recursos económicos, la falta de certificados de estudios realizados en su país de origen y la poca importancia que la población refugiada da a la educación provoquen que los menores de edad queden fuera del sistema educativo.
- Tanto el gobierno ecuatoriano, como las demás instituciones encargadas de velar por el bienestar de los refugiados deberían desarrollar campañas informativas con el objetivo de dar a conocer a los refugiados y solicitantes de refugio que habitan en el país sobre la legislación ecuatoriana en materia de refugio, los procesos de reconocimiento de su estatus

migratorio, sus derechos y obligaciones en el Ecuador y las organizaciones de apoyo.

- Es prioritario potenciar la coordinación de las acciones de las diferentes instituciones del Estado en materia de refugio, haciendo énfasis en la planificación entre los diferentes ministerios y secretarías nacionales para evitar la repetición de proyectos aislados que reducen la efectividad de las acciones estatales, duplican funciones y desperdician valiosos recursos del Estado que podrían ser destinados al fortalecimiento de otros proyectos en materia de refugio y apoyo a refugiados.
- Es necesario que las instituciones involucradas en la protección de los refugiados desarrollen, junto con los medios de comunicación locales, programas de concientización de la población ecuatoriana sobre la figura del refugio y a las condiciones de vida de los refugiados en el Ecuador, con el objetivo de sensibilizar a los ecuatorianos sobre su situación y disminuir la discriminación de la que esta población vulnerable es objeto, facilitando así su integración local.
- El Estado ecuatoriano no cuenta con un plan de contingencia en caso de que el conflicto interno colombiano se agudizara y el flujo de refugiados colombianos que se desplazan hacia el Ecuador aumentase. En este sentido, es necesario que se desarrollen estrategias tanto a corto como a largo plazo que contribuyan a prevenir un agravamiento de la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador y que permitan responder de manera efectiva a un posible aumento en los flujos de entrada de esta población en el territorio ecuatoriano.
- Es preciso desarrollar acciones y políticas binacionales que incluyan tanto al Estado ecuatoriano como al Estado colombiano con el objetivo de no solo proteger los derechos de los refugiados y solicitantes de refugio colombianos en territorio ecuatoriano y cubrir sus necesidades básicas, sino de ir generando un clima de cooperación que permita, a largo plazo, el

retorno seguro de aquellos refugiados que quieran acogerse a los planes de repatriación voluntaria.

- Se debe fortalecer al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, a sus socios locales y a las instituciones gubernamentales, para que tanto los programas de reasentamiento en terceros países como los proyectos e iniciativas destinados a facilitar la integración local de refugiados y el desarrollo de sus capacidades y funcionamientos sean más efectivos y puedan gozar de una mayor cobertura, no solo en la capital ecuatoriana, sino a nivel nacional.
- Se debe fomentar la participación de más países receptores en los programas de reasentamiento de refugiados para fortalecer a esta figura como un mecanismo de repartición de responsabilidades y aumentar la cobertura de esta solución duradera. Del mismo modo, los países que ya cuentan actualmente con estos programas deberían considerar la posibilidad de ampliar las cuotas anuales de reasentamiento asignadas a cada región.
- Es necesario que tanto los criterios que se toman en consideración al momento de analizar si un refugiado es admisible dentro de un programa de reasentamiento en un tercer país como los procedimientos que se deben llevar a cabo para el efecto, sean analizados nuevamente con el objetivo de garantizar que todas aquellas personas que tienen una necesidad real de reasentamiento sean incluidos de manera efectiva y oportuna dentro de estos proyectos.
- Es preciso que el gobierno estadounidense, en conjunto con las fundaciones e instituciones locales de ayuda a los refugiados, fortalezcan los programas destinados a afianzar la integración local de refugiados reasentados en su territorio, haciendo especial énfasis en el aprendizaje del idioma local como base para la consecución de un empleo con una remuneración y trato dignos y en la importancia de la educación como una herramienta para el desarrollo.

- Por otro lado, todos los actores que participan en los procesos de reasentamiento de refugiados colombianos, es decir, el gobierno local, el ACNUR, sus socios estratégicos locales, el gobierno estadounidense y las instituciones de ayuda a refugiados en el país norteamericano, deben desarrollar estrategias que conjuguen la reunificación familiar de estos refugiados –tomando en cuenta que en el contexto de huida forzada de su país de origen, la fragmentación familiar constituye uno de los mayores retos en los procesos de adaptación de los refugiados –y que presten especial atención a sus particularidades socioculturales para garantizar una mejor integración en el tercer país de acogida.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

Goodwill, G. y McAdam, J. (2008). *The refugee in international law*. Oxford: Oxford University Press

Organización Internacional para las Migraciones (2006). *Diagnóstico: Necesidades y capacidades locales para brindar atención de emergencia a la población colombiana en búsqueda de protección internacional en Ecuador*. Bogotá: Organización Internacional para las Migraciones

Rivera F, et al (2007). *Migración Forzada de Colombianos: Colombia, Ecuador, Canadá*. Medellín: Corporación Región.

UNHCR (2011). *United Nations High Commissioner for Refugees Resettlement Handbook*. Ginebra: United Nations High Commissioner for Refugees

Web

ACCEM (2005). Qué es el reasentamiento de refugiados. Recuperado de http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_reasentamiento/accem_folletoa_que_es_eL_reasentamiento.pdf

ACNUR (1992). *Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados*. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7575.pdf?view=1>

ACNUR (2004). *Manual de reasentamiento capítulo 4*. Recuperado de <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6883.pdf?view=1>

ACNUR (2004). *Manual de reasentamiento capítulo 6*. Recuperado de <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6885.pdf?view=1>

ACNUR (2005). *La determinación del estatuto de refugiado*. Recuperado de <http://www.refworld.org/pdfid/4f58999f2.pdf>

ACNUR(2007). *Guía Práctica para funcionarios de DAS: Recomendaciones de tratamiento ante Solicitantes de la Condición de Refugiado*. Recuperado de <http://www.unhcr.org/50a511a09.pdf>

ACNUR(2007). *Proyectos de Protección Integral (PPI) y Proyectos Comunitarios De Atención Comunitaria Integral (PACIs)*. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/pam/resultados-en-soluciones-duraderas/programas-comunitarios-fronteras-solidarias/>

ACNUR (2008). *Estadísticas sobre refugiados, solicitantes de asilo y otras personas bajo la competencia del ACNUR en América Latina*.

Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/pam>

ACNUR (2008). *Vacíos en la protección Marco de análisis: Mejorando la protección de los refugiados*. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2009/7074>

ACNUR (2010). *Guía informativa: ¿Cómo solicitar refugio en el Ecuador?*. Recuperado de http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Ecuador/Guia_informativa_sobre_refugio_en_Ecuador.pdf?view=1

ACNUR (2010). *Necesidades básicas y acceso a servicios*. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/8062>

ACNUR (2010). *Programas y estrategias del ACNUR 2010-2011*. Recuperado de <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=526a36bf4>

ACNUR (2010). *¿Quién es un refugiado? Guía de preguntas*. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/refugiados/quien-es-un-refugiado/>

ACNUR (2010). *Reasentamiento, un nuevo comienzo en un tercer país*. Recuperado de <http://www.acnur.es/que-hace-acnur/soluciones-duraderas/reasentamiento>

ACNUR (2010). *Registro ampliado: una operación sin precedentes en América Latina*. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/registro-ampliado-una-operacion-sin-precedentes-en-america-latina/>

ACNUR y FLACSO (2011). *Refugiados Urbanos en Ecuador (Resumen Ejecutivo)* Recuperado de <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7530.pdf?view=1>

ACNUR (2012). *Decreto 1182*. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8604.pdf?view=1>

ACNUR (2014). *Asistencia*. Recuperado <http://www.acnur.org/t3/que-hace/asistencia/>

ACNUR (2014). *El ACNUR en Ecuador*. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/donde-trabaja/america/ecuador/>

ACNUR (2014). *Historias de microcrédito*. Recuperado de http://www.acnur.org/t3/que-hace/autosuficiencia/historias-de-microcredito/?sav_library=908ff5c6fd002195014

ACNUR y MRECI (2009). *Población colombiana en Necesidad de Protección Internacional*. Recuperado de http://www.pamacnur2010.com/index_files/EcuadorEncuesta.pdf

- Andrade, D (2012). *Limitaciones del acceso a la educación, hijos de refugiados colombianos: un estudio de caso*. Recuperado de <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4951>
- Ayala, C. (2010). *La vivienda: una necesidad y un derecho humano*. Recuperado de <http://alainet.org/active/42425>
- Casassas, D. (2006). *Desarrollo como Libertad, entrevista con Amartya Sen*. Recuperado de redalyc.uaemex.mx/.../ForazarDescargaArchivo.js
- Cevallos, V. y García, M. (2012). *Análisis estadístico de los refugiados colombianos en el Ecuador según el proyecto Registro Ampliado*. Recuperado de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1616/1/T-UCE-0005-222.pdf>
- CINOR (2012). *Área de empleo – la bolsa de empleo del CINOR*. Recuperado De <http://www.hias.org.ec/>
- Coalición por las migraciones y el refugio (2011). *Examen periódico universal*. Recuperado de http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/EC/CMR_UPR_ECU_S13_2012_CoalicionporlasMigracionesyelRefugio_S.pdf
- CODHES (2011). *El refugio en Ecuador: el dilema de los derechos frente a la seguridad*. Recuperado de [http://www.fosin.net.ec/documentos/CODH ESEcuadorInformaNo1Sept2011Final.pdf](http://www.fosin.net.ec/documentos/CODH%20EcuadorInformaNo1Sept2011Final.pdf)
- Comisión Colombiana de Juristas (2012). *Refugiados y Ley de Víctimas : Impactos de la Ley de Víctimas en la situación de las personas que se encuentran en necesidad de protección internacional*. Recuperado de http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/refugiados_y_ley_de_victimas.pdf
- Consejo Económico Y Social De Las Naciones Unidas (2009). *Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Tercer informe periódico, presentados de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto: ECUADOR*. Recuperado de https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pidhddecuador.org%2Fattachm ents%2F030_III%2520informe%2520DESC%2520Ecuador.doc&ei=Om1mU7_vGLixsATH3IDYDw&usg=AFQjCNHJj4cvGHNBEbts42T9bSc07dyETg&bvm=bv.65788261,d.cWc
- Consejo Permanente de la OEA (2008). *Informe: Sesión especial sobre temas de actualidad del Derecho Internacional de los Refugiados*. Recuperado de https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFYQFjAH&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2FCP-CAJP_2570-08_rev1_corr1_esp.doc&ei=4fBSU-jeDuihsASzplC4AQ&usg=AFQjCNEibcgyXbK9xi8vgNfilLyLozWji6A&bvm=bv.65058239,d.cWc

- Diario Extra (2010). *Colombiano se viró a un ecuatoriano*. Recuperado de <http://www.diario-extra.com/ediciones/2010/09/18/provincias/colombiano-se-viro-a-un-ecuatoriano/>
- Diario Extra (2010). *Cubana degollada por un colombiano*. Recuperado de <http://www.diario-extra.com/ediciones/2010/06/07/cronica/cubana-degollada-por-un-colombiano/>
- Diario Hoy (2009). *Capturan a banda de narcotraficantes integrada por colombianos y ecuatorianos*. Recuperado de <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/capturan-a-banda-de-narcotraficantes-integrada-por-colombianos-y-ecuatorianos-367232.html>
- Diario Hoy (2006). *Ecuador, "país generoso para refugiados"*. Recuperado de <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-pais-generoso-para-refugiados-237532.html>
- Diario Hoy (2011). *Servicios financieros para refugiadas*. Recuperado de <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/servicios-financieros-para-refugiadas-469586.html>
- Dobbs, L. (2014). *Ecuador: Panadero colombiano amasa su futuro con la ayuda de ACNUR*. Recuperado de <http://www.acnur.es/noticias/historias-con-rostro/207-ecuador-panadero-colombiano-amasa-su-futuro-con-la-ayuda-de-acnur>
- Eide, A. (2003). *El derecho humano a una alimentación adecuada y a no padecer hambre*. Recuperado de <http://www.bvsde.paho.org/texcom/nutricion/pr21.pdf>
- El Comercio (2013). *Solo el 0,2% de refugiados en Ecuador tiene líos con la ley*. Recuperado de http://www.elcomercio.com.ec/seguridad/Solo-refugiados-lios-Ley_0_718728360.html
- El Universo (2010). *Delincuentes se mimetizan entre los miles de refugiados*. Recuperado de <http://www.eluniverso.com/2010/12/19/1/1447/delincuentes-mimetizan-miles-refugiados.html>
- Espín, J (2010). *Hechos y expectativas del registro ampliado*. Recuperado de http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/2897/4/Boletin_Fronteras_No_3-mayo_2010.pdf
- Feller, E. (2006), *Tendencias globales en el reasentamiento de refugiados: Desafíos y oportunidades*, Recuperado de <http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4a5b2e3a2.pdf>
- FLACSO (2010). *El registro ampliado: implicaciones solidarias y oportunidades del refugio en Ecuador*. Recuperado de http://www.flacsoandes.org/web/ima_gesFTP/13680.SIMA2.pdf

- Gil, M. (2006). *Refugiado: definición y protección*. Recuperado de <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/183>
- Golay, C. y Özden, M. (2007). *El derecho a la vivienda*. Recuperado de <http://www.cetim.ch/es/documents/bro7-log-A4-es.pdf>
- HIAS, (2012). *Integración local*. Recuperado de <http://www.hias.org.ec/>
- HIAS, (2013). *Ecuador Humanitarian Assistance Program*. Recuperado de <http://www.hias.org/en/pages/ecuador-humanitarian-assistance-program>
- HIAS, (2013). *Psychosocial Assistance Program for Colombian Refugees in Ecuador*. Recuperado de <http://www.hias.org/en/pages/psychosocial-assistance-program-for-colombian-refugees-in-ecuador>
- ICMC (2007). Reasentamiento de refugiados. Recuperado de <http://www.icmc.net/type/reasentamiento-de-refugiados>
- Instituto Nacional de Estadística (2008). Recuperado de http://www.ine.es/daco/daco42/sociales/transmision_g.pdf
- Izquierdo, A. et al (2004). *Alimentación saludable*. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03192004000100012&script=sci_arttext
- Jefferys, K. (2006). *Refugees and asylees: 2005*. Recuperado de http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/Refugee_Asylee_5.pdf
- Jiménez, J. (2007). *La población refugiada colombiana en Ecuador 2000 – 2007*. Recuperado de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/810/1/T471-MRI-Jim%C3%A9nez-La%20poblaci%C3%B3n%20colombiana%20refugiada%20en%20Ecuador.pdf>
- La Hora (2004). *Miedo y discriminación al llegar al Ecuador*. Recuperado de http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000297117/-1/Miedo_y_discriminaci%C3%B3n_al_llegar_a_Ecuador.html#.UwAPoGJ5NGA
- Lara, J. (2010). *Pastoral de Movilidad Humana de Carchi: Una posición ante el Registro ampliado*. Recuperado de http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/2897/4/Boletin_Fronteras_No_3-mayo_2010.pdf
- Lobo, B. (2008). *Xenofobia, racismo y refugiados*. Recuperado de <http://www.contravientoymarea.org/factualweb/es/3.2/articles/Xenophobia.html>
- Long, K. (2009). Informe de investigación No. 176. ¿Una extensión de la protección? Migración laboral y soluciones duraderas para los refugiados. Recuperado de <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5175159b4>
- Martin, D. (2010). *Refugees and asylees: 2009*. Recuperado de https://www.immigrationlinks.com/attachments/1842_1842_Refugees_and_Asylees_2009.pdf

- Martin, D. y Hoefer, M. (2009). *Refugees and asylees: 2010*. Recuperado de http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ois_rfa_fr_2008.pdf
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (2008). *Política del Ecuador en materia de Refugio*. Recuperado de http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Ecuador/Politica_del_Ecuador_en_materia_de_refugio.pdf?view=1
- Misión Escalabriniana (2014). *Visión de la Misión Escalabriniana Ecuador*. Recuperado de <http://www.misionscalabriniana.org.ec/>
- Moscoso, A. (2007). *Derecho Internacional de Refugiados*. Recuperado de <http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/783/1/06904.pdf>
- Muy, S. (2014). *“El carnet de refugio no nos sirve aquí: Refugiados colombianos en Ecuador*. Recuperado de http://asylumaccess.org/AsylumAccess/wp-content/uploads/2014/02/SebastianMuy_revista_alemana_ES.pdf
- OACNUDH (2012). *Protocolo del Estatuto sobre los Refugiados*. Recuperado de http://www2.ohchr.org/spanish/law/refugiados_protocolo.htm
- OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT (2014). *About microenterprise development*. [Hhttp://www.acf.hhs.gov/programs/orr/programs/microenterprise-development/about](http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/programs/microenterprise-development/about)
- OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT (2005). *Annual ORR Reports to Congress - 2005: II. Refugees in the United States*. Recuperado de <http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/resource/annual-orr-reports-to-congress-2005-ii-refugees-in-the-united-states#Employment>Status>
- OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT (2006). *Annual ORR Reports to Congress – 2006*. Recuperado de http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/orr/annual_orr_report_to_congress_2006.pdf
- OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT (2007). *Annual ORR Reports to Congress – 2007*. Recuperado de http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/orr/annual_orr_report_to_congress_2007.pdf
- OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT (2008). *Annual ORR Reports to Congress – 2008*. Recuperado de http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/orr/annual_orr_report_to_congress_2008.pdf
- OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT (2009). *Annual ORR Reports to Congress – 2009*. Recuperado de https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/orr/fy_2009_annual_report_to_congress.pdf
- OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT (2010). *Annual ORR Reports to*

Congress – 2010. Recuperado de https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/orr/fy_2010_arc_final.pdf

OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT (2012). *Fiscal Year 2005 Refugee Arrivals*. Recuperado de <http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/resource/fiscal-year-2005-refugee-arrivals>

OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT (2012). *Fiscal Year 2006 Refugee Arrivals*. Recuperado de <http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/resource/fiscal-year-2006-refugee-arrivals>

OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT (2012). *Fiscal Year 2007 Refugee Arrivals*. Recuperado de <http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/resource/fiscal-year-2007-refugee-arrivals>

OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT (2012). *Fiscal Year 2008 Refugee Arrivals*. Recuperado de <http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/resource/fiscal-year-2008-refugee-arrivals>

OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT (2012). *Fiscal Year 2009 Refugee Arrivals*. Recuperado de <http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/resource/fiscal-year-2009-refugee-arrivals>

OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT (2012). *Fiscal Year 2010 Refugee Arrivals*. Recuperado de <http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/resource/fiscal-year-2010-refugee-arrivals>

OFFICE OF REFUGEE RESETTLEMENT (2014). *History*. Recuperado de <http://www.acf.hhs.gov/programs/orr/about/history>

Ordóñez, F. (2011). *Estudio de los efectos psicológicos provocados por la situación de refugio en niños/as de nacionalidad colombiana que se encuentran en edad escolar*. Recuperado de <http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1328/12/Ecuador%20pais%20de%20refugiados.pdf>

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (2014). *Asistencia de reasentamiento*. Recuperado de <http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/what-we-do/resettlement-assistance.html>

Ortega, C. y Ospina, O (2012). “No se puede ser refugiado toda la vida...” *Refugiados urbanos: el caso de la población colombiana en Quito y Guayaquil*. Recuperado de <http://www.flacsoandes.org/biblio/catalog/resGet.php?resId=51518>

Pizarro, N. (2008). *El desplazamiento humano en Colombia: ¿Disminuye o aumenta?*. Recuperado de http://www.observatori.org/documents/Desplazamiento_humano_en_Colombia.pdf

PNUD (2008). *1er. Encuentro de directores y editores de medios de comunicación de Colombia y Ecuador*. Recuperado de <http://www.diario->

extra.com/ediciones/2010/06/07/cronica/cubana-degollada-por-un-colombiano/

REACH OUT REFUGEE PROTECTION TRAINING PROJECT (2005). *Módulo 9: Soluciones duraderas*. Recuperado de https://icvanetwork.org/system/files/versions/ro_20_module9_es.pdf

REFUGEE COUNCIL (2014). *DHS/USCIS Adjudication and Appeal Procedure*. Recuperado de <http://www.rcusa.org/adjudication-and-appeal>

REFUGEE COUNCIL (2014). *Major administrative agencies*. Recuperado de <http://www.rcusa.org/major-administrative-agencies>

REFUGEE COUNCIL (2014). *History of the U.S. Refugee Resettlement Program*. Recuperado de <http://www.rcusa.org/history>

REFUGEE COUNCIL (2014). *Post acceptance processing*. Recuperado de <http://www.rcusa.org/post-acceptance-processing>

REFUGEE COUNCIL (2014). *Post arrival assistance and benefits*. Recuperado de <http://www.rcusa.org/post-arrival-assistance-and-benefits>

Robenys, I. (2011). *The capability approach*. Recuperado de <http://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/>

Rue, J. (2008). *¿Qué es el reasentamiento de refugiados?*. Recuperado de http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/01_Refugee_Protection/2008-01-01_Resettlement_Factsheet_ES.pdf

SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS (2013). *Derecho a la educación en contexto de movilidad humana*. Recuperado de <http://www.sjr.org.ec/Acceso-al-sis-tema-educativo.html>

SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS. *Temas de trabajo*. Recuperado de <http://www.sjr.org.ec/-Temas-de-trabajo-.html>

Schussler, S. (2009). *Entre la sospecha y la ciudadanía: refugiados colombianos en Quito*. Recuperado de https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CD8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.flacso.org.ec%2Fbiblio%2Fcatalog%2FresGet.php%3FresId%3D42691&ei=WGREUfK-GpK4APj04G4Cg&usq=AFQjCNGCIN1i_jyGUnGN_IHFNqLGbBjU6g&sig2=bKM_uIW6-JTkk6xu9OuhA&bvm=bv.43828540,d.eWU

Shedlin, M.G. et al (2012). *Salud y condiciones de vida de los refugiados colombianos en Quito*. Recuperado de <http://www.funsad.org/Material/Material/INVESTIGACIONES/Saludcolombianosquito.pdf>

Spindler, W. (2005). *Con esfuerzo y determinación, refugiados colombianos salen adelante*. Recuperado de http://www.acnur.org/index.php?id_pag=3628

THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA (2013). *Country Chapter USA*. Recuperado de <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=country&docid=52a077740&skip=0&coi=USA&querysi=resettlement&searchin=title&sort=date>

THE LIBRARY OF CONGRESS (2014). *Bill Summary & Status 96th Congress (1979 - 1980) S.643 CRS Summary*. Recuperado de <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d096:SN00643:@@@D&summ2=m&>

UNHCR (2004). *Principes Directeurs sur la Protection Internationale « L'appartenance à un certain groupe social » dans le cadre de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés* Recuperado de <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487e10d82>

UNHCR (2008). *UNHCR Guidance Note on Refugee Claims Relating to sexual orientation and gender identity*. Recuperado de <http://www.refworld.org/docid/48abd5660.html>

UNHCR (2008). *Principes Directeurs sur la Protection Internationale « L'appartenance à un certain groupe social » dans le cadre de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés* Recuperado de <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=487dc4f62>

UNHCR(2010). *The Heightened Risk Identification Tool (User Guide)*. Recuperado de <http://www.refworld.org/docid/46f7c0cd2.html>

UNHCR (2014). *Partnership in Resettlement*. Recuperado de <http://www.unhcr.org/pages/4a16c9246.html>

UNICEF (2013). *Educación para todos los niños*. Recuperado de <http://www.unicef.es/infancia/educacion-para-todos-los-ninos>

U.S. CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES. *Refugees*. Recuperado de <http://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/refugees>

U.S. DEPARTMENT OF STATE (2011). *Refugee admissions reception and Placement program*. Recuperado de <http://www.state.gov/j/prm/releases/factsheets/2011/181029.htm>

U.S. DEPARTMENT OF STATE (2014). *Refugee admissions*. Recuperado de <http://www.state.gov/j/prm/ra/>

U.S. DEPARTMENT OF STATE (2014). *Refugee Admissions Program for Latin American and the Caribbean*. Recuperado de <http://www.state.gov/j/prm/releases/onepagers/181042.htm>

U.S. DEPARTMENT OF STATE (2014). *Refugee Resettlement in the United States* Recuperado de <http://www.state.gov/j/prm/releases/factsheets/2013/203578.htm>

U.S. DEPARTMENT OF STATE (2014). *The reception and placement program*. Recuperado de <http://www.state.gov/j/prm/ra/receptionplacement/index.Htm>

Van Dijk, T. (2001). *La responsabilidad de los medios de comunicación*. Recuperado de <http://www.discriminacion.org/libro1-cap10.php>

Villacrés, P. (2009). *La industria del sexo en Quito: representación sobre las trabajadoras sexuales colombianas*. Recuperado de https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2F repositorio.uisek.edu.ec%2Fjspui%2Fbits tream%2F123456789%2F247%2F1%2FCONSECUENCIAS%2520JUR%25C3%258DDICAS%2520DE%2520LA%2520CONCESI%25C3%2593N%2520DE%2520REFUGIO%2520POR%2520EL%2520DESPLAZAMIENTO%2520FORZOSO%2520DE%2520LOS%2520CIUDADANOS%2520COLOMBIANOS%2520AL%2520ECUADOR.pdf&ei=XFrtUp2oK8iokQe8uIDwBw&u sg=AFQjCNEpShTTlbpUUG0yhe7YkNA_KSDEg

Entrevistas

Anizares, A. Solicitante de refugio, colombiano. Consultoría (2014). Condiciones de vida de los refugiados colombianos en Quito

Atehortua, A. Solicitante de refugio, colombiano. Consultoría (2013). Condiciones de vida de los refugiados colombianos en Quito

González, J. Solicitante de refugio, colombiano. Consultoría (2014). Condiciones de vida de los refugiados colombianos en Quito

Hernández, J. Refugiado colombiano. Consultoría (2013). Condiciones de vida de los refugiados colombianos en Quito

Jara, V. Unidad de Reasentamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados - Ecuador. Consultoría (2014). Reasentamiento de refugiados colombianos en Estados Unidos.

Leoro, A. Unidad de Protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Consultoría (2014). Reasentamiento de refugiados colombianos en Estados Unidos.

Pérez, D. Vendedora ambulante. Consultoría (2014). Presencia de vendedores ambulantes colombianos en la ciudad de Quito.

Pérez, M. Abogada experta en asuntos de extranjería. Consultoría (2014). El proceso de solicitud de refugio en el Ecuador entre los años 2005 y 2010

Romero, S. Asistente humanitaria en la Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados HIAS. Consultoría (2014). Condiciones de vida de los refugiados colombianos en Quito.

Rubio, I. Propietaria de una boutique. Consultoría (2014). Contratación de Personal colombiano

Salavarría, A. Solicitante de refugio, colombiano. Consultoría (2014). Condiciones de vida de los refugiados colombianos en Quito

Artículos de revistas

Quintana, M. (2011, abril, 09). *20.000 personas esperan ser reconocidas como refugiadas en el Ecuador. Revista vistazo*. Recuperado de <http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=14985>